

UnB

Universidade de Brasília (UnB)
Instituto de Ciencias Sociales (ICS)
Departamento de Estudos Latino-americanos
Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Americas
(PPGECsA)

**La radicalización de las derechas (2020 – 2022) y su influencia en el
escenario político peruano.**

Discente: Victor Cardenas

Orientador: Camilo Negri

Brasília

2025

La radicalización de las derechas (2020 – 2022) y su influencia en el escenario político peruano.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Sociais.

Linha de Pesquisa: Sociedade, Estado e Política nas Américas.

Orientador: Prof. Dr. Camilo Negri.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Brasília

2025

DEDICATORIA

A los trabajadores latinoamericanos que a lo largo de la historia han llenado plazas y abierto alamedas. En nuestras manos llevamos su llamada.

RESUMEN

Este estudio analiza la influencia del crecimiento y la radicalización de la derecha peruana entre 2020 y 2022, centrándose en el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori como la principal fuerza política del espectro de la derecha. El objetivo principal es comprender cómo la radicalización de la derecha ha influido en la dinámica política del Perú en un contexto de crisis sociopolítica y desgaste del modelo neoliberal, evaluando el papel del fujimorismo en este proceso. La hipótesis plantea que el fujimorismo ha transitado de un conservadurismo pragmático hacia un conservadurismo radicalizado, aprovechando la inestabilidad política y social para reposicionarse como una fuerza hegemónica que busca contener la erosión del orden neoliberal mediante estrategias autoritarias y polarizadoras. Se utilizó un enfoque cualitativo basado en el análisis de discursos públicos, narrativas mediáticas, posicionamientos institucionales, documentos legislativos, redes sociales y estudios académicos. Esta metodología permitió contextualizar históricamente la radicalización de la derecha y analizar su expresión concreta en el accionar de Fuerza Popular. La pesquisa concluye que la radicalización de la derecha en Perú ha exacerbado la polarización y debilitado la estabilidad democrática. Factores históricos, como el legado autoritario del fujimorismo y la implementación de un modelo neoliberal excluyente, se combinaron con factores coyunturales –como las crisis políticas desde 2016, las vacancias presidenciales y los conflictos sociales– para crear un caldo de cultivo propicio para la radicalización conservadora. En este escenario, Fuerza Popular ha consolidado su liderazgo defendiendo el legado de Alberto Fujimori y utilizando discursos de orden y anticomunismo para movilizar su base, fortaleciendo su posición como eje articulador de la derecha radicalizada en el país.

Palabras claves: Radicalización. Derecha. Conservadurismo radicalizado. Fujimorismo. Fuerza Popular. Crisis política. Neoliberalismo. Política latinoamericana.

ABSTRACT

This study examines the growth and radicalization of the Peruvian right between 2020 and 2022, focusing on Fuerza Popular (Popular Force) and its leader, Keiko Fujimori, as the dominant political force within the right-wing spectrum. The primary objective is to understand how the radicalization of the right has shaped Peru's political dynamics amid a sociopolitical crisis and the decline of the neoliberal model, while also assessing the role of Fujimorismo in this process. The central hypothesis argues that Fujimorismo has shifted from pragmatic conservatism toward radicalized conservatism, exploiting political and social instability to reposition itself as a hegemonic force seeking to curb the erosion of the neoliberal order through authoritarian and polarizing strategies. This study employs a qualitative approach, analyzing public discourse, media narratives, institutional positions, legislative records, social media, and academic literature. This methodology enables both a historical contextualization of the right's radicalization and a concrete analysis of its manifestations in Fuerza Popular's actions. The research concludes that the radicalization of the right in Peru has deepened polarization and undermined democratic stability. Structural factors –such as Fujimorismo's authoritarian legacy and the exclusionary nature of the neoliberal model– have converged with contingent factors (e.g., political crises since 2016, presidential vacancies, and social conflicts), creating fertile ground for conservative radicalization. In this context, Fuerza Popular has consolidated its leadership by defending Alberto Fujimori's legacy and deploying law-and-order rhetoric and anti-communist discourse to mobilize its base, reinforcing its role as the nucleus of Peru's radicalized right.

Keywords: Radicalization. Right-wing. Radicalized conservatism. Fujimorism. Popular Force. Political crisis. Neoliberalism. Latin American politics.

RESUMO

Este estudo analisa a influência do crescimento e da radicalização da direita peruana entre 2020 e 2022, com foco no caso do Fuerza Popular e de Keiko Fujimori como a principal força política do espectro da direita. O objetivo principal é compreender como a radicalização da direita influenciou a dinâmica política do Peru em um contexto de crise sociopolítica e desgaste do modelo neoliberal, avaliando o papel do fujimorismo nesse processo. A hipótese central propõe que o fujimorismo transitou de um conservadorismo pragmático para um conservadorismo radicalizado, aproveitando a instabilidade política e social para se reposicionar como uma força hegemônica que busca conter a erosão da ordem neoliberal por meio de estratégias autoritárias e polarizadoras. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, baseada na análise de discursos públicos, narrativas midiáticas, posicionamentos institucionais, documentos legislativos, redes sociais e estudos acadêmicos. Essa metodologia permitiu contextualizar historicamente a radicalização da direita e analisar sua expressão concreta nas ações do Fuerza Popular. A pesquisa conclui que a radicalização da direita no Peru intensificou a polarização e enfraqueceu a estabilidade democrática. Fatores históricos –como o legado autoritário do fujimorismo e a implementação de um modelo neoliberal excludente– combinaram-se com fatores conjunturais (como as crises políticas desde 2016, os impeachments presidenciais e os conflitos sociais) para criar um cenário propício à radicalização conservadora. Nesse contexto, Fuerza Popular consolidou sua liderança defendendo o legado de Alberto Fujimori e utilizando discursos de ordem e anticomunismo para mobilizar sua base, reforçando seu papel como eixo articulador da direita radicalizada no país.

Palavras-chave: Radicalização. Direita política. Conservadorismo radicalizado. Fujimorismo. Força Popular. Crise política. Neoliberalismo. Política da América Latina.

Sumario

Introducción	1
I- Marco teórico	5
1- Múltiples crisis globales, auge y crisis del neoliberalismo	5
1.1 Neoliberalismo como estrategia de desarrollo ante la crisis	7
1.2 Crisis global del 2008 y crisis sanitaria del 2020	10
2- Desarrollo de las derechas en el marco del neoliberalismo	13
2.1 Nueva generación de derechas	15
3- Las nuevas derechas radicales en América Latina	16
4- Análisis de conceptos y definiciones adoptadas	20
4.1 Perspectivas conceptuales sobre las nuevas derechas	20
4.2 Análisis de las perspectivas expuestas	27
4.3 Alcances para el análisis en América Latina	29
5- Camino metodológico	31
II- La larga crisis política y social peruana	33
1- Breve contextualización del periodo fujimorista	33
2- Las promesas de la transición	35
2.1 La agenda sociopolítica contra el fujimorismo	35
2.2 El gobierno de transición y las reformas	37
2.3 El Acuerdo Nacional	38
3- La democracia neoliberal post-fujimorista	39
3.1 Modernización neoliberal del Estado	40
3.2 La economía y el trabajo	46
3.3 La sociedad y los conflictos sociales	54
4- La rearticulación del fujimorismo	63
III- Crisis política, estallidos sociales y radicalización de las derechas 2020 – 2022 ..	67
1- Introducción	67
1.1 El gobierno de Vizcarra	69
1.2 Confrontación con el Congreso	69
1.3 Cierre del Congreso	70
1.4 Elecciones parlamentarias extraordinarias	71
2- La situación política entre 2020 y 2022	72
2.1 El “golpismo” del Congreso y las protestas de noviembre de 2020	73
2.2 Las elecciones de 2021 y la polarización	74

2.3 El gobierno de Castillo y la estrategia de desgaste	75
3- La destrucción deliberada de las reglas y la reestructuración del Estado	76
3.1 Defensa del modelo, políticas contra los trabajadores	76
3.2 Ruptura de las reglas informales	78
3.3 Reestructuración de las instituciones	80
4- Guerra cultural: Polarización y la escenificación mediática, campaña permanente y realidades paralelas	82
4.1 La polarización como estrategia	82
4.2 Escenificación mediática y campaña permanente	91
4.3 Realidades paralelas	95
A modo de conclusiones	99
Referencias bibliográficas	103

Introducción

En diversas regiones del mundo, la derecha radical está ganando terreno, y en Latinoamérica ha consolidado su presencia política, llegando al gobierno en varios países en los últimos años. Este auge se produce tras un período de gobiernos progresistas y de izquierda, llamado también por diversos analistas como la 'marea roja' o ciclo progresista. Todo ello ocurre en un contexto global de crisis múltiples: la crisis de la hegemonía de la globalización neoliberal, el impacto social de la pandemia de COVID-19 y el creciente desencanto con las instituciones democráticas, entre otros factores.

En Perú, luego del gobierno autoritario de Alberto Fujimori y la coalición cívico-militar que lo sostuvo, la transición democrática estuvo marcada por crecientes movilizaciones sociales desde los últimos años del régimen fujimorista y por el Acuerdo Nacional, que sintetizó consensos políticos en el nuevo contexto post-fujimorista. Las demandas de las movilizaciones y los compromisos del Acuerdo Nacional expresaban una voluntad de reformar sustancialmente el modelo neoliberal implementado en la década de 1990; sin embargo, los gobiernos sucesivos profundizaron las políticas neoliberalizantes. El impulso reformista de la transición fue relegado y en los años posteriores el panorama sociopolítico ha estado marcado por crecientes conflictos sociales y socioambientales relacionados a políticas de redistribución y a las industrias extractivas, la polarización política y electoral en las elecciones presidenciales y legislativas; así como por tensiones de larga data como la desigualdad y el racismo estructural.

Paralelamente, desde la transición democrática, los distintos sectores que conformaban el gobierno fujimorista se reorganizaron, reinventaron y adaptaron a los nuevos contextos. En los últimos años, estos sectores se han radicalizado, adoptando estrategias y posturas políticas alineadas con las derechas radicales de la región, consolidándose como la principal fuerza política de derecha en Perú desde 2016.

En los últimos años, Perú ha atravesado episodios críticos que han reconfigurado su escenario sociopolítico. Los impactos sociales y económicos de la pandemia, las revueltas sociales de 2020 y la polarización exacerbada durante las elecciones de 2021 y su período post-electoral son algunos de los episodios más significativos. A esto se suma el persistente conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, que incluyó varios intentos de destitución presidencial y culminó con el intento del entonces presidente Pedro Castillo

de instaurar un gobierno de excepción en 2022. La destitución inmediata de Castillo por parte del Congreso llevó a la vicepresidenta Dina Boluarte a asumir la presidencia. Con el respaldo de las fuerzas de derecha en el parlamento, Boluarte conformó un gobierno de coalición entre el Congreso y el Ejecutivo, que ha mantenido una estabilidad autoritaria pese a las intensas protestas y movilizaciones sociales que le siguieron.

En este contexto, las derechas peruanas han radicalizado sus posiciones en los últimos años, adoptando narrativas y discursos que circulan entre las derechas radicales de la región. Entre ellas, destacan las teorías sobre una supuesta captura de países latinoamericanos por gobiernos de inspiración comunista o la lucha contra la llamada “ideología de género”. Además, mediante el uso de recursos de propaganda y agitación, han impulsado campañas de movilización en la que han emergido una serie de organizaciones y colectivos con distintos grados de radicalismo de derecha. Con el gobierno de Boluarte alineado con buena parte de estas narrativas, todo indica que un autoritarismo creciente se está consolidando a medida que estos sectores amplían su control sobre más espacios de poder.

¿Cuál es la influencia de la radicalización de la derecha en el escenario político? En un país cuyo panorama sociopolítico está marcado por una alta conflictividad social – en gran parte vinculada a conflictos socioambientales– y por reiteradas polarizaciones electorales entre agendas de reforma o continuidad del modelo neoliberal de desarrollo, la radicalización de las derechas ha intensificado la crisis sociopolítica de los últimos años, contribuyendo a una reconfiguración del escenario político.

Nuestra hipótesis plantea que una manera de comprender la influencia de la radicalización de las derechas en el escenario político peruano, en un contexto de crisis del neoliberalismo, es a través de la perspectiva del “conservadurismo radicalizado”. Esta noción, trabajada por Natascha Strobl, sostiene que, en el contexto convulso de la crisis de la globalización neoliberal, ha ocurrido un crecimiento de vertientes radicales de derecha que empujan a sectores tradicionalmente conservadores hacia un creciente radicalismo. Este proceso busca contener la erosión de la hegemonía actual y reemplazarla por una hegemonía de corte autoritario. El conservadurismo radicalizado, en este sentido, se diferencia de otras interpretaciones que entienden la radicalización de las derechas como un fenómeno populista o como expresiones neofascistas, abordadas por autores como Cas Mudde y Enzo Traverso, respectivamente. Así, sostenemos que el fujimorismo, desde 2020 en adelante, ha transitado de un conservadurismo pragmático

hacia rasgos propios del conservadurismo radicalizado. No obstante, si bien podríamos considerar que este tránsito ocurre entre las distintas vertientes de las derechas peruanas, el presente trabajo se centrará en analizar el caso de Fuerza Popular y el liderazgo de Keiko Fujimori.

El objetivo de este trabajo es analizar la radicalización de las derechas en el Perú entre 2020 y 2022, y su influencia en el escenario político. Para ello, nos enfocamos en el rol de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, al ser la principal fuerza política de derecha tras la fragmentación del sector tecnocrático y liberal que acompañó al gobierno de PPK entre 2016 y 2018, pero que tuvo una presencia clave en todos los gobiernos posteriores al retorno a la democracia. El período analizado ha estado marcado por múltiples episodios de crisis política y conflictos sociales: cinco presidentes de la república, dos estallidos sociales sin precedentes en las últimas décadas y una movilización activa de las derechas, no vista con tal intensidad desde las protestas de 1987 contra la iniciativa de nacionalización de la banca privada durante el primer gobierno de Alan García¹.

La presente investigación se desarrollará a través de un enfoque cualitativo, que permitirá profundizar en la temática mediante el análisis de un caso específico, aportando así al estudio de las derechas en la región. Este enfoque brinda la flexibilidad necesaria para abordar un fenómeno en pleno desarrollo, como la radicalización de las derechas en el Perú. La metodología se basará en la recopilación y contraste de diversas fuentes, incluyendo discursos públicos, narrativas mediáticas y posicionamientos institucionales de las organizaciones que componen el campo de las derechas conservadoras, con especial énfasis en Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Las fuentes se organizarán en cuatro categorías principales: a) documentación oficial y discursos públicos, que abarcan comunicados, manifiestos y declaraciones de líderes políticos; b) redes sociales de partidos y figuras clave, para captar discursos y reacciones inmediatas; c) análisis de fuentes legislativas, como proyectos de ley y debates parlamentarios, que permitan identificar tendencias vinculadas al conservadurismo radicalizado; y d) investigaciones periodísticas y académicas, que ofrecerán contextos adicionales y perspectivas críticas. Este enfoque cualitativo facilitará un análisis detallado y contextualizado del fenómeno,

¹ EL PAÍS, Vargas Llosa encabeza la mayor concentración de la derecha peruana en los últimos años, 23 ago. 1987.

contribuyendo a una comprensión más amplia de la radicalización de la derecha en el Perú y su vinculación con los procesos regionales.

Esta investigación se organiza en tres capítulos principales. El Capítulo I presenta el marco teórico, explorando las múltiples crisis globales, el auge y la crisis del neoliberalismo, y el desarrollo de las derechas en este contexto. Se analizan las nuevas derechas radicales en América Latina, así como las perspectivas conceptuales y definiciones adoptadas para el estudio. Además, se detalla el camino metodológico que orienta la investigación. El Capítulo II se enfoca en la prolongada crisis sociopolítica en Perú, comenzando con una contextualización del período fujimorista, las promesas de la transición democrática y la consolidación de la democracia neoliberal post-fujimorista. Se examinan las transformaciones económicas, sociales y políticas, así como la rearticulación del fujimorismo en este nuevo contexto. Finalmente, el Capítulo III analiza la crisis política, los estallidos sociales y la radicalización de las derechas entre 2020 y 2022, abordando temas como la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, las elecciones de 2021, el gobierno de Castillo, la guerra cultural y la polarización como estrategia política. Las conclusiones sintetizan los hallazgos y reflexiones finales sobre el fenómeno estudiado.

Capítulo I

Marco teórico

1- Múltiples crisis globales, auge y crisis del neoliberalismo

El mundo atraviesa hoy una serie de crisis múltiples y paralelas que han ido instalándose como parte de la normalidad. Así transitamos actualmente por conflictos geopolíticos, crisis políticas, económicas, ambientales y recientemente la crisis sanitaria producto de la pandemia del covid-19. Los efectos de estas crisis persisten y se enmarcan como el contexto general en el que observamos el crecimiento de fuerzas políticas de derecha radical con agendas contrarias a la lucha contra las desigualdades, la democracia, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, etc. (STROLB, 2022).

Después de la Segunda Guerra Mundial se constituyó un orden global que buscaba preservar, principalmente en occidente, la hegemonía de los Estados Unidos, la protección de sus aliados y la contención de lo que ellos denominaban la ‘amenaza soviética’. En ese contexto de postguerra se va a generar la idea de un régimen de ‘legítima protección’ (PAYNE Y SILVER, 2022), que gramscianamente fue pensado en términos de dominación/consentimiento y que se apoyaba en dos pilares: en una esfera geopolítica militar y en una esfera socioeconómica.

En la esfera militar parte de los pactos involucraba la creación de un sistema de seguridad bajo hegemonía de los Estados Unidos para contener cualquier amenaza a occidente y sus aliados. La esfera socioeconómica es importante ya que a través de ella se ofrecía una alternativa política a las planteadas por los movimientos revolucionarios, esta alternativa implicaba, según Payne y Silver (2022), que el sueño americano y el sueño de consumo en masa en los países centrales era factible a través de los estados de bienestar, mientras que, en los países periféricos, la ilusión de alcanzar el desarrollo de los países centrales se presentaba como posible.

Así, el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial buscó establecer un marco que previniera una crisis económica como la que ocurrió en la década de 1930 y la polarización geopolítica que condujo al conflicto. En este contexto, en los países centrales se logró un equilibrio mínimo en la relación entre capital y trabajo, asignando al Estado el papel de garante del bienestar social, promotor de políticas de pleno empleo y desarrollo económico (HARVEY, 2007). En el caso de Sudamérica, el período de posguerra estuvo marcado por la influencia de las políticas desarrollistas impulsadas por

la CEPAL, que se plantearon como una estrategia para superar la condición de 'subdesarrollo'. Estas políticas se centraron en lograr la industrialización a través de la sustitución de importaciones y en la perspectiva de construir un mercado común latinoamericano.

Esta configuración global comenzó a entrar en crisis a partir de la década de 1970, impulsada por diversos factores. Entre ellos, la creciente fuerza de los sindicatos, que limitaba las tasas de ganancias de los capitalistas (HARVEY, 2007); la erosión de las reservas de oro, que contribuyó a la inestabilidad financiera (FOUSKAS et al., 2021); el impacto de la guerra de Vietnam, que expuso las vulnerabilidades del aparato militar estadounidense; y la emergencia de aliados en Europa y el este asiático, que se convirtieron en fuerzas económicas y competidores de las industrias estadounidenses, lo que profundizó la crisis general de ganancias (PAYNE Y SILVER, 2022).

La respuesta a esta crisis no fue homogénea y varió de manera desigual entre los países. Implicó, entre otros aspectos, la restauración del poder de las élites económicas, la liberalización de las regulaciones al capital, el debilitamiento de las organizaciones y el poder sindical de los trabajadores, y el resquebrajamiento de los Estados de Bienestar (HARVEY, 2007; STROBL, 2022). Estos cambios delinearon el proyecto de globalización neoliberal, constituyendo así una fase específica del capitalismo (FOUSKAS et al., 2021; DUMÉNIL Y LÉVI, 2014). Según Silver (2003), Burawoy (2015) y Duménil y Lévi (2014), esta fase neoliberal reflejaría un péndulo de liberalización y regulación que ha caracterizado al capitalismo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

La implementación de medidas neoliberales en los diversos países tuvo lugar en un contexto de crisis múltiple (de acumulación, crisis energética, del dólar, entre otras), lo que generó cambios estructurales en sus economías. Fouskas et al. (2021) y Silver (2003) argumentan que la globalización neoliberal en los países centrales significó el abandono del modelo fordista de producción en favor de uno que aprovechaba mejor las innovaciones tecnológicas y el consumo en masa. En este marco, muchas fábricas comenzaron a trasladarse a países que ofrecían condiciones fiscales más favorables y mano de obra más barata, lo que permitió incrementar las tasas de ganancias. Por otro lado, Duménil y Lévy (2014) señalan que la posibilidad de obtener mayores rendimientos en el ámbito financiero convenció a muchos industriales de convertirse en inversores financieros, ya que estos lucros resultaban más atractivos y evitaban las complicaciones

asociadas a las relaciones salariales en la producción industrial. Además, los autores indican que, junto a la flexibilización laboral, la desregulación de los mercados financieros y la privatización de empresas públicas, se replantearon los sistemas de bienestar, dando paso a políticas sociales focalizadas y a un nuevo rol del Estado, que dejó de ser un promotor del desarrollo social.

1.1 Neoliberalismo como estrategia de desarrollo ante la crisis

Para Connell y Dados (2014), las políticas neoliberalizantes se constituyeron como una estrategia de desarrollo implementada por los gobiernos para recuperar las tasas de ganancias que había caído desde la crisis de la década de 1970 y restaurar el poder de las élites económicas sobre los trabajadores. Este proceso fue desigual y heterogéneo (HARVEY, 2007), variando según las dinámicas internas y externas de cada país. Por ello, las implicancias de la implementación de medidas neoliberales entre los países se van a diferenciar también de acuerdo con su ubicación en el orden global.

En el Norte global², implicó recortes a los Estados de Bienestar y a los derechos sociales ganados por los trabajadores las décadas previas, también implicó ajustes estructurales en la economía indicados por Silver (2003) como *soluciones espaciales* que movieron capital a regiones con mano de obra barata y desorganizada, *soluciones tecnológicas* basadas en la innovación de la producción que aumentaron la productividad y los márgenes de ganancia, y *soluciones financieras* que llevaron el capital a países del tercer mundo a través de empréstitos que financiaban programas de desarrollo de estos países. Silver (2003), al analizar las crisis cíclicas del capitalismo en el siglo XX, señala que, ante estas crisis, el capitalismo ha desarrollado las estrategias mencionadas para mantener su hegemonía. Estas estrategias fueron aplicadas en el proceso de neoliberalización de los países, Silver (2003) señala que en la década de 1970 los Estados de Bienestar ante la crisis de acumulación que vivían quedaron paralizados ante la disyuntiva de satisfacer las demandas en favor de los trabajadores o aquellas en favor de restaurar condiciones favorables para la acumulación de capital. Esa indecisión de los gobiernos por quebrar los viejos pactos sociales llevó a los capitalistas a definir la

² Según Dados y Connell (2012), los términos Norte global y Sur global designan un patrón histórico de desigualdad en el que los antiguos centros imperiales –Europa, Norteamérica y algunos núcleos financieros– concentran privilegios y riqueza, mientras que Latinoamérica, África, Asia y Oceanía cargan con los legados del colonialismo y el subdesarrollo. Más que diferencias de ingreso, esta distinción enfatiza relaciones de poder geopolíticas y culturales que reproducen desigualdades en recursos, niveles y esperanza de vida, a la vez que reconoce al Sur como un espacio de resistencia y producción intelectual propia.

situación optando por estas estrategias, así se movió el capital productivo a nuevas regiones con salarios bajos, se extendió la acumulación en paraísos fiscales, se apostó fuertemente en soluciones tecnológicas y se usó fuerza de trabajo migrante en las ramas de la producción que no se deslocalizaron.

En los países del Sur global el neoliberalismo implicó la represión sistemática de las crecientes movilizaciones y demandas populares de las décadas de 1960 y 1970 hacia adelante. Si bien se considera que el golpe de Estado de 1973 en Chile implicó el primer experimento neoliberal del planeta, lo cierto es que para Latinoamérica algunas primeras medidas neoliberales se implementaron previamente a través de los golpes de Estado en Brasil y Uruguay (CONNELL Y DADOS, 2014). Como se ha mencionado, antes de la hegemonía neoliberal en la región, se promovía la promesa desarrollista y modernista de una industrialización por sustitución de importaciones, que aspiraba a superar la estructura tradicional y dependiente de las economías latinoamericanas. Sin embargo, las tensiones sociales y las crecientes movilizaciones representaban un peligro para las élites. Así, la implementación de medidas neoliberales en los países sudamericanos respondió a las correlaciones de fuerza internas y a las polarizaciones que, posteriormente, derivaron en dictaduras apoyadas activamente por los Estados Unidos.

Estas dictaduras favorecieron gobiernos cívico-militares que, mediante una represión sistemática, implementaron políticas neoliberales (CONNELL Y DADOS, 2014). Estos gobiernos tenían como objetivo restablecer una correlación de fuerzas favorable a las élites y sus negocios. A mediados del siglo XX, América Latina vivió un período marcado por movilizaciones populares masivas y oligarquías que se radicalizaban hacia posiciones abiertamente golpistas y colaboracionistas con intereses extranjeros, dado que estaban interconectadas al orden internacional en el que la región ocupaba una posición dependiente. Para consolidar esta nueva correlación de fuerzas, los gobiernos de excepción implementaron medidas neoliberales, que resultaron ser una estrategia efectiva para lograr un rápido crecimiento económico como indican Connell y Dados (2014). Estos mismos autores destacan que en Chile, Pinochet optó pragmáticamente por neoliberalizar la economía donde fuera posible, aunque mantuvo sectores estratégicos, como la producción del cobre bajo el control del Estado.

Como señalan Connell y Dados (2014), las medidas neoliberales se adoptaron de manera pragmática, más que por convicción, a diferencia de lo que promovían los intelectuales neoliberales. Estos intelectuales, que eran marginales hasta finales de la

década de 1960 e inicios de 1970, ganaron relevancia en universidades y centros de pensamiento, contribuyendo a difundir sus ideas entre las élites y a construir el cuerpo doctrinario del neoliberalismo, como destacan Harvey (2007), Escalante (2015) y Anderson (2003).

El pragmatismo de los gobiernos que adoptaron políticas neoliberalizantes surgió como respuesta a los objetivos inmediatos de las coaliciones cívico-militares, que buscaban consolidarse y obtener legitimidad ante los sectores que los apoyaban, al tiempo que necesitaban cerrar el poder político a sus adversarios y a los movimientos de trabajadores. A diferencia de los procesos en los países del Norte, en la región no se habían experimentado Estados de Bienestar de manera sistemática; ahí donde estas existían eran bastante limitados en términos poblacionales. Por ello, los ataques fueron hacia otras estrategias de desarrollo, en este caso, principalmente contra la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) como indican Connell y Dados (2014). Estos autores también señalan que, aunque las estrategias ISI no fracasaron económicamente, sí eran vulnerables a crisis locales. Sin embargo, lo que realmente estaba en disputa eran los acuerdos sociales que sostenían estas estrategias de desarrollo, tales como los derechos laborales y las redes de redistribución, que colapsarían con el triunfo del neoliberalismo y su estrategia de desarrollo.

Connell y Dados (2018) destacan que el neoliberalismo ganó control político al ofrecer una estrategia de desarrollo económico más alineada con los intereses de las élites locales. De este modo, la estrategia neoliberal ofrecía a un país periférico un rápido crecimiento económico al abrir su economía a los capitales internacionales y desarrollar industrias de exportación basadas en las ventajas comparativas en el mercado global. Estas ventajas, entre los países del Sur, son la minería, la agroexportación, la manufactura que emplea fuerza laboral barata, servicios a las empresas o en general cualquier rama que orientada a los mercados internacionales generen un crecimiento rápido y lucrativo. Este enfoque, potenciado por innovaciones en el comercio internacional, permitió a los países periféricos un acceso más rápido y fácil a los mercados globales, aunque en detrimento de los derechos laborales y los acuerdos sociales previos.

1.2 Crisis global del 2008 y crisis sanitaria del 2020

Fouskas et al. (2021) identifican dos fases clave en la globalización neoliberal. La primera fase comienza en 1970, marcada por la liberalización de la economía, la deslocalización de la producción hacia países con mercados laborales de menor costo y la creciente financiarización de las economías centrales. Esta etapa concluye a comienzos de la década de 1990, cuando el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos provocó problemas en el mercado de deudas en América Latina y Europa. Luego entre 1990 y 2007, se abrió una nueva etapa “exitosa” en la gobernanza neoliberal. Durante este tiempo, el mercado de hipotecas de viviendas generó altos lucros para los bancos, pero también niveles insostenibles de deuda. El mercado financiero, especialmente Wall Street y la City de Londres, experimentó una expansión hacia los países de Europa del Este, cuyos mercados antes habían estado cerrados y formaban parte de la órbita de la extinta URSS. Así, comenzó a emerger una nueva oligarquía financiera de carácter global, sin fronteras definidas. Mientras tanto, la base productiva de los países centrales también sufrió cambios significativos. Desde la década de 1980, la base manufacturera de Estados Unidos y el Reino Unido se redujo drásticamente, mientras que solo Japón y Alemania lograron mantener un peso importante en su sector industrial (FOUSKAS ET AL., 2021). Este periodo culminó con la recesión de 2007-2008.

La crisis de 2008, según Tooze (2018), tuvo su origen en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y tuvo repercusiones globales en los sistemas financieros. La crisis llegaba como un corolario de derrotas de la élite norteamericana ya que era una expresión de la decadencia de la hegemonía de los Estados Unidos en el orden global. Desde su perspectiva, Tooze (2018) señala que la globalización neoliberal, impulsada décadas atrás, ha ido agrietándose y manifestándose en varios momentos clave: la Guerra contra el Terror desde 2003, la crisis financiera de 2008, que aceleró la decadencia, y la victoria de Trump en 2017, que representó un intento de respuesta a la crisis de hegemonía. Así, la crisis de 2008 no solo fue una crisis estrictamente económica, sino que también tuvo importantes implicaciones estratégicas en el ámbito político y geopolítico.

Ante la urgencia de responder a la crisis, Estados Unidos salvó a los bancos, los recapitalizó, apoyó a los mercados de activos y proporcionó estímulos fiscales. Ante la implosión del sistema bancario y la escasez de dólares, la Reserva Federal dio un paso adelante y se convirtió en un proveedor de liquidez, involucrando a los bancos

estadounidenses y al Banco Central Europeo (TOOZE, 2018). Como señala Tooze, de no haberse implementado estas medidas, los resultados para Estados Unidos habrían sido devastadores. Sin embargo, el efecto político de esta decisión tuvo dimensiones sistémicas, ya que evidenció que el dogma de la predominancia del mercado sobre la sociedad, así como el limitado papel del Estado para garantizar disciplina, estabilidad y seguridad a través de los bancos centrales, no era suficiente para enfrentar una crisis sistémica como la que se vivía. Esta intervención estatal para salvar al mercado financiero expuso la ilusión de los principios del neoliberalismo.

En Europa se propagó exitosamente la idea de que la crisis desatada en 2008 era únicamente estadounidense, y que la crisis posterior que afectó a la eurozona tenía un origen propio, distinto al que ocurría al otro lado del Atlántico. Esta postura resultaba conveniente para los políticos europeos, quienes señalaban la irresponsabilidad de Estados Unidos en relación con su mercado financiero (TOOZE, 2018). Sin embargo, como afirma el mismo autor ambas crisis eran en realidad una sola y el problema era común: una banca que operaba sin control a nivel global. En la eurozona, se comprendía que tenían una crisis bancaria, pero la trataron como si fuera una crisis soberana, similar a la que enfrentaba Grecia, aunque no atribuible a todo el bloque europeo. El verdadero problema era un sistema financiero sobrecargado que se presentaba como una réplica del terremoto en el sistema financiero estadounidense. Ante esta situación, la Unión Europea llevó a cabo una política de protección a los bancos a costa de los contribuyentes, aunque de manera más encubierta que en Estados Unidos. Los resultados de la respuesta a la crisis fueron diferentes en ambos casos: mientras que, en Estados Unidos, para 2009, lograron retomar el crecimiento económico y mitigar los impactos, en Europa las medidas adoptadas provocaron un impacto social comparable solo con la crisis de 1930; y en términos geopolíticos, esto implicó un cierto declive en la importancia de Europa (TOOZE, 2018).

El impacto de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha sido también un factor que ha contribuido a la crisis del neoliberalismo. Los efectos inmediatos de la pandemia en la economía fueron contundentes y a las pocas semanas las actividades tuvieron caídas no vistas desde la crisis de 1929 indica Tooze (2021), no en tanto, menciona que previo a la llegada de la pandemia ya la situación de la economía global pasaba por incertidumbres: el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos iba creciendo y una “nueva guerra fría” se esparcía en el aire, además el crecimiento

económico se había desacelerado en 2019 y el FMI expresaba preocupación por los efectos de las tensiones geopolíticas en acentuar la desaceleración, asimismo las perspectivas de una nueva ola de refugiados y la crisis que desencadenaría en Europa estaban presentes; los flujos de capitales también daban señales de inestabilidad y desigualdad, así para finales del 2019 varios países del África subsahariana estaban en condiciones de no poder pagar sus deudas.

A diferencia de la crisis de 2008, las políticas implementadas para enfrentar la crisis del COVID-19 fueron acompañadas de un gasto público sin precedentes (WATKINS, 2021; TOOZE, 2021). La pandemia ha desafiado la predominancia del paradigma de la austeridad, justificándose por la excepcionalidad de la situación indica Watkins (2021), asimismo, aunque las políticas neoliberales se han mantenido desde la crisis de 2008, la erosión de la ideología neoliberal se ha acentuado. En ese sentido Tooze (2021), indica que las intervenciones de política económica para estabilizar la crisis tanto en 2008 como en 2020 han quebrado la idea de la moderación neoliberal en la intervención de la economía, por una parte, y, por otra parte, las intervenciones confirmaban la validez de las ideas intervencionistas de Keynes. De este modo los planes de recuperación indican Watkins (2021) y Tooze (2021), se caracterizaron por ser inéditamente ambiciosos en las últimas décadas. Watkins (2021), señala que en particular el plan estadounidense buscó provocar un “cambio de paradigma” a través de la inversión en infraestructura con el objetivo de equilibrar la competitividad frente a China, que ha realizado importantes inversiones en este ámbito en tiempos recientes, no en tanto, Tooze (2021), menciona que a pesar de la ambición del plan de recuperación estadounidense este no ha sido acompañado por una nueva política económica, sino que ha buscado principalmente, por una parte, mantener la estabilidad de la red global de finanzas, salvar así a este mercado que se considera demasiado grande para quebrar y, por otra parte, si bien las políticas para estabilizar la economía fueron una afirmación de poder soberano, estas estaban impulsadas por la crisis antes que por convicciones de una nueva perspectiva económica.

El neoliberalismo de este modo viene mostrando su pragmatismo en adaptarse a las circunstancias, privatizar los lucros y socializar las pérdidas (TOOZE, 2021). Watkins (2021) y Tooze (2021), coinciden que las medidas pragmáticas tomadas en este contexto responden a las lecciones sacadas de la crisis del 2008, así las amplias políticas fiscales y la intervención de los bancos centrales fueron contundentes en las respuestas a la crisis y

parecían recuperar ideas esenciales del keynesianismo. Tooze (2021), va más atrás y señala que las crisis previas como la asiática a finales de la década de 1990, la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos y luego en la eurozona y la crisis de los productores de productos básicos de 2014 solo fueron superadas gracias a la intervención del Estado y el financiamiento de las arcas públicas lo que ha puesto en entredicho los preceptos neoliberales de no intervención en la economía desde varios años atrás.

Además, coincidiendo con Tooze (2018) en que la crisis económica ha trascendido a la esfera política y a la hegemonía global, Duménil y Lévy (2014) enfatizan que la preeminencia del neoliberalismo hegemónico de Estados Unidos se encuentra en grave crisis; para Tooze (2021) los acontecimientos de 2020 revelan una crisis integral del neoliberalismo. Los intentos de homogenizar a las sociedades bajo un único orden social han sido cuestionados, y la promesa de un mejor orden social, que requería soportar los efectos negativos de la flexibilización laboral, la privatización de servicios públicos y la desregulación de los mercados financieros, se ha diluido. Es precisamente esta crisis de la globalización y sus impactos en diversos países lo que ha contribuido al crecimiento de las derechas radicales.

2- Desarrollo de las derechas en el marco del neoliberalismo

Los efectos de las crisis han propiciado la emergencia de movimientos críticos al neoliberalismo. En Europa, tras la crisis de 2008, han surgido movilizaciones y protestas que dieron lugar a movimientos políticos progresistas, pero también a movimientos conservadores y de derecha radical en varios países (ALVAREZ Y TOSCANO, 2021; CARO Y QUITRAL, 2023; VAZQUEZ, 2020). Las políticas neoliberalizantes han generado descontento, precarizando de manera desigual las condiciones de vida y ha causado desilusión hacia las democracias liberales. Asimismo, han destruido y degradado ciudades que antes eran industriales entre los países centrales, y han acentuado la economía informal y extractivista en países de economías primaria-exportadoras. Las nuevas derechas buscan canalizar este descontento (KATZ, 2023; GUERRA Y BADILLO, 2021), criticando la globalización neoliberal y las instituciones internacionales, a las que acusan de socavar la soberanía de los países e imponer una agenda progresista (STROBL, 2022; CARO Y QUITRAL, 2023).

La historicidad de estas nuevas derechas nos permite comprender el desarrollo, las estrategias y adaptaciones que han ido tomando en el tiempo. En ese sentido, el análisis

de Natascha Strobl aporta elementos para esta comprensión. Strobl (2022), destaca que, en la crisis de la década de 1970, surgió en Europa una 'nueva derecha', inicialmente en Francia y luego en Alemania, Austria y el mundo anglosajón, que se distanció de los consensos post-Segunda Guerra Mundial y que llevó adelante innovaciones importantes que los diferenciaban de las derechas tradicionales y las extremas derechas de raigambre nacionalsocialista o fascistas. Esta 'nueva derecha' va a tomar como referencia histórica al proceso que se conoció como la Revolución Conservadora en Alemania en el contexto de entreguerras, tomando así distancia de los nazis y fascistas. Asimismo, esta corriente, se formó como un 'espectro mixto' entre la extrema derecha y el conservadurismo, y desarrolló un "gramscianismo de derecha", es decir, tomaron como referencia la teoría de Gramsci en relación a la construcción de la hegemonía y la disputa política, que no se restringe solo a las instituciones políticas formales, sino que se amplía a los espacios sociales donde se reproducen sentidos comunes, y de este modo, tomaron la noción de hegemonía y batalla cultural para emplearlos como herramientas en su propio despliegue político. Strobl (2022), menciona que los principales protagonistas de esta 'nueva derecha' eran personajes provenientes de instituciones académicas de elite que se concebían a sí mismos como intelectuales orgánicos y que se esforzaban por ganar apoyos de personas claves en sus círculos sociales para multiplicar su doctrina entre diversos puntos del tejido social, siguiendo la misma lógica de los ideólogos neoliberales (ESCALANTE, 2015; HARVEY, 2007).

Por otro lado, Cas Mudde (2021), analizando la historicidad de la derecha y el populismo, indica que a partir de la década de 1980 aparecieron organizaciones de derecha radical y populista que fueron creciendo gradualmente, sin embargo, durante esta década y la siguiente se mantuvieron aún en cierta marginalidad respecto al control de gobiernos, no en tanto que sí ganaron presencia en los diferentes parlamentos de los países europeos. Mudde en su análisis indica que el surgimiento de estos partidos de derecha puede ser comprendido como una tercera ola de la ultraderecha³; esta ola ocurre en un contexto en la que los partidos tradicionales de derecha pasaron por adaptaciones programáticas que dejaron "huérfanos" a determinados grupos de electores quienes generaron simpatías por propuestas de fuerzas populistas de derecha radical que

³ Según Mudde (2021), la ultraderecha está compuesta por dos vertientes que se pueden diferenciar: la extrema derecha y la derecha radical populista. La primera rechaza de plano los principios esenciales de la democracia, como la igualdad política y el gobierno de las mayorías, mientras que la segunda, aunque se declara partidaria de la democracia, cuestiona valores centrales de la democracia liberal como los derechos de las minorías, la división de poderes o el Estado de derecho.

comenzaron a ganar mayor espacio político. Este proceso de adaptación programática para Mudde (2019; 2021), es clave ya que sobre los vacíos políticos que deja la derecha tradicional es que la 'nueva derecha', denominado por Mudde como *partidos populistas de derecha radical*, encuentran terreno fértil.

2.1 Nueva generación de derechas

Natascha Strobl (2022) señala que desde principios del siglo XXI ha emergido una nueva generación de la “nueva derecha”. Esta generación incluye a diversos actores como CasaPound Italia, fundado en Roma en 2003, que fusiona la tradición del fascismo italiano con el activismo político, la cultura pop y la lucha cultural. En Alemania, el Instituto de Política Estatal, creado en el año 2000, y la editorial Antaios, también lanzada ese mismo año, junto con la revista Sezession, que apareció en 2003, son ejemplos de esta nueva generación. En Francia, Generation Identitaire, surgida en 2012, se ha posicionado en el ámbito digital mediante el uso de memes, imágenes y videos, una estrategia compartida con otros movimientos identitarios de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. Existen también otros puntos de contacto entre los grupos de extrema derecha, como las manifestaciones de los Patriotas Europeos contra la islamización de Occidente y las protestas contra las medidas sanitarias durante la pandemia, así como la publicación en las mismas revistas. La naturaleza cambiante y las interacciones entre estos grupos son fundamentales para comprender la reciente evolución de la nueva derecha.

Esta nueva generación de la ‘nueva derecha’ ha convertido los espacios digitales en un escenario crucial de la batalla cultural en la lucha por el sentido común y la influencia en la opinión pública (STROBL, 2022). Un hito importante en este crecimiento, según Strobl (2022), fue la crisis de refugiados de 2015 y 2016, que desencadenó movilizaciones racistas contra los migrantes; este periodo también estuvo marcado por el Brexit y la elección de Trump en Estados Unidos, donde se consolidó un variado y activo ejército de “guerreros culturales” del movimiento de ‘derecha alternativa’. Bajo esta etiqueta, indica Strobl (2022), en Estados Unidos se ha formado una red diversa que, a través de múltiples medios y redes sociales, ha ampliado su influencia. Así, la extrema derecha ha desarrollado una escena mediática robusta, cuyos mensajes son diseminados a través de plataformas como YouTube, Facebook y Twitter.

Mudde (2021), indica que a partir del año 2000 empezó a surgir un nuevo ciclo de crecimiento de las derechas, tanto de la extrema derecha como de la derecha radical y

populista. Este nuevo ciclo se caracteriza por la emergencia de la derecha radical populista como fuerzas políticas capaces de dejar la marginalidad y constituirse en gobiernos; algunos sucesos han sido fundamentales para el ascenso de este nuevo ciclo, estos son: los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la crisis del 2008 y la crisis de los refugiados de 2015. En este nuevo ciclo la derecha radical y populista ha conseguido ser aceptada en el sistema político por las otras fuerzas y ha consolidado una presencia activa en el debate público en circuitos políticos y mediáticos. Además, han conseguido pautar la agenda política y logrado que algunos partidos tradicionales adopten las propuestas de la derecha radical populista.

De este modo, tanto Strobl (2022) como Mudde (2007, 2019, 2021), coinciden en identificar en la década de 1970 y 1980, respectivamente, la aparición de nuevas fuerzas de derecha alternativas a las fuerzas más tradicionales de este campo político. Si bien estas fuerzas inicialmente operaban en la marginalidad de la centralidad del escenario político, las innovaciones que llevaron adelante les permitieron ir construyendo nichos de apoyo y experiencias que han sido claves décadas más adelante. Así, desde inicios del presente siglo Strobl (2022) y Mudde (2021) coinciden en que estas fuerzas han sido relevantes en el proceso de crear una escena social de derechas que ha contribuido a radicalizar este espectro político, y con estas bases, en varios casos, llegar a los gobiernos y desarrollar desde ahí sus pautas y agendas.

3- Las nuevas derechas radicales en América Latina

En América Latina, el ascenso de las derechas se ha producido tras varios años de gobiernos populares o progresistas en muchos países de la región. Desde finales de la década de 1990, comenzaron a surgir gobiernos críticos con la neoliberalización, muchos de los cuales fueron el resultado de un creciente proceso de politización y luchas sociales en resistencia a las medidas neoliberalizantes que afectaban y precarizaban las condiciones de vida. Así, en países como Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Paraguay, movimientos políticos vinculados a los movimientos sociales lograron ganar elecciones impulsados por la resistencia a las políticas neoliberales implementadas anteriormente. En contraste, en países como Perú, Chile y Colombia, prevalecieron gobiernos de derechas o de centro derecha, como el caso de la Concertación en Chile, a pesar de las intensas movilizaciones y resistencias contra el neoliberalismo que se desarrollaban en esos países.

Durante poco más de una década, estos gobiernos implementaron una serie de medidas redistributivas que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida preexistentes. Las mejoras en las políticas de salud, vivienda, educación y salarios reales lograron resultados notables; gran parte de estas nuevas políticas sociales se financiaron aprovechando el ciclo de altos precios de los commodities exportables de estos países en el mercado mundial. Sin embargo, la dependencia de las divisas para la sostenibilidad de las políticas sociales, junto con los escasos avances en la transformación de la matriz económica, generó contradicciones a partir de la crisis de 2008 y la posterior caída de los precios de los commodities desde 2011. A esto se sumó el desgaste político de estos gobiernos, lo que derivó en crisis que facilitaron el ascenso de fuerzas de derecha. Por ejemplo, en Brasil, el escándalo Lava Jato debilitó al gobierno de Dilma Rousseff y empoderó a diversos sectores de la derecha, quienes, mediante un golpe parlamentario, la depusieron. Esto dio paso a un nuevo gobierno que implementó medidas restrictivas para la expansión de las políticas sociales. Dos años después, en las siguientes elecciones, ganó el candidato de derecha radical Jair Bolsonaro, quien revirtió varias de las políticas implementadas anteriormente. En Argentina, el desgaste del segundo gobierno de Cristina Fernández y las dificultades económicas para mantener las políticas sociales impulsaron a una derecha renovada liderada por Mauricio Macri. Aprovechando la polarización y el agotamiento del oficialismo, Macri ganó las elecciones y estableció un gobierno de corte neoliberal que resultó en una profunda crisis social y económica que su administración nunca pudo resolver.

Así, la dinámica política en la región se ha visto marcada por un ciclo de gobiernos populares y progresistas, las políticas redistributivas implementadas y las polarizaciones generadas en la disputa con otras fuerzas políticas, principalmente de derecha. En los últimos años, han emergido nuevas fuerzas de derecha que están en sintonía con el auge de derechas radicalizadas en el mundo. Estas fuerzas han adoptado causas comunes, adaptándolas a los contextos nacionales específicos. Así podemos encontrar diversos análisis sobre este fenómeno.

Ubilluz (2021) busca diferenciar el fenómeno de las nuevas derechas en Europa, Estados Unidos y América Latina. En este contexto, señala que, mientras en Occidente la derecha radical y la extrema derecha a menudo heredan elementos del fascismo clásico, estas corrientes se han adaptado a las democracias liberales. En América Latina, por el contrario, las tradiciones conservadoras y autoritarias son fundamentales en la formación

de las derechas radicales, más que la influencia del fascismo. Además, Ubilluz (2021), al seguir la noción de ‘derecha radical populista’ de Mudde (2007), destaca que en Europa predominan características como el nativismo, el autoritarismo y el populismo, mientras que en América Latina resaltan el antifeminismo, el autoritarismo y el populismo. Un punto de encuentro entre la derecha radical occidental y sus contrapartes latinoamericanas se manifiesta en las alianzas que han construido con grupos evangélicos pentecostales y neopentecostales, en torno a un discurso y una agenda conservadora que defiende “valores tradicionales” cristianos y se opone al aborto y a los enfoques de género, presentándose como defensores de una comunidad moral en peligro ante los avances del progresismo.

Caro y Quitral (2023) relacionan el surgimiento de la nueva derecha radical en América Latina con la pérdida de prestigio de las instituciones y los escándalos de corrupción que han afectado a la clase política. Caro y Quitral (2023), identifican en esta nueva derecha radical cuestionamientos a la globalización, la democracia liberal y la institucionalidad internacional. Este fenómeno, inicialmente concentrado en Europa (Polonia, Hungría, Italia, Francia), se ha expandido a la región con figuras como Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y Kast en Chile. Tanto Caro y Quitral (2023) como Saidel (2021) argumentan que la nueva derecha radical puede entenderse como parte de una nueva etapa del capitalismo neoliberal que, aprovechando el contexto de crisis económica, se establece en el escenario político y aumenta su influencia. Al analizar el caso del Partido Republicano en Chile, Caro y Quitral (2023), Campos (2021) y Rovira (2019) identifican rasgos de un “partido populista de derecha radical”. Esta organización ha crecido al explotar la moderación programática de los partidos tradicionales de derecha (CAMPOS, 2021; ROVIRA, 2019), convirtiéndose en el partido más organizado de los últimos años en Chile (CARO Y QUITRAL, 2023), que desarrolla intensamente estrategias de “guerra cultural” a través de diversas actividades sociales y políticas.

Vázquez (2020) argumenta que el avance del conservadurismo en América Latina, que comenzó en 2015, es parte de un fenómeno global que busca soluciones a las crisis generadas por la crisis económica de 2008 y sus efectos sociopolíticos en diversos países. Este crecimiento de fuerzas conservadoras se traduce en una mayor representación política en parlamentos, alcaldías y otros espacios de poder. Según Vázquez (2020), estas fuerzas conservadoras están conformadas por consorcios mediáticos, grupos financieros, sectores empresariales, el clero católico y evangélico, y agroexportadores que fueron desplazadas temporalmente por gobiernos progresistas, han resurgido junto con el

descontento hacia estos últimos. En un contexto de caos generalizado, los grupos conservadores han capitalizado la situación para impulsar sus propuestas, enfatizando la necesidad de restablecer el orden a cualquier precio. Esto incluye la promoción del racismo a través de un discurso nacionalista que deslegitima a la población migrante, a la que criminalizan y culpan por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades. Además, propagan mensajes misóginos y homofóbicos en nombre de la “defensa de la familia”, oponiéndose a la “ideología de género” en respuesta a las luchas feministas y expresando desprecio hacia las personas en situación de pobreza, lo que evidencia su clasismo.

Como parte del crecimiento de las derechas en la región en los últimos años Moran (2023) analiza cómo las derechas latinoamericanas politizan a los jóvenes en el contexto del auge de las extremas derechas y su oposición a los derechos sexuales y reproductivos. De ese modo, examina tres estrategias clave que usan en su despliegue político entre la juventud: la creación de nuevos imaginarios de épica y rebeldía, la formación política de los jóvenes y el surgimiento de influencers neoconservadores. De esta manera, indica Moran, estos grupos han logrado tener una presencia importante entre los sectores jóvenes. Su estudio se basa en experiencias de varios países de la región, donde se han observado procesos de movilización en torno a temas de género y sexualidad. Moran (2023), identifica la oposición a los derechos sexuales y reproductivos como parte de un “activismo neoconservador” (BIROLI ET AL, 2020; VAGGIONE, 2022), que combina elementos de movimientos anteriores y responde a la politización de la sexualidad impulsada por movimientos feministas y LGTBIQ+. Propone que esta oposición puede ser vista como una tercera oleada neoconservadora que se adapta a las circunstancias actuales, utilizando estrategias innovadoras para captar el apoyo de los jóvenes y contrarrestar el protagonismo de las mujeres en las movilizaciones feministas.

El análisis de Caro y Quitral (2023) destaca también las redes internacionales que permiten la articulación de estas derechas radicales. Entre ellas, el Foro de Madrid, fundado en 2020 a iniciativa del partido español VOX, reunió a líderes de las nuevas derechas de América Latina, España y Portugal, y la cumbre Eurolat en 2021. Estos encuentros facilitaron la colaboración entre líderes y organizaciones de estas derechas, consolidando espacios internacionales de coordinación. En particular, el Foro de Madrid emitió un documento firmado por líderes de organizaciones de extrema derecha en el que

se proclamaba una lucha conjunta contra el “avance comunista” en los países iberoamericanos.

En cuanto a VOX y su intento de forjar alianzas con grupos de derecha radical y extrema derecha en América Latina, es importante considerar cómo esta estrategia se alinea con la doctrina del partido. VOX promueve una narrativa que exalta la era imperial de España, argumentando que fue un periodo crucial para la “civilización” de los “pueblos salvajes” en los territorios conquistados de Indoamérica. Desde esta visión, VOX sostiene que los países latinoamericanos deberían ver a España como un referente natural, interpretando la región como parte de su esfera de influencia. La formación de alianzas con grupos de derecha radical y extrema derecha en América Latina es clave, ya que estos comparten aspectos de la ideología hispanista, característica de las tradiciones conservadoras en la región. Tanto el hispanismo como el anticomunismo se erigen como puentes ideológicos que unen a estas organizaciones. En el manifiesto de Madrid, se propone la creación de una “íberosfera” que incluya a países con raíces ibéricas, y se designa como enemigos al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla. Se acusa a estas organizaciones de actuar en nombre del régimen cubano, de promover una agenda totalitaria y de representar una amenaza para los gobiernos liberales.

4- Análisis de conceptos y definiciones adoptadas

De los diversos estudios que se han hecho en los últimos tiempos, y hemos alcanzado a revisar, podemos identificar algunas perspectivas que consideramos interesantes y han inspirado varios estudios de casos en la región. De este modo iremos presentando algunas definiciones que consideramos expresan una parte importante del debate al respecto, después analizaremos las perspectivas conceptuales; luego expondremos los motivos por los cuales vamos a adoptar determinado enfoque y finalmente hacer un análisis de los ajustes que consideramos necesarios.

4.1 Perspectivas conceptuales sobre las nuevas derechas

Una de las principales perspectivas en la literatura sobre el fenómeno de las nuevas derechas es el análisis del populismo. Según Mudde (2019), el éxito electoral del populismo en América Latina está intrínsecamente ligado a la combinación de la política democrática con la extrema desigualdad. Así, en la región se han identificado varios ciclos de populismo, destacando tres de ellos: el primero se sitúa entre la Gran Depresión y los golpes militares de la década de 1960. Este periodo se caracterizó por un rápido

crecimiento urbano, la implementación de políticas orientadas a la industrialización y el reconocimiento de derechos políticos y sociales. Líderes como Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina desarrollaron un discurso político centrado en el “pueblo”, que se oponía a las oligarquías y a los intereses extranjeros que, según ellos, obstaculizaban el desarrollo económico del país.

Para Mudde (2019), la segunda ola populista tuvo una duración breve. En la década de 1990, con la llegada al poder de Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil y Alberto Fujimori en Perú, emergió un nuevo populismo, resultado de las crisis económicas que afectaron a estos países en la década anterior. Estos líderes utilizaron un discurso que oponía a las “élites políticas”, acusadas de ser responsables de la situación crítica, al “pueblo”, que se sentía traicionado por los políticos tradicionales. Sin embargo, una vez en el poder, adoptaron e implementaron reformas de corte neoliberal. Según Mudde (2019), a diferencia de la ola anterior, que denunciaba a las élites económicas como causantes de los problemas del país, esta vez la polarización se dirigió contra la “clase política”, a la que se acusaba de mantener un Estado excesivamente grande que obstaculizaba el desarrollo del libre mercado.

Con la llegada de gobiernos populares y progresistas a inicios del nuevo milenio, la región experimentó una tercera ola de populismo (MUDDE, 2019), caracterizada por una crítica al neoliberalismo de las décadas anteriores. Durante este periodo, se implementaron diversas políticas redistributivas que ayudaron a reducir las tensiones y desigualdades. Sin embargo, en los últimos años, el ascenso de movimientos y gobiernos de derecha, que han desplazado a los gobiernos progresistas, marca el inicio de una cuarta ola populista. Esta nueva fase se distingue por su carácter de derecha y por la oposición a las políticas sociales establecidas por las administraciones anteriores.

Para Mudde (2019), el carácter “populista” de los ciclos políticos mencionados es significativo, ya que revela que, independientemente de su orientación –ya sea de izquierda o de derecha–, el populismo ha sido un elemento central en las dinámicas políticas de la región. Esta observación nos lleva a cuestionarnos sobre el significado del término “populismo” y cómo se aplica para caracterizar diferentes procesos políticos.

Según Mudde (2019), el populismo es una ideología “delgada” que se caracteriza por establecer una división maniquea entre “el pueblo” –entendido como una comunidad unida– y “la élite” –concebida como un grupo que actúa exclusivamente en beneficio

propio– en el contexto de la acción política y la movilización de apoyos. Esta ideología “delgada” también funciona como una estrategia que facilita el crecimiento y las adhesiones políticas al presentar a sus adversarios como responsables de los principales males que aquejan a la sociedad. Mudde sostiene que el populismo debe situarse dentro del contexto de las democracias liberales; aunque, teóricamente, se opone a estas democracias (no necesariamente a la democracia en sí), en la práctica opera dentro de sus marcos. Esto contrasta con las extremas derechas, que proponen un rechazo abierto a los modelos democráticos. Además, Mudde señala que, debido a su carácter “delgado”, el populismo no ofrece una cosmovisión doctrinaria compleja, por lo que a menudo se asocia con ideologías más amplias, como el conservadurismo, el liberalismo o el socialismo. Estas características permiten que el populismo sea utilizado tanto por movimientos de izquierda como de derecha: desde movimientos críticos del sistema hasta movimientos reaccionarios, como el trumpismo o el bolsonarismo, todos son considerados populistas debido a su ideología “delgada” que divide el campo político entre el pueblo y las élites, aunque posteriormente se anclan en ideologías más profundas.

Mudde (2021) también explica, como se mencionó en apartados anteriores, que desde la década de 1980 ha emergido una derecha con características específicas: nativistas, autoritarias y populistas. Aunque estas corrientes derechistas fueron marginales durante varios años, a partir del siglo XXI han comenzado a ganar fuerza. En el contexto de América Latina, estas nuevas derechas se distinguen, siguiendo el péndulo populista mencionado previamente, por su acentuado populismo y conservadurismo.

En este sentido, la noción de Mudde (2021) sobre los “partidos populistas de derecha radical” se caracteriza principalmente por el populismo, el nativismo y el autoritarismo. En lo que respecta al nativismo, el objetivo primordial de la derecha radical populista es establecer una etnocracia, es decir, un sistema democrático en el que la ciudadanía se base en la etnicidad. Para lograrlo, se propone crear un Estado monocultural mediante el cierre de fronteras a los inmigrantes y ofreciendo a los residentes extranjeros la opción de asimilarse o ser repatriados. La islamofobia, entendida como un temor irracional hacia el islam o los musulmanes, se ha convertido en el prejuicio más característico de la derechas radicales y extremas derechas de la cuarta ola en el caso de los países europeos. Finalmente, el autoritarismo se manifiesta en la creencia de que las sociedades deben mantenerse en estricto orden y que cualquier transgresión a la autoridad debe ser severamente castigada. Desde esta perspectiva, fenómenos sociales como la

drogadicción y las “desviaciones” sexuales son considerados “problemas” que deben ser abordados como cuestiones de orden público, para lo cual se aboga por reinstaurar una educación “moral” o “tradicional” en las escuelas (MUDDE, 2021).

Por su parte, Enzo Traverso (2018) propone la noción de “posfascismo” para comprender el crecimiento de las derechas en los últimos años. Según Traverso, los rasgos del “posfascismo” incluyen una mezcla de autoritarismo, nacionalismo, conservadurismo, islamofobia, xenofobia y populismo. Además, establece una clara distinción entre “posfascismo” y neofascismo: mientras que el neofascismo se refiere a movimientos que intentan prolongar o reproducir el fascismo clásico, los “posfascistas” emergen a principios del siglo XXI. Aunque el “posfascismo” puede tener raíces en el fascismo clásico, se diferencia en su proselitismo político, que es prácticamente nulo en comparación con el de los neofascistas, quienes hacen referencias explícitas a esa tradición. Aunque la matriz fascista les proporciona algunos elementos ideológicos, estos no constituyen los pilares de sus posicionamientos.

Traverso señala que el “posfascismo”, caracterizado por su especificidad histórica en los inicios del siglo XXI, presenta un contenido ideológico inestable, contradictorio y en transición. Utilizando el ejemplo del Frente Nacional en Francia, destaca cómo este partido ha evolucionado de un neofascismo a un ‘posfascismo’, buscando convertirse en una fuerza respetable que transforme el Estado desde adentro, en contraste con Mussolini y Hitler, quienes pretendían destruir el Estado heredado. Además, menciona que las fuerzas de la extrema derecha han reconfigurado su presencia al ocupar el espacio público y salir de la “mayoría silenciosa”, adoptando códigos estéticos de la izquierda y distorsionándolos para sus propias consignas. Así, una de las principales características del “posfascismo” es su pragmatismo para adaptarse a los nuevos tiempos, lo que representa un frágil equilibrio entre la herencia fascista y la incorporación de nuevos elementos. Esto los lleva a la convicción de que solo reconfigurándose pueden aspirar a ser un movimiento con posibilidades reales de gobernar, aunque estas reconfiguraciones son de corto plazo y aún están en proceso de cristalización, es decir, para Traverso la noción de “posfascismo” es un concepto en movimiento que no está cerrado, sino que expresa un momento específico de estas nuevas derechas.

Por otro lado, Natascha Strobl (2022) introduce el concepto de “conservadurismo radicalizado” para analizar el surgimiento y transformación de las nuevas derechas en los últimos años. Strobl define esta noción como la transformación y radicalización de los

partidos conservadores tradicionales, los cuales han contado históricamente con el apoyo de diversas facciones sociales, como la burguesía, trabajadores y campesinos. El “conservadurismo radicalizado” describe un proceso mediante el cual sectores conservadores convergen con la extrema derecha, adoptando características, estrategias y tácticas de ambas corrientes. Esto ha permitido que estos sectores se hagan con la hegemonía dentro de sus partidos, lo que ha llevado a una radicalización generalizada de las estructuras y tendencias internas de estas organizaciones. Este fenómeno ha sido impulsado por la radicalización de las clases medias conservadoras y el crecimiento de la extrema derecha en el contexto de múltiples crisis. Strobl (2022) identifica a Donald Trump y a Sebastián Kurz como ejemplos de “conservadurismo radicalizado”: ambos, al tomar el control del Partido Republicano y del Partido Popular de Austria, respectivamente, han incorporado estrategias de la extrema derecha, marcando puntos de inflexión en sus contextos políticos y reconfigurando las agendas y las reglas del juego político.

Este fenómeno se distingue de otros, como la extrema derecha o el populismo, por una serie de características específicas. Entre ellas, se encuentra la ruptura deliberada de las reglas formales e informales de la política, una guerra cultural diseñada para polarizar y mantener un clima de agitación constante, el liderazgo concentrado en círculos reducidos que acaparan las decisiones, intentos de reestructuración antidemocrática del Estado y ataques directos a otras instituciones. Además, desarrollan una escenificación mediática en forma de campaña permanente y emplean sistemáticamente narrativas que crean realidades paralelas, a menudo apoyándose en teorías de conspiración.

Strobl (2024) también destaca que el “conservadurismo radicalizado” toma prestados elementos del populismo de derecha, como la representación de sus líderes como mártires o víctimas en lucha contra fuerzas poderosas, así como un distanciamiento performativo de la “vieja política” para marcar el inicio de unos nuevos tiempos políticos. Strobl (2024) indica que a diferencia de la aplicación del estilo populista en organizaciones clásicamente de extrema derecha que operaban desde cierta marginalidad política, el “conservadurismo radicalizado” actúa desde posiciones clave de poder: no se trata de nuevos partidos, sino de la transformación radical, tanto interna como externa, de partidos que tienen experiencia gubernamental. Strobl (2024) señala que el populismo de derecha no es la causa de las transformaciones en los partidos conservadores, sino un síntoma de este proceso; por ello, no todas las acciones del “conservadurismo

radicalizado” se anclan exclusivamente en la lógica populista de derecha. Esto sugiere que el populismo de derecha es una manifestación visible de una transformación más profunda dentro de estos partidos, más que la causa fundamental de dichos cambios.

Strobl (2024) señala que para la extrema derecha, la formación de una comunidad nacional homogénea es un pilar central de su proyecto político, de donde se derivan posiciones en contra de inmigrantes, disidencias políticas, étnicas, y otros grupos. En cambio, el “conservadurismo radicalizado” no solo adopta la retórica nacionalista de la extrema derecha, sino que integra la noción de guerra cultural de la “nueva derecha”. Esta estrategia emplea términos identitarios que apelan a la cultura, permitiendo que la extrema derecha vea su retórica reflejada en el discurso del “conservadurismo radicalizado”, ésta a su vez es de tal modo que no resulta objetable para ciertas ‘sensibilidades burguesas’. Strobl cita a Heitmeyer (2018), quien señala que, a diferencia de la extrema derecha, la crudeza de sectores de la burguesía presenta su agresividad de manera más encubierta, debido a la fachada de modales civilizados. Strobl (2024) también menciona otra diferencia clave, citando a Holzer (1993), quien sostiene que ambos fenómenos difieren en su relación con la violencia: mientras la extrema derecha puede tolerar discursos y estilos violentos, el “conservadurismo radicalizado” tiende a distanciarse de la violencia, como se observa en figuras como Kurz en Austria o Johnson en el Reino Unido. No obstante, existen excepciones, como el caso de Trump, quien mantuvo relaciones ambiguas con grupos paramilitares.

Strobl (2022) señala que el conservadurismo, como ideología, tiene sus raíces en la burguesía y busca preservar el estado de cosas existente, tanto en el ámbito material como en el ideal. Strobl indica que el conservadurismo parte de la idea fundamental de que la desigualdad es una característica inherente al funcionamiento de la sociedad, y que las jerarquías establecidas garantizan el orden social; por ello cuando el orden social se desequilibra surgen las crisis. Así, el conservadurismo enfatiza la importancia de la propiedad privada y su protección. Para Strobl (2022), esta ideología se caracteriza por una actitud reaccionaria y antiigualitaria, así como por un ideal de armonía entre clases que se centra en el orden y la preservación de la propiedad.

El ascenso del “conservadurismo radicalizado” se relaciona con la erosión de la dinámica política entre el conservadurismo tradicional, la socialdemocracia y el crecimiento de la extrema derecha. Strobl (2022; 2024) señala que, tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció un consenso político entre conservadores y socialdemócratas,

renegociado a lo largo del tiempo, basado en el reconocimiento de equilibrios de poder para no intentar imponer con todas sus fuerzas los respectivos intereses de cada uno. Sin embargo, este consenso comenzó a fracturarse con el auge del neoliberalismo, aunque algunos aspectos del consenso se mantuvieron, y las gestiones de gobierno continuaron siendo alternadas o sostenidas por coaliciones conservadoras o socialdemócratas. Según Strobl (2024), la ruptura de estos consensos ha debilitado en las últimas décadas tanto a las fuerzas socialdemócratas como a las conservadoras, permitiendo la aparición de fenómenos como el “neoliberalismo progresista” y el surgimiento de partidos populistas en distintas regiones. Desde inicios del siglo XXI, crisis como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la crisis financiera de 2008 han acentuado esta erosión. Strobl (2024) enfatiza que la crisis de 2008 no solo precarizó las condiciones de vida y elevó el desempleo, sino que también generó un contexto de polarización creciente hacia la derecha, facilitando el avance de la extrema derecha tanto dentro como fuera de los parlamentos.

Este giro hacia la derecha ha afectado a los partidos conservadores. En Hungría, por ejemplo, desde 2010, Orbán ha reestructurado el país hacia un creciente autoritarismo. Mientras tanto, en 2009, el movimiento Tea Party en Estados Unidos ya había logrado consolidar poder tanto dentro como fuera del Partido Republicano. Según Strobl (2022), el éxito de Trump no habría sido posible sin los caminos abiertos por el Tea Party y los movimientos de derecha alternativa en el Partido Republicano, en el discurso público y en diversos espacios sociales. En este contexto, Strobl (2024) argumenta que el “conservadurismo radicalizado” es una respuesta a la erosión de las fuerzas conservadoras y al giro hacia la derecha en un mundo marcado por múltiples crisis. Este fenómeno se manifiesta en sectores políticos dentro de partidos con tradiciones establecidas que abandonan el consenso estatista y desarrollan un creciente radicalismo, utilizando los recursos, la base social y las posiciones de poder a su disposición. Así, el “conservadurismo radicalizado” se presenta como un intento de contrarrestar la debacle de la erosionada hegemonía de los consensos de posguerra con una nueva propuesta hegemónica de carácter autoritario. En este intento utilizan y se incorporan elementos de los populismos de derecha y de la extrema derecha.

En resumen, Strobl (2024) sostiene que el “conservadurismo radicalizado” no es simplemente una variante del conservadurismo de derechas, ni un extremismo de derecha clásico, ni tampoco un populismo de derecha. Su retórica violenta contra las minorías y

sus ataques al Estado de Derecho y a las instituciones representan un peligro para la democracia liberal, ya que buscan contrarrestar la hegemonía en crisis con una alternativa de marcado carácter autoritario. Uno de los pilares del conservadurismo radicalizado es la generación de una sensación de seguridad en un contexto de “capitalismo autoritario” (Heitmeyer, 2018), caracterizado por desplazamientos sociales y económicos. Esta sensación no es defensiva y estática, sino agresiva y dinámica.

4.2 Análisis de las perspectivas expuestas

Como podemos observar, los conceptos trabajados por los autores citados para comprender el fenómeno de las nuevas derechas en los últimos años presentan tanto coincidencias como diferencias. En cuanto al populismo, todos los autores mencionados lo abordan e incluyen como una de las características del fenómeno de las nuevas derechas; sin embargo, el énfasis en su tratamiento marca una diferencia. Mudde (2019) parte de la consideración del populismo como una ideología que estructura la acción política al dividir a los actores entre ‘élite’ y ‘pueblo’, y que puede ser adoptada tanto por la derecha como por la izquierda. Aunque Mudde considera que el populismo, al ser una ideología ‘delgada’, requiere complementarse con otras ideologías de mayor complejidad, pone un especial énfasis en el populismo como clave para entender el fenómeno de las nuevas derechas. En su noción de ‘partidos populistas de derecha radical’, Mudde (2021) integra el populismo, el autoritarismo y el nativismo como los rasgos centrales de estas nuevas derechas en auge. Así, la distinción de las derechas radicales frente a otras expresiones de derecha radical en el carácter populista de las primeras, en la defensa del orden y la jerarquía social, y en la promoción de una democracia étnicamente homogénea.

Traverso (2018) y Strobl (2022), por su lado, reconocen que las nuevas derechas tienen elementos populistas, aunque no los consideran la característica central del fenómeno. Para Traverso (2018), los rasgos populistas de las nuevas derechas forman parte de una estrategia política destinada a ganar la simpatía del público; así, estas estrategias se combinan con el carácter marcadamente pragmático de los ‘posfascismos’. Este pragmatismo con el que llevan adelante la acción política es la base sobre la cual se integran otros elementos ‘posfascistas’, como el autoritarismo, la islamofobia y el conservadurismo, con el objetivo de convertirse en una fuerza política capaz de asumir el gobierno. Por su parte, Strobl (2022) incluye rasgos populistas en su concepto de ‘conservadurismo radicalizado’; entre ellos, destaca la construcción de la figura del líder

como mártir o víctima que lucha contra élites poderosas, así como las acciones performativas que enfatizan constantemente que representan “lo nuevo” frente a “lo viejo” en el escenario político. Además, Strobl (2024) sugiere que el populismo en las derechas es más un síntoma de transformaciones profundas en este campo político que la causa de dichos cambios.

De este modo, podemos observar que, si bien el populismo es un rasgo presente en las nuevas derechas, su importancia varía en la conceptualización del fenómeno. Para Mudde (2019), el populismo es el marcador ideológico que distingue a los “partidos populistas de derecha radical” de otras expresiones de derecha o extrema derecha. En cambio, para Strobl (2024) y Traverso (2018), el populismo se presenta como una herramienta pragmática o estrategia comunicativa que utiliza el “conservadurismo radicalizado” y los “posfascismos”, respectivamente, para avanzar en su despliegue político.

Por otra parte, las explicaciones sobre las trayectorias históricas de las nuevas derechas presentan matices interesantes entre los autores en cuestión. Mudde (2019), Traverso (2018) y Strobl (2022) coinciden en que las expresiones contemporáneas de las nuevas derechas se desarrollan en un contexto global de múltiples crisis que se intensifica con el inicio del nuevo siglo. No obstante, Mudde (2019) sitúa los orígenes de los “partidos populistas de derecha radical” en la década de 1980, cuando estos aprovecharon la erosión política de las derechas tradicionales, aunque se mantuvieron en una posición casi marginal durante la década siguiente. Para Traverso (2018), los “posfascismos” emergen a inicios del siglo XXI; sin embargo, algunas de sus expresiones, como el Frente Nacional en Francia, representan la evolución de una organización neofascista hacia una forma “posfascista”, donde el pragmatismo ha desplazado la predica neofascista con el objetivo de volverse aceptable para la sociedad. Por su parte, Strobl (2022) ubica el “conservadurismo radicalizado” como un proceso de radicalización que está ocurriendo en los últimos años, aunque sus antecedentes se remontan a la formación de la “nueva derecha” en la década de 1970 y a las innovaciones “gramscianas” que esta impulsó. A su vez, identifica un antecedente más reciente en el surgimiento de una nueva generación de la derecha setentera, que desde inicios del siglo XXI ha desarrollado un activismo político sistemático en comunidades digitales, redes sociales y espacios culturales, con el objetivo de influir en el sentido común y la opinión pública.

4.3 Alcances para el análisis en América Latina

En cuanto al alcance de los conceptos referidos en el presente análisis, cabe señalar que Traverso (2018), Mudde (2019) y Strobl (2022) basan sus reflexiones en casos de Europa y Estados Unidos. Traverso (2018) se centra en el desarrollo de la nueva derecha en Francia, extendiendo luego su análisis a otros países europeos. Mudde (2007; 2019), por su parte, desarrolla su noción de “partidos populistas de derecha radical” a partir de casos en Europa, aunque luego amplía su análisis a América Latina, interpretando las dinámicas políticas de la región como un péndulo de ciclos populistas. Strobl (2022) parte con el análisis de Donald Trump y el Partido Republicano en Estados Unidos, así como de Sebastián Kurz y el Partido Popular en Austria, refiriendo después su análisis a otros países europeos.

Así, el uso de estas nociones para analizar las dinámicas políticas en la región, y en particular en el caso peruano, plantea el desafío de adaptar los conceptos a la realidad local y regional. En el caso de Mudde (2019), diversos estudios que emplean la noción de “partidos populistas de derecha radical” han ajustado características como el “nativismo”, dado que las realidades migratorias en América Latina no son comparables a las europeas; en cambio, se ha puesto énfasis en el carácter antifeminista, antiindígena o antiminorías sexuales de estas derechas. En cuanto a la noción de populismo como característica central de las derechas analizadas consideramos más útil abordar los rasgos populistas como una estrategia política del cual se hace uso en condiciones específicas de la disputa política y que tiene como objeto conectar con el descontento frente al status quo político y social, como indican Traverso (2018) y Strobl (2024), antes que como una ideología ‘delgada’ como propone Mudde (2019). Si bien Mudde también concibe el populismo en las derechas radicales como una estrategia, su énfasis recae en analizarlo principalmente como una ideología.

Por su lado, Traverso (2018) propone el concepto de “posfascismo”, que se ajusta bien a la tradición de las derechas europeas, pero plantea desafíos para esta investigación, ya que en América Latina las nuevas derechas están más influenciadas por tradiciones autoritarias locales que por el fascismo clásico (UBILLUZ, 2021). En el caso peruano, la “tradición autoritaria” (GALINDO, 1999) es más influyente en las dinámicas políticas que el fascismo, que fue un movimiento marginal en la historia política del país. Asimismo, el énfasis de Traverso en el carácter decididamente pragmático del “posfascismo” resulta especialmente útil para comprender las dinámicas, a menudo

contradictorias, con las que las nuevas derechas se desenvuelven en el ámbito político. A diferencia de Strobl y Mudde, quienes también reconocen el pragmatismo en estas derechas, pero sin destacarlo, Traverso lo resalta como un rasgo central. Además, el hecho de que el “posfascismo” sea un concepto en movimiento –aludiendo a una etapa específica y en desarrollo de estas derechas– permite su expansión a medida que los actores van tomando posturas más claras respecto a las democracias. Esta idea de un concepto en movimiento es útil, considerando que esta investigación también pretende analizar un fenómeno en pleno desarrollo.

A su vez, Strobl (2022) propone la noción de “conservadurismo radicalizado” para dar cuenta de un proceso de radicalización en el que fuerzas tradicionalmente conservadoras adoptan posiciones más cercanas a la extrema derecha. La autora sostiene que el contexto de crisis múltiple ha impulsado tanto el crecimiento de la extrema derecha como la radicalización de importantes sectores de la sociedad. En ese sentido, si bien el concepto de “conservadurismo radicalizado” parte de la idea de la radicalización de organizaciones partidarias con larga tradición y presencia entre diversos sectores sociales, para esta investigación resulta pertinente ampliarlo y aplicarlo al campo de las derechas conservadoras que han experimentado un proceso de radicalización en los últimos años en el Perú. Así, siguiendo el enfoque de Strobl, se analizará el proceso de radicalización que ha tenido lugar en este espectro conservador, colocando el énfasis en Fuerza Popular y Keiko Fujimori, durante el período abordado en la presente investigación.

En conclusión, el análisis de las nuevas derechas en América Latina, y específicamente en Perú, requiere una adaptación de los conceptos desarrollados en contextos europeos y norteamericanos para captar las particularidades regionales. Mientras que Mudde (2019) enfatiza el populismo como una ‘ideología delgada’ con rasgos nativistas y autoritarios, en el contexto latinoamericano este enfoque debe ajustarse, destacando en cambio el carácter antifeminista, antiindígena y anti-minorías sexuales de estas derechas. Asimismo, la noción de ‘posfascismo’ de Traverso (2018) ayuda a entender la influencia del pragmatismo político en estas fuerzas, aunque es necesario considerar que la tradición autoritaria en la región ha tenido mayor impacto que el fascismo clásico. Finalmente, la propuesta de Strobl (2022) sobre el ‘conservadurismo radicalizado’ resulta especialmente útil para analizar la radicalización de sectores conservadores en Perú, extendiendo su influencia más allá de partidos específicos hacia un espectro político más amplio.

5- Camino metodológico

La presente investigación se desarrollará a través de un enfoque cualitativo, que permitirá profundizar en la temática mediante el análisis de un caso específico (Ragin, 2007), contribuyendo así a ampliar el estudio de las derechas en la región. Este enfoque cualitativo nos permitirá aproximarnos con mayor flexibilidad al análisis de un fenómeno que está en pleno desarrollo.

El análisis se sustentará en la recopilación y contraste de diversas fuentes, abarcando prácticas legislativas, discursos y narrativas mediáticas, así como posicionamientos institucionales de las organizaciones que componen el campo de las derechas conservadoras en el Perú. Las fuentes se dividen en las siguientes categorías:

1. Documentación oficial y discursos públicos

- **Fuentes:** Comunicados, manifiestos y declaraciones públicas de partidos y líderes políticos; entrevistas a líderes conservadores en medios de comunicación; y publicaciones institucionales en sitios web y boletines oficiales.
- **Objetivo:** Identificar las posiciones explícitas de los actores sobre las temáticas en cuestión, permitiendo un análisis de sus posturas oficiales.

2. Redes sociales de partidos y líderes políticos

- **Fuentes:** Publicaciones en Twitter (X), Facebook, Instagram y otras plataformas de redes sociales de partidos o figuras relevantes.
- **Objetivo:** Capturar discursos y reacciones inmediatas ante eventos coyunturales. Esta revisión permitirá también detectar posibles contradicciones o variaciones entre discursos públicos y digitales, ampliando así el panorama de las posiciones de los actores.

3. Análisis de fuentes legislativas

- **Fuentes:** Proyectos de ley, resoluciones legislativas y debates en el Congreso; votaciones y alineamientos partidarios en temas como minorías sexuales, valores tradicionales, políticas económicas y seguridad.
- **Objetivo:** Evaluar e identificar tendencias legislativas alineadas con un conservadurismo radicalizado, de acuerdo con el marco teórico.

4. Investigaciones periodísticas y académicas

- **Fuentes:** Reportajes e investigaciones periodísticas sobre dinámicas conservadoras y radicalización política en el Perú, así como estudios académicos previos que exploran procesos similares, especialmente en torno al desarrollo de las derechas radicales en América Latina.
- **Objetivo:** Ampliar el análisis a través de interpretaciones críticas y contextos adicionales que revelen aspectos ocultos o poco evidentes en los discursos oficiales.

Esta metodología cualitativa, mediante el cruce de múltiples fuentes y la comparación de datos, permitirá un análisis más detallado y contextualizado de las posiciones conservadoras en el Perú, contribuyendo al estudio de los procesos de radicalización y a una comprensión más amplia del fenómeno en la región.

Capítulo II

La larga crisis política y social peruana

1- Breve contextualización del periodo fujimorista

La victoria de Alberto Fujimori en las elecciones de 1990 sorprendió a todos los sectores políticos. Reyna (2000) y Tanaka (1998) mencionan que las fuerzas políticas más importantes de entonces no prestaron atención al ascenso gradual de los candidatos “independientes” quienes en las elecciones municipales de 1989 habían ganado terreno, en un contexto de creciente crisis económica y de conflicto armado.

Fujimori, inicialmente un candidato sin grandes expectativas pasó rápidamente al segundo lugar en la primera vuelta, logrando casi el mismo porcentaje de votos que el candidato Mario Vargas Llosa y el FREDEMO, 29.2% y 32.6% respectivamente (TUESTA, 2001). En la segunda vuelta Fujimori capitalizó la polarización generada por las propuestas de ajuste económico de Vargas Llosa, rechazando un “shock económico” y posicionándose como un candidato cercano a las clases populares y a los migrantes internos, lo que le permitió ganar el apoyo de sectores como el Apra e Izquierda Unida y sus bases electorales. Sin embargo, tras asumir el poder, Fujimori abandonó su programa original y adoptó las políticas del candidato derrotado.

Desde el inicio, el gobierno de Fujimori buscó polarizar con distintos sectores políticos y sociales. Por un lado, confrontó a los grupos antineoliberales organizados – hasta 1990– en Izquierda Unida y en las organizaciones sociales y sindicales vinculadas a ella, bajo el pretexto de combatir al grupo fundamentalista alzado en armas Sendero Luminoso. Por otro lado, se enfrentó a los partidos de la derecha tradicional, agrupados en el Frente Democrático y con representación en el Congreso, a quienes acusó de ser “políticos tradicionales” (KLAREN, 2012).

El gobierno de Alberto Fujimori inició un proceso sistemático de desestructuración y abandono del proyecto de Estado desarrollista heredado de la “Revolución Peruana” de las Fuerzas Armadas (1968-1975) y del régimen democrático de la constitución de 1979. Así, reconfiguró el panorama económico y sociopolítico en el Perú. El nuevo gobierno implementó un programa neoliberal en un contexto de crisis profunda, lo que lo ayudó a legitimar sus medidas, pero enfrentó fricciones con otras fuerzas políticas, lo que usó para justificar un autogolpe en 1992 y acabar con la oposición

en el Congreso. Para entonces sectores más radicales de la derecha apoyaban desde antes la posibilidad de un golpe como salida a la crisis (DURAND, 1990).

La instauración del neoliberalismo fue posible en un contexto autoritario, el uso de instituciones públicas contra opositores y el empleo sistemático de la fuerza militar para controlar a las fuerzas sociales o políticas incómodas con el régimen (TANAKA Y MARCUS, 2001; KLAREN, 2012). A pesar de ello el régimen enfrentó tensiones sociales y políticas constantes, el neoliberalismo en el Perú como señala Tanaka (2008), siempre fue un proyecto parcialmente incompleto debido a los dilemas que el gobierno tuvo que resolver en el ámbito social y político que no cesaron durante los diez años de gobierno, aunque estas no cuestionaron la continuidad del régimen.

La instauración del neoliberalismo en el Perú fue posible en un contexto autoritario, caracterizado por el uso de las instituciones públicas contra los opositores y el empleo sistemático de la fuerza militar para controlar a los sectores sociales y políticos incómodos con el régimen (TANAKA Y MARCUS, 2001; KLAREN, 2012). No obstante, el gobierno enfrentó tensiones sociales y políticas constantes. Como señala Tanaka (2008), el neoliberalismo en el Perú fue siempre un proyecto parcialmente incompleto, debido a los dilemas que el régimen debió afrontar en el plano social y político a lo largo de sus diez años en el poder. Según Tanaka y Marcus (2001) si bien persistieron, estas tensiones no cuestionaron la continuidad del régimen durante buena parte de lo que duró el gobierno.

No obstante, estas tensiones confluyeron en el proceso electoral del año 2000, cuando el gobierno de Fujimori intentó perpetuarse en el poder mediante una serie de irregularidades. Entre enero y noviembre de ese año, el Perú vivió una intensa actividad política y social. A las denuncias de corrupción difundidas por algunos medios desde finales de 1999 se sumaron las acusaciones de fraude vinculadas a la tercera reelección presidencial, lo que reactivó un ciclo de movilizaciones populares que debilitó fuertemente la legitimidad del Ejecutivo y generó las condiciones para la caída del régimen. Durante esos meses, las protestas adquirieron un carácter masivo y se consolidaron como un espacio de confluencia de diversos actores políticos y sociales, con distintas tendencias e intereses, en torno a las banderas que sustentaron las manifestaciones en todo el país.

2- Las promesas de la transición

Tras la caída del gobierno cívico-militar de Fujimori en noviembre de 2000, en un contexto marcado por movilizaciones sociales, denuncias de corrupción y cuestionamientos internacionales, el Perú inició un periodo de transición que pretendió impulsar un proceso de regeneración democrática e institucional, al mismo tiempo que canalizar las demandas sociales surgidas en el contexto de la lucha contra el régimen.

2.1 La agenda sociopolítica contra el fujimorismo

Las movilizaciones sociales contra el fujimorismo comenzaron a crecer desde mediados de la década de 1990. Después de la reelección de Fujimori en 1995, el gobierno empezó a allanar el camino legal para asegurarse un tercer mandato en las elecciones generales del año 2000. De esta manera, impulsó la aprobación de la “Ley de Interpretación Auténtica” con la mayoría parlamentaria en el Congreso, para poder habilitarlo como candidato a una tercera reelección a pesar de que la Constitución de 1993 prohibía explícitamente esta posibilidad. El gobierno argumentó que, dado que Fujimori fue elegido bajo la Constitución de 1993 por primera vez en 1995, sí podría ser candidato, ya que su elección en 1990 fue bajo la Constitución de 1979. En esta interpretación, se consideraba que su participación en las elecciones del 2000 constituiría su primera reelección bajo la nueva Constitución. Esta acción provocó el rechazo de toda la oposición política, desde partidos de derecha tradicional que, si bien apoyaban las medidas económicas del régimen, criticaban severamente el accionar político del gobierno.

La oposición, compuesta por partidos políticos y organizaciones sociales, llevó a cabo una campaña para promover un referéndum que consultara si se estaba de acuerdo o no con la reelección que Fujimori pretendía llevar adelante. Rápidamente, la campaña tomó fuerza, logró articular a los diversos sectores opositores y convocó a movilizaciones cada vez más masivas a lo largo de los últimos tres años del segundo gobierno fujimorista (ILIZARBE, 2022). El éxito de esta campaña permitió que se reuniera rápidamente la cantidad de firmas requeridas para que la iniciativa ciudadana pudiera ser discutida en el Congreso. Sin embargo, dada la mayoría parlamentaria oficialista, la propuesta fue rechazada (BLANCAS, 2004).

Cuando la “Ley de Interpretación Auténtica” llegó al Tribunal Constitucional para su revisión, este organismo determinó que era inconstitucional, lo que provocó que el

Congreso destituyera a los magistrados que se opusieron a la ley promovida por el gobierno. Inmediatamente, se designó a nuevos miembros afines al gobierno, quienes dieron pase libre a la tercera reelección de Fujimori.

Con un escenario político polarizado, las protestas contra el régimen continuaron creciendo, y la articulación de la oposición dio lugar a la formación del Foro Democrático en 1997, una instancia que se consolidó como una mesa de coordinación política y social contra el régimen. Si bien la oposición confluyó alrededor del Foro Democrático, las diferencias internas entre sus miembros eran evidentes.

A nivel de partidos políticos, el Foro Democrático incluía a agrupaciones como el Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional, Unión por el Perú, Partido Aprista Peruano, Perú Posible, Somos Perú, Acción Popular, Democracia Cristiana, Movimiento por la Democracia y el Partido Unificado Mariateguista. Aunque tenían diferencias programáticas entre sí, lograron coincidir en una agenda común denominada “Acuerdo por la Gobernabilidad” a fines de 1999 (HERNÁNDEZ, 2004). Este acuerdo establecía las tareas prioritarias de un nuevo gobierno en un contexto de retorno a la democracia. En ese marco, las fuerzas políticas de la oposición se comprometieron a llevar adelante una serie de reformas, incluyendo: una reforma política; económica, con énfasis en la creación de empleo; sociales, enfocadas en mejoras salariales en los sectores de salud y educación, y en el fortalecimiento de los derechos laborales; una reforma del Estado y descentralización –proceso paralizado desde el golpe de 1992–; y una reforma de las fuerzas armadas y la policía.

A nivel de organizaciones sociales, había una marcada presencia de agendas críticas al régimen económico del gobierno fujimorista, combinadas con demandas democratizadoras. Así, las protestas sociales fueron convocadas por diversas organizaciones, como la Confederación General de Trabajadores del Perú y sindicatos locales, que lideraron la mayoría de estas movilizaciones (ILIZARBE, 2022). También participaron la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, los frentes regionales de defensa, colectivos de artistas y federaciones universitarias. Las principales consignas incluyeron demandas contra las privatizaciones, la erosión de derechos laborales, la corrupción, y reclamos descentralistas impulsados por los frentes de defensa regionales. Asimismo, se exigía la redacción de una nueva constitución que reemplazara la de 1993 y la redemocratización del país (FORD, 2004; ILIZARBE, 2022).

De este modo, las movilizaciones sociales contra el régimen de Fujimori se alimentaron del descontento generado por las políticas sociales y las medidas de corte neoliberal en la economía, como señala Ilizarbe (2022), así como por la indignación ante las prácticas de corrupción y las violaciones de derechos humanos que el régimen empleaba para perpetuarse en el poder. Este descontento dio lugar a demandas territoriales, canalizadas principalmente a través de los Frentes de Defensa, que exigían mejoras en infraestructura de salud, educación y conectividad. Por otro lado, las demandas sectoriales, como las de los sindicatos obreros y de docentes, se centraban en incrementos salariales. A estas reivindicaciones específicas se sumaban demandas transversales de democratización y reformas sociales y económicas, que lograron articular tanto a la oposición social como a la oposición política.

2.2 El gobierno de transición y las reformas

En medio de un contexto de masivas protestas sociales, aislamiento internacional y escándalos de corrupción que involucraban a militares, empresarios y políticos, Fujimori optó por huir del Perú a fines del año 2000. Alegando que asistiría al foro APEC en Brunéi, posteriormente se trasladó a Japón, desde donde envió su renuncia a la presidencia de la República (FORD, 2004). Sin embargo, el Congreso rechazó su renuncia y, acto seguido, lo destituyó por incapacidad moral. De esta forma, Valentín Paniagua, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia.

El gobierno de transición de Paniagua, según Ford (2004), enfrentaba dos desafíos principales: por un lado, cerrar un ciclo de régimen autoritario que había erosionado el sistema democrático y sus instituciones, y por otro, iniciar una nueva etapa política orientada a la recuperación democrática, lo que requería establecer las bases necesarias para ello. Para afrontar estos retos, el gobierno de transición conformó un gabinete de ministros integrado por diversos personajes de la oposición al fujimorismo, provenientes mayoritariamente del espectro de la centroderecha. En este contexto, la agenda propuesta por el gobierno de Paniagua incluyó: la restauración del sistema democrático, la garantía de elecciones limpias y el mantenimiento de la estabilidad económica (FORD, 2004).

En los ocho meses que duró la transición, el nuevo gobierno implementó medidas como: la restitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional que habían sido destituidos durante el régimen fujimorista, se reiteró la adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para

investigar los veinte años de violencia política, y la asignación al Congreso de la tarea de formular una propuesta para la reforma total de la Constitución de 1993, lo que llevó a la creación de la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional. Además, se retomó el impulso para atender las demandas regionales de descentralización mediante la implementación de gobiernos regionales, se conformó la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, y se promovió la propuesta de la Carta Democrática Interamericana, presentada ante la OEA, entre otras iniciativas (FORD, 2004).

Este impulso reformista, promovido por una sociedad movilizada durante la lucha contra la dictadura en los años noventa y fortalecido en el contexto del año 2000, que sustentó al gobierno de transición, fue perdiendo fuerza con la llegada de las nuevas administraciones posteriores al gobierno de Paniagua.

2.3 El Acuerdo Nacional

Iniciado el nuevo gobierno, y en un contexto de expectativas por la posibilidad de una convocatoria a una Asamblea Constituyente, el Ejecutivo propuso al Congreso la creación de un foro en el que se construya a través del consenso políticas de Estado. Así, el Acuerdo Nacional (AN) surgió en un contexto de transición democrática tras la caída del régimen fujimorista, con el objetivo de canalizar demandas sociales y establecer consensos políticos (HERNÁNDEZ, 2004). Inspirado en experiencias como el Pacto de la Moncloa en España y acuerdos similares en Bolivia y Chile, su diseño incluyó la participación de partidos políticos con representación parlamentaria y antecedentes democráticos, además de organizaciones sociales y empresariales como indica Hernández (2004). De esta manera, participaron los partidos políticos Acción Popular, Frente Independiente Moralizador, Partido Aprista Peruano, Perú Posible, Somos Perú, Unión por el Perú y la alianza Unidad Nacional. Por parte de la sociedad civil, participaron la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y la Sociedad Nacional de Industrias.

El Acuerdo Nacional fue una forma institucional de canalizar las demandas sociales y orientarse hacia la generación de consensos en un escenario de precariedad de la institucionalidad democrática. Es decir, el Acuerdo Nacional fue diseñado para procesar las tareas de la transición y canalizar, de ese modo, el impulso reformista que

emergió del contexto de agitación política y social contra el fujimorismo (HERNÁNDEZ, 2004; FORD, 2004).

El proceso del Acuerdo Nacional comenzó a mediados de 2001 y culminó en julio de 2002 con el consenso en torno a 29 políticas de Estado que fueron presentadas como los “grandes acuerdos políticos” que deberían regir la democracia post-fujimorista. Estos consensos debían orientar el rumbo del país luego de una década caótica y polarizada; por ello, el Acuerdo Nacional tenía un carácter vinculante y estaba abierto a que nuevas fuerzas políticas o sociales se adhirieran (FORD, 2004). Las 29 políticas que sintetizó el Acuerdo Nacional fueron enmarcadas en cuatro ejes: Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho; Desarrollo con Equidad y Justicia Social; Promoción de la Competitividad del País; y Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. En los años siguientes, otras nuevas políticas de Estado fueron añadiéndose hasta llegar a 35 (ACUERDO NACIONAL, 2021).

Hernández (2004) señala que, para el segundo año de existencia del foro del Acuerdo Nacional, la desafección ciudadana hacia sus resultados era evidente. Esto se debió al énfasis en políticas de largo plazo que no respondían a las demandas sociales inmediatas ni a las expectativas generadas por los compromisos electorales. En este contexto, mientras el Acuerdo Nacional presentaba sus 29 políticas de Estado, se reactivaron protestas sociales, destacando las movilizaciones contra las privatizaciones iniciadas en Arequipa a inicios de 2002, que luego se extendieron a otras regiones. Estas protestas llevaron al gobierno a declarar el Estado de Emergencia y, posteriormente, a retroceder en su agenda privatizadora. Según Ilizarbe (2022), en los años siguientes, las protestas continuaron creciendo, retomando demandas del periodo antifujimorista e incorporando nuevas reivindicaciones.

3- La democracia neoliberal post-fujimorista

Como vimos en la primera parte, el Perú luego abandonar el proyecto desarrollista e industrializador de fines de la década de 1960 y comienzos de 1970 se integró a la globalización neoliberal llevando adelante un programa de ajustes, privatizaciones y apertura de la economía como sugería el FMI a comienzos de 1990. Estas nuevas políticas económicas fueron implementadas en un contexto de persecución y represión a los sectores populares y de la oposición política que no se alineó al régimen. El modelo implementado a través de dictadura se institucionalizó en la Constitución de 1993. Sin

embargo, las tensiones y luchas sociales en el Perú no fueron ajenas a las que se llevaban en la región contra las políticas neoliberales. En ese sentido es necesario un breve recuento de cómo estas tensiones persisten y en qué condiciones políticas, económicas y sociales le toca afrontar la crisis global.

3.1 Modernización neoliberal del Estado

La modernización neoliberal implicó cambios estructurales en el Estado. En principio, cambió la orientación respecto al modelo de desarrollo y los acuerdos sociales previos. En 1978, el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez –obligado por la inestabilidad política y social– convocó elecciones para una Asamblea Constituyente que constitucionalizara parte de las políticas desarrollistas e industrialistas implementadas durante el gobierno de Velasco Alvarado (1968-1975). Así, se estableció un modelo económico y acuerdos sociales que pretendían superar el régimen oligárquico y extractivista previamente existente. De este modo, la Constitución de 1979 reconoció la reforma agraria y la redistribución de la tierra, la participación sindical, los derechos laborales, el papel del Estado como actor clave en el desarrollo industrial a través de empresas estratégicas, y la promoción de las empresas cooperativas, entre otros.

La implementación neoliberal en la década de 1990 se llevó a cabo por etapas marcadas, principalmente, por el golpe de Estado de 1992. Alarco (2010) indica que el gobierno de Fujimori adoptó los principios del libre mercado a través de una estrategia estructurada en etapas, que incluyó, en primer lugar, la aplicación de un radical programa de estabilización; posteriormente, se implementó un proceso de reformas estructurales cuyo objetivo era vincular al país con la economía global. Por su parte, Durand (2017) señala que la liberalización iniciada por el fujimorismo siguió el siguiente orden: a) la estabilización de la economía heredada mediante el control del déficit fiscal y la reducción de la inflación; b) la liberalización, desregulación de la economía y privatización de los activos públicos; c) la institucionalización y constitucionalización de los cambios en el Congreso Constituyente de 1993; y, luego del 2000, d) la profundización y blindaje de las reformas a través de Tratados de Libre Comercio, acuerdos comerciales, mecanismos como Asociaciones Público-Privadas y fórmulas como Obras por Impuestos.

Estas medidas, en la década de 1990, se desarrollaron en dos momentos importantes: de 1990 a 1992, con el Congreso aún en funcionamiento, se llevaron a cabo despidos masivos y recortes presupuestales. Luego del golpe de 1992, se inició la

privatización de los activos públicos (DURAND, 2017). Este proceso de privatización transformó el peso de los capitales en la economía peruana. Así, debido a las limitaciones de los capitales nacionales para adquirir las empresas estatales de mayor peso estratégico, la mayor parte de estas fue adquirida por compañías transnacionales, que rápidamente se convirtieron en la forma principal de capital en el Perú, desplazando a los capitales privados nacionales y provocando la desaparición del capital cooperativo, como indica Durand (2016; 2017). Este mismo autor señala que durante la década de 1990 se privatizaron más de 150 empresas estatales. Solo algunas empresas quedaron bajo la administración del Estado, aunque recortadas en sus funciones, como Petroperú, que dejó de realizar actividades exploratorias, y Sedapal, cuya gestión principal fue tercerizada. Además, el cierre de los bancos de desarrollo marcó profundamente los cambios en el modelo económico; instituciones como el banco agrario, hipotecario, industrial y minero fueron cerrados definitivamente. Del mismo modo, se desmantelaron el Instituto Nacional de Planificación y otras instituciones orientadas al desarrollo desde el Estado.

Durand (2017) indica que con las reformas institucionales que se implementaron el Estado neoliberal se construyó fuerte y moderno en algunas “islas de eficiencia” que estaban orientadas al capital y al clima favorable de negocios, pero débil y deficiente en los ámbitos sociales del Estado o en los ámbitos de seguridad y justicia. Así la transformación neoliberal del Estado fue parcial y heterogénea institucionalmente.

De este modo, las denominadas “islas de eficiencia” en el Estado neoliberal se consolidaron a través del sistema de recaudación tributaria, que fue reformado a inicios del gobierno de Fujimori. Así, la SUNAT adquirió mayor autonomía, reorganizó su estructura y personal, y se incrementaron los salarios de sus trabajadores. En un principio, esto permitió un rápido incremento de la recaudación tributaria; sin embargo, posteriormente, dicho impulso se debilitó (DURAND, 2017). La reforma tributaria simplificó el sistema de impuestos, reduciéndolos de 180 a solo 4. Además, se incrementó el peso del IGV en la recaudación fiscal, mientras que el impuesto a la renta fue reducido, configurando un sistema tributario con un marcado carácter regresivo. Por otra parte, la tendencia a la reducción del impuesto a las rentas continuó con los gobiernos posteriores a Fujimori. Asimismo, los aranceles siguieron disminuyendo, mientras que el IGV se ha mantenido como uno de los más altos de América Latina (SANCHEZ-SIERRA, 2022; PEÑARANDA, 2016).

En ese mismo sentido, Durand (2017) señala que el Banco Central de Reservas fue reorganizado y reformado, logrando mayor autonomía presupuestal. Se llevó a cabo una reorganización de su personal y se le otorgaron nuevas prerrogativas legales para liberalizar los controles monetarios, interviniendo en el mercado cambiario solo en casos de contingencias excepcionales. De este modo, el Banco Central pasó a manejar ‘técnicamente’ las tasas de referencia. El objetivo principal del Banco Central se centró en controlar la inflación, mantenerla a raya, y acumular y gestionar las reservas internacionales. Asimismo, se limitaron sus funciones de planeamiento: de haber desempeñado el papel de generador de diagnósticos y elaborar propuestas, su función quedó restringida únicamente a los diagnósticos, dejando al mercado la tarea de desarrollarse ahí donde las condiciones fueran favorables. De manera similar, se implementaron ajustes en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), fortaleciendo esta institución mediante reformas organizativas y la adopción de los principios bancarios de Basilea, alineándola con las reglas internacionales del sector bancario. Esto permitió otorgar mayor libertad a los bancos para manejar, según su criterio, las tasas de interés anuales y los cobros por recargos, que rápidamente tendieron a ser altos debido a la generalización del crédito, como destaca Durand (2017).

Con la era neoliberal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se consolidó como el ministerio más importante del Ejecutivo, actuando como ente económico rector. Por una parte, reclutó tecnócratas provenientes de organismos internacionales y corporaciones nacionales y extranjeras; por otra, concentró poderes burocráticos, destacando su posición para definir los presupuestos de los organismos reguladores, actuar como eje central en las negociaciones internacionales en materia económica y negociar con el Congreso las políticas económicas y los presupuestos nacionales. Todo ello convirtió al MEF en un “superministerio” que, según Wise (2003) citada por Durand, no tuvo paralelo en la región. De esta manera, el MEF, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros se establecieron como los entes rectores de las políticas económicas del país. Estos organismos destacaron por su perfil técnico y por mantenerse alejados de los vaivenes políticos, aunque, como señala Durand (2017), estaban permeados ideológicamente por la doctrina neoliberal.

Otras de las “islas de eficiencia” desarrolladas en el Estado neoliberal peruano fueron los organismos reguladores. A medida que avanzó el proceso de privatización, a las “islas de eficiencia” ya mencionadas se sumaron otras, cuyo objetivo principal fue

regular y promover la inversión privada. En este contexto, surgieron organismos como Osiptel en telecomunicaciones, Osinerg en energía, la Superintendencia de Fondos de Pensiones en jubilaciones, Indecopi en propiedad intelectual y competencia, y Proinversión para promover inversiones mediante mecanismos como obras por impuestos, asociaciones público-privadas y la venta de las empresas públicas restantes.

Todos estos organismos tenían en común la contratación de profesionales altamente calificados de las mejores universidades, quienes recibían salarios competitivos, lo que permitió la creación de una tecnocracia moderna. Sin embargo, estos profesionales estaban doctrinariamente orientados a priorizar el ámbito privado sobre los intereses ciudadanos (Durand, 2017). La orientación ideológica de estos organismos se aseguró y mantuvo en el tiempo a través de la conformación de directorios cuyos miembros eran designados por el presidente de la República, quien optaba principalmente por empresarios, abogados o economistas identificados con la doctrina neoliberal. Durand (2017) señala que estas prácticas se consolidaron con el retorno a la democracia y la llegada de nuevos gobiernos. En este sentido, Durand indica que en estos organismos operó lo que se conoce como la “captura del Estado”, ya sea mediante una “captura cognitiva” (afinidades ideológicas con la economía de mercado) o una “captura corporativa” (tecnócratas vinculados directamente a empresas privadas designados para dirigir los organismos públicos).

En relación con aquellas áreas que no formaron parte de las “islas de eficiencia” se encuentran los ámbitos sociales del Estado. La modernización en estas áreas fue limitada y se implementó de manera fragmentada a lo largo del tiempo. Durand (2017) señala que los principales cambios se dieron en el enfoque de las políticas sociales, al adoptar el criterio de focalización para su implementación, un modelo promovido mediante asesorías de organismos internacionales como el Banco Mundial. Asimismo, ministerios como el de Salud y Educación recibieron misiones del Banco Mundial, las cuales operaban desde dentro de estas instituciones y orientaban el desarrollo de nuevas políticas. Sin embargo, la estructura del personal existente y las condiciones laborales bajo las cuales operaban estas instituciones no fueron reformadas, lo que limitó el impacto de los cambios.

Sobre la educación, Durand (2017) señala que, dado que la orientación del Estado se tornó privatizadora, la educación pública perdió relevancia, permitiendo que la lógica de mercado comenzara a operar en este ámbito. Así, bajo la lógica “competitiva”

recomendada por el Banco Mundial, emergieron colegios y universidades con fines de lucro que ampliaron las matrículas. Sin embargo, esto derivó, en muchos casos, en la proliferación de instituciones educativas que no garantizaban calidad en la enseñanza. Frente a los excesos generados por la educación de mercado, más de una década después de la liberalización de la lógica del lucro en el sector educativo, se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en 2014, con el objetivo de regular los problemas derivados de este sistema. No obstante, en los años siguientes, tras múltiples intentos de socavar los poderes reguladores de la Sunedu, bancadas en el Congreso vinculadas a propietarios de universidades privadas lograron, en 2022, desactivar las principales atribuciones de este organismo. Aunque la Sunedu sigue existiendo institucionalmente, su capacidad reguladora inicial fue desmantelada, transformándola en un ente principalmente observador.

Sobre el sistema de seguridad, Durand (2017) señala que las reformas en este ámbito fueron esporádicas y nunca se consideraron una prioridad por parte de los distintos gobiernos. La corrupción y la ineficiencia, características recurrentes de estas instituciones, se mantuvieron, y la modernización implementada en las ‘islas de eficiencia’ previamente mencionadas nunca alcanzó a estas áreas del Estado peruano. En este sentido, si bien tras el retorno a la democracia se logró neutralizar el papel de las fuerzas armadas en la política y consolidar el poder civil sobre ellas, estas se mantuvieron como instituciones cerradas que aceptaban formalmente el poder civil, aunque no lo respetaban plenamente. En cuanto a la policía, la insuficiencia presupuestal, que se reflejaba en los bajos salarios de sus miembros, llevó a que los distintos gobiernos permitieran que trabajaran como agentes privados de seguridad. Esta práctica se mantuvo hasta 2015. Sin embargo, con el incremento de las protestas y los conflictos sociales desde el año 2000, el uso informal de unidades policiales por parte de empresas para proteger sus instalaciones se formalizó en 2009, permitiendo que estas contrataran unidades policiales especiales para custodiar y defender sus instalaciones en contextos de conflictos sociales, a cambio de remuneraciones adicionales.

En relación con el sistema de justicia, ésta pasó por una etapa de grave corrupción durante la década fujimorista y se recuperó solo parcialmente luego del retorno a la democracia. Fujimori, con el golpe de Estado de 1992, intervino directamente en el Poder Judicial y destituyó a varias decenas de jueces acusados de “politización” y “corrupción”, entre los cuales se encontraban defensores de los derechos humanos (DURAND, 2017).

La nueva Constitución de 1993 creó el Consejo Nacional de la Magistratura como un órgano encargado de evaluar a los jueces. No obstante, como señala Durand (2017), estos nuevos organismos fueron cooptados por el gobierno. Así, con el retorno a la democracia, se recompuso el Consejo Nacional de la Magistratura y se implementaron tribunales anticorrupción. Posteriormente, el gobierno de Toledo aumentó los salarios y creó una escuela judicial para mejorar la capacitación de los funcionarios. Estas acciones, según Durand, fueron importantes, pero marcadamente limitadas. Los gobiernos siguientes no implementaron reformas significativas; por el contrario, como indica Durand (2017), debilitaron los tribunales anticorrupción. No obstante, a inicios de su mandato, Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018) intentó crear un Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el terremoto político provocado por el caso Lava Jato en 2017, que involucró a expresidentes de la república, ministros, funcionarios, congresistas y empresarios, desmoronó esta tentativa de reforma desde el gobierno.

Durand (2017) señala que la construcción del Estado neoliberal en Perú fue desigual y avanzó a distintos ritmos. Los cambios más profundos se dieron en el ámbito económico, donde las reformas y la modernización contaron con el respaldo de tecnócratas, organismos internacionales y grandes empresas. Este enfoque permitió crear condiciones favorables para la inversión y el predominio empresarial. Sin embargo, en otros sectores del Estado, las reformas fueron parciales y muchas fracasaron, especialmente durante el periodo posterior a la transición política. En el ámbito social, las políticas se orientaron hacia la focalización, pero los organismos responsables de su implementación no fueron reformados en términos de capital humano. En el sistema de seguridad y justicia, la corrupción de la década de 1990 generó un profundo descrédito que persiste entre la población, a pesar de las reformas incompletas.

Durand también destaca que las reformas estatales se limitaron a “islas de eficiencia”, sin lograr abarcar el aparato estatal en su conjunto. En 1995, bajo recomendación del Banco Mundial, se intentó una reforma burocrática; sin embargo, esta perdió prioridad ante la necesidad de estabilización política, la crisis económica de 1998 y los conflictos sociopolíticos. Tras la caída del gobierno de Fujimori, estas reformas tampoco fueron implementadas. Fue recién en 2014 cuando el Ministerio de Economía y Finanzas impulsó la Ley Servir, destinada a incorporar profesionales meritocráticos en la administración pública. Sin embargo, esta reforma se centró —principalmente— en mejorar las condiciones de la alta burocracia, dejando al margen al resto de los funcionarios,

quienes, además, enfrentaron restricciones para organizarse y presentar demandas colectivas.

3.2 La economía y el trabajo

La liberalización implementada en la década de 1990 rediseñó el papel del Estado en relación con la economía, el desarrollo y los acuerdos sociales previos (DURAND, 2017; CONNELL, 2018). De esta manera, la economía peruana abandonó el proyecto desarrollista e industrializador y se orientó hacia un impulso fuerte a las industrias extractivas, las cuales experimentaron un periodo prolongado de crecimiento, mientras que otras áreas económicas se debilitaron (ALARCO, 2010). Esto consolidó su papel periférico en la división internacional del trabajo, como señalan Duménil y Lévy (2014) respecto a la profundización de la condición periférica de los países primario-exportadores en el contexto de la globalización neoliberal.

La modernización neoliberal de la economía implicó una reestructuración del poder económico en el Perú, que se concentró en pocas manos y permitió la formación de nuevas fracciones entre las élites económicas (DURAND, 2016). Esta reestructuración incluye elementos de continuidad y cambio; así, las élites económicas han dejado atrás aspectos oligárquicos tradicionales y han adoptado una lógica tecnocrática y empresarial moderna. Asimismo, Durand (2016) señala que el poder económico no se limita exclusivamente a las industrias extractivas exportadoras, sino que también se ha desarrollado un mercado financiero, principalmente en las ciudades, que involucra a empresarios de diferentes orígenes, sean estos elitistas o populares. Sin embargo, la concentración del poder económico se ha intensificado, convirtiéndose en un rasgo relevante de la modernización neoliberal. En este contexto, la economía peruana ha pasado a ser comandada por las industrias extractivas y el sector financiero, que ejercen su influencia a través de grupos de poder económico nacionales y extranjeros, con inversiones diversificadas en diferentes sectores de la economía (DURAND, 2016).

En el apartado anterior se analizaron las reformas institucionales implementadas para organizar el Estado neoliberal. A continuación, se examinarán las características específicas que adoptó la economía peruana importantes en la relación conflictiva con el contexto sociopolítico del país.

Como señala Connell (2014), el neoliberalismo en los países del sur global reconfiguró tanto el uso como la propiedad de la tierra; así en estas regiones se

implementaron modalidades de uso como las Zonas Económicas Especiales, los enclaves extractivos y la expansión de la frontera agroexportadora. En ese sentido, sobre la propiedad y el uso de la tierra, Durand (2017) indica que, durante el fujimorismo, la propiedad comunal amazónica y andina fue profundamente afectada por el ímpetu privatizador promovido desde el Estado. Los territorios comunales sufrieron impactos significativos debido a la concesión de enclaves extractivos por parte del Ejecutivo, la incursión de colonos en la Amazonía y la presencia de empresas petroleras y madereras. Estos enclaves extractivos generaron conflictos sociales de carácter polanyianos y marxianos, es decir conflictos en rechazo de estas nuevas actividades que reconfiguraban las relaciones comunitarias preexistentes y conflictos por una mayor redistribución de las riquezas generadas como indica Silver (2003). No obstante, estos conflictos sociales serán analizados con mayor detalle en el siguiente apartado.

Los nuevos capitales extractivos que llegaron a las distintas regiones del Perú no se tradujeron en una generación significativa de empleos para la población. Estas inversiones eran intensivas en capital, pero limitadas en la creación de empleos directos y sostenidos en el tiempo. Ante la falta de oportunidades, Durand (2017) señala que esto contribuyó al impulso de un extractivismo ilícito, como la extracción informal e ilegal de minerales, maderas preciosas y el cultivo de coca, entre otras actividades.

Por otra parte, tras la reforma agraria de 1969, que estableció límites a la gran propiedad de las tierras y dio predominio a la propiedad colectiva, a partir de la década de 1990 se inició un proceso acelerado de reprivatización de la tierra. Este fenómeno se produjo mediante la liberalización del mercado de tierras y aguas, como señala Durand (2017). En este contexto, Durand explica que las cooperativas azucareras que aún permanecían en los valles costeros –tras la reforma agraria de 1969 y la parcelación realizada en algunos casos durante la década de 1980–, y que contaban con las tierras más productivas del país, fueron obligadas a privatizarse. Este proceso se llevó a cabo mediante la conversión de las deudas que estas cooperativas tenían con el Estado en acciones. Dichas acciones fueron posteriormente vendidas a privados, quienes, en varios casos, utilizaron prácticas corruptas y violentas para constituir mayorías dentro de las cooperativas y asumir el control de la administración de las azucareras.

Durand (2017) y Eguren (2009) señalan que un segundo mecanismo de reprivatización de tierras fue la ampliación de la frontera agraria mediante grandes proyectos estatales de irrigación. Las nuevas tierras cultivables generadas por estos

proyectos se vendieron a través de mecanismos diseñados para beneficiar directamente a los grandes capitales, excluyendo a medianos y pequeños productores del acceso a estas nuevas áreas productivas. Este proceso contribuyó de manera decisiva al desarrollo del neolatifundismo. Además de este impulso estatal para transformar tierras eriazas en tierras agrícolas a través de grandes proyectos de irrigación, con la instalación de los Gobiernos Regionales durante el primer quinquenio de la década del 2000, se pusieron a la venta varios cientos de miles de hectáreas de tierras eriazas que luego se convirtieron en enclaves de la agroexportación. Eguren (2014) señala que estas ventas estuvieron acompañadas de denuncias de corrupción.

Durand (2017) señala que las medidas privatizadoras y concentradoras de tierras agrícolas estuvieron acompañadas por el abandono de la pequeña y mediana agricultura. El cierre del Banco Agrario desfinanció estas actividades, ya que la banca privada, que asumió su lugar, privilegiaba a la agroexportación. Durante la primera década del 2000 se creó Agrobanco, y las Cajas Municipales y Rurales ofrecieron cierto acceso al crédito a medianos y pequeños agricultores; sin embargo, una gran parte de ellos quedó excluida de este sistema de financiamiento (DURAND, 2017; MARTÍNEZ, 2023).

De este modo, la reconcentración de tierras desde 1990 en adelante ha superado la concentración existente antes de la Reforma Agraria de 1969, consolidando a la agroexportación como uno de los principales motores económicos de la economía neoliberal (EGUREN, 2009; DURAND, 2017). Todo ello ha generado una “modernización excluyente” en la agricultura, donde los pequeños agricultores, especialmente aquellos vinculados a comunidades andinas y amazónicas, han quedado al margen, según señala Eguren (2014).

El mundo del trabajo

En el contexto de liberalización económica, la predominancia de una economía primario-exportadora y de servicios ha afectado significativamente la generación de empleo formal y las condiciones laborales en el Perú. Las exportaciones y las divisas que estas generan han disminuido el atractivo de las inversiones industriales, lo que ha incrementado la dependencia de las importaciones, reducido la producción local y, por ende, generado menos empleos (GONZALES DE OLARTE, 2005). Por otra parte, las condiciones laborales en el Perú han cambiado con la flexibilización del mercado de trabajo que eliminó las negociaciones sectoriales y desligó los aumentos salariales del

incremento de la inflación. Esto último ha producido una caída sostenida en los salarios reales (LUST, 2020). En las últimas décadas, los trabajos temporales y la subcontratación han predominado en el mercado laboral, incrementando la precariedad y el subempleo, los cuales se han constituido en elementos funcionales a la economía neoliberal, según Lust (2020).

Las industrias extractivas, como se ha mencionado, son intensivas en capital, pero no en la generación de empleo, lo que ha llevado a que la mayoría de los trabajadores peruanos se inserte en una economía popular de subsistencia, caracterizada en la literatura académica como economía informal. Standing Guy (2014) quien analiza las formas de trabajo predominantes en el contexto neoliberal diferencia entre “proletariado” y “precariado”, los primeros –una creciente minoría– acceden a empleos con cierta estabilidad, con horarios fijos y algunas posibilidades de organizarse sindicalmente para negociar colectivamente, mientras tanto el “precariado” son aquellos trabajadores que acceden a empleos flexibles, con alta rotación, ausencia de derechos laborales y no están organizados sindicalmente; el “precariado” en el contexto neoliberal es la forma predominante de trabajo. En ese sentido, en el caso de los trabajadores peruanos una pequeña franja accede al mercado formal de trabajo integrándose al proletariado, mientras que la mayoría se emplea en trabajos informales ya sea en pequeñas industrias, comercios locales o mediante el autoempleo integrando el “precariado”.

La gran mayoría de los trabajadores labora en pequeñas empresas que no están integradas a cadenas de producción, ya sea de forma vertical u horizontal con empresas grandes o medianas (LUST, 2020). Este mismo autor señala que estas pequeñas empresas se caracterizan por su baja productividad, el uso de tecnología rudimentaria y maquinarias obsoletas en sus procesos productivos. Además, enfrentan dificultades para acceder a apoyo financiero y para desarrollar estrategias de mercado eficaces. A esto se suma que sus mercados de consumo son precarios, mientras que la competencia entre empresas con características similares es alta. Los salarios de los trabajadores en estos sectores suelen estar muy por debajo de los ofrecidos por las grandes empresas. No obstante, estas pequeñas empresas constituyen la principal fuente de empleo en el país, según indica Lust.

Este mismo investigador, Lust (2020), menciona que los márgenes de beneficio de estas pequeñas empresas no permiten la acumulación suficiente de recursos para desarrollar el capital humano ni implementar mejoras tecnológicas en el proceso

productivo, lo que impide un aumento de la productividad, y, en consecuencia, una posterior mejora de los salarios y la capacidad de consumo interno. En el caso de las grandes empresas, especialmente las extractivas, no consideran como problemático el impacto de los bajos salarios y las malas condiciones laborales sobre la demanda interna. Esto se debe a que el consumo local tiene poca relevancia para estas industrias, que están centradas en atender mercados internacionales.

Esta estructura económica, marcada por la precariedad laboral, es una característica estructural del modelo económico en el Perú. De esta manera, es funcional a la lógica del modelo a nivel global y forma parte del proceso de restauración del poder de clase (HARVEY, 2007; DUMÉNIL Y LEVY, 2014), que fue reestructurado respondiendo a la situación específica de las correlaciones de fuerza de clase en cada país como indica Lust (2020).

Respuestas ante las crisis: persistencia neoliberal de la economía ante los contextos internacionales críticos

A pesar de las limitaciones del modelo económico señaladas en los párrafos anteriores, el rápido crecimiento de las exportaciones de las industrias extractivas hacia los mercados internacionales permitió sostener indicadores macroeconómicos positivos, presentados como prueba del éxito del modelo. Este aparente ‘éxito’ se vio favorecido por el prolongado ciclo de altos precios de las materias primas entre 2002 y 2013, que consolidó la defensa del modelo y posibilitó un manejo de la economía en ‘piloto automático’. Sin embargo, la crisis global de 2008 planteó un serio desafío para las exportaciones peruanas.

Cuando la crisis global de 2008 llegó a Perú, la primera respuesta del gobierno de Alan García, a través del ministro de Economía, fue mantener el ajuste fiscal implementado unos meses atrás con el objetivo de reducir la leve inflación que se había presentado el último año. Sin embargo, ante los anuncios de que un choque externo podría provocar una devaluación de la moneda y desencadenar una reacción en cadena (DANCOURT Y MENDOZA, 2009), el gobierno, preocupado por los delicados equilibrios necesarios para sostener la estabilidad política en un contexto de protestas sociales, optó por una respuesta centrada en el aumento del gasto público en infraestructura. De esta manera, forzado por las circunstancias, el gobierno de García reemplazó al ministro de Economía e implementó un shock económico enfocado en la

inversión en infraestructura, pero no en políticas sociales ni en cambios estructurales que promovieran la diversificación económica. Por su parte, como precisan Dancourt y Mendoza (2009), el Banco Central adoptó una política monetaria que consistió en la venta de dólares equivalente a aproximadamente el 27% de las reservas en divisas, además de mantener una tasa de interés relativamente baja en moneda local. Esta respuesta de emergencia fue posible gracias al nivel de reservas internacionales acumuladas durante los años previos de crecimiento.

La crisis provocó una baja en los precios de las materias primas, aunque no afectó de manera significativa la producción ni las exportaciones, en gran medida porque China impulsó fuertes inversiones internas para sostener su demanda. El impacto, sin embargo, se manifestó en la disminución de la recaudación tributaria del Estado y en la ralentización de nuevas inversiones en el sector extractivo. Las exportaciones no tradicionales, como la industria textil, sí se vieron afectadas, lo que produjo desempleo. No obstante, a nivel general, aunque la tasa de empleo formal pasó de crecer un 8% a solo un 1%, esta no dejó de aumentar durante el periodo 2008-2009. Por otro lado, los pequeños productores de agroexportación, como café y cacao, también se vieron afectados debido a la menor demanda (FRANCKE Y CRUZADO, 2009). De esta manera, los impactos de la crisis –si bien fueron atenuados por el mantenimiento de las exportaciones de materias primas hacia China– se manifestaron en la reducción de los ingresos públicos y en la caída de la demanda de exportaciones no tradicionales. Esto afectó principalmente a los pequeños productores, quienes tenían menor respaldo para enfrentar la crisis. La disminución de empleos formales llevó a una contracción del consumo interno que perjudicó especialmente a las pequeñas empresas, sobre todo a aquellas informales orientadas al mercado local.

El ciclo de altos precios de las materias primas fue clave para la acumulación de reservas internacionales, lo que permitió mantener la estabilidad de la economía peruana durante la crisis global de 2008. Asimismo, la respuesta del gobierno chino a esta crisis permitió que el volumen de exportaciones peruanas se mantuviera a pesar de la momentánea caída de los precios. Estos factores contribuyeron a que el gobierno de García y las élites económicas conservaran su optimismo respecto al modelo económico. Sin embargo, el ciclo de altos precios terminó en 2013, lo que marcó el fin del extraordinario crecimiento económico que Perú experimentó durante poco más de una década.

La respuesta del gobierno de Ollanta Humala (2011–2016) al fin de la bonanza exportadora estuvo centrada en una mayor liberalización de la economía para mantener el atractivo de las inversiones privadas. En 2014, se implementó una serie de medidas “reactivadoras” orientadas a estimular la inversión, que incluyeron modificaciones tributarias favorables, la flexibilización de regulaciones ambientales mediante normas como la Ley 30230, la simplificación de trámites para el acceso a tierras, y la creación de un régimen laboral juvenil con menores beneficios, conocido como la “Ley Pulpín” (DURAND, 2016). Aunque estas medidas buscaban promover la inversión en el corto plazo, recibieron críticas por debilitar la sostenibilidad ambiental y los derechos laborales. En este contexto, el gobierno también lanzó el Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014) para reducir la dependencia de las exportaciones mineras y fomentar actividades de mayor valor agregado. Sin embargo, este plan enfrentó dos limitaciones claves: en primer lugar, su carácter no vinculante, ya que se limitaba a orientar al sector privado sobre posibles áreas de inversión sin garantizar su implementación; en segundo lugar, el centro de la diversificación seguía anclándose en los sectores primario-exportadores (MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2014).

Los siguientes gobiernos, después de Humala, promovieron en diversas ocasiones medidas similares para retomar el crecimiento económico luego del fin del ciclo de altos precios de las materias primas. Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018) priorizó la atracción de inversión privada a través mantener estable la macroeconomía y una buena valoración de riesgo internacional⁴, aunque su corto gobierno se vio truncado por conflictos políticos, escándalos de corrupción y una creciente fragmentación institucional. Martín Vizcarra (2018–2020), su sucesor, enfrentó un contexto aún más complejo marcado por la desconfianza política: el escándalo ‘Cuellos Blancos’ y el escándalo ‘Lava Jato’ sacudieron el sistema de justicia con jueces acusados de corrupción, así como al sistema político y empresarial involucrado en dichos casos. En ese contexto, la crisis sanitaria global provocada por la pandemia de COVID-19 tuvo un profundo impacto político, social y económico en el Perú.

La pandemia de COVID-19 causó una conmoción profunda debido a sus devastadores impactos económicos y sociales, los cuales fueron exacerbados por la precariedad del sistema de salud, evidenciada por su incapacidad para enfrentar el gran

⁴ ANDINA, **Legado de Kuczynski: encaminar inversión privada y mantener calificación intacta**, 22 mar. 2018.

número de contagios y casos graves. Esta fragilidad, sumada a las condiciones de vida que obligaban a una gran parte de los trabajadores a mantenerse movilizados, llevó al país a registrar las tasas de mortalidad más altas del mundo (ILIZARBE, 2024). Las medidas sanitarias, como el distanciamiento social obligatorio, tuvieron un éxito parcial. En cuanto a los programas de protección social –bonos y canastas alimentarias–, estos llegaron principalmente a los sectores más empobrecidos de la sociedad, en su mayoría ya beneficiarios de otros programas sociales. Sin embargo, no lograron atender de manera efectiva a las amplias masas de trabajadores precarios cuyos ingresos dependían del trabajo diario, lo que les impedía sostener la inmovilización social durante varias semanas.

En ese sentido, Filgueira et al. (2020) indican que Perú fue uno de los países de la región con menor capacidad de respuesta en materia de protección social durante la pandemia. De manera complementaria, Alcázar, Rojas y López (2022) señalan que las acciones y estrategias empleadas por el gobierno de Vizcarra durante la crisis sanitaria se desarrollaron a partir de la negociación y coordinación entre diversas instituciones públicas, pero sin un liderazgo claro. Si bien el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de los diversos programas sociales, era el principal actor, otras instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como las diversas municipalidades, también desempeñaban un papel clave al asumir responsabilidades financieras, laborales o de gestión territorial. Esto derivó en respuestas de protección social con limitaciones importantes, ya que no existía un sistema diseñado o adaptado para enfrentar situaciones de emergencia.

El trabajo remoto promovido por el gobierno no fue una opción viable para la mayoría de los trabajadores de las pequeñas empresas, debido a que sus condiciones productivas no permitían la implementación de este tipo de medidas. Como consecuencia, el impacto social de la pandemia se tradujo en un aumento de la pobreza, acompañado de una mayor incertidumbre laboral y preocupación por la evolución de la crisis sanitaria (GAMERO, 2020; INEI, 2021).

En los primeros meses del Estado de Emergencia se registró un fenómeno migratorio sin precedentes: miles de personas abandonaron las grandes ciudades y se dirigieron a ciudades y pueblos más pequeños, buscando apoyo familiar o comunitario. Este éxodo, que incluyó a trabajadores precarizados, estudiantes y trabajadores temporales, se realizó principalmente a pie debido al cierre del sistema de transporte. Se

calcula que alrededor de 250,000 personas, denominadas “caminantes” por los medios de comunicación, emprendieron este viaje hacia sus lugares de origen. Este fenómeno evidenció no solo la gravedad de la crisis económica y social, sino también la extrema vulnerabilidad de amplios sectores de la población frente a la falta de apoyo y alternativas en tiempos de emergencia (FORT, ESPINOZA, ESPINOZA, 2021).

La llegada de la pandemia acentuó las vulnerabilidades estructurales de la economía peruana. Si bien durante los años del auge económico el país logró reducir de manera significativa los niveles de pobreza monetaria, la dependencia de los sectores primario-exportadores, la elevada informalidad laboral y las debilidades de los sistemas de salud y protección social evidenciaron con crudeza las desigualdades y limitaciones estructurales del modelo económico.

3.3 La sociedad y los conflictos sociales

Como se ha señalado, las políticas neoliberales han profundizado una economía primario-exportadora y de servicios, poco intensiva en el uso de mano de obra, lo que mantiene a amplios sectores de la población ajenas al desarrollo económico. De este modo, el descontento social, las demandas desatendidas y los desarrollos desiguales en un mismo territorio han creado condiciones propicias para cuestionar las premisas del modelo neoliberal. Duménil y Lévy (2014) señalan que las dos décadas de ajustes neoliberales en Latinoamérica provocaron intensas luchas populares contra estos regímenes. En esas condiciones, Latinoamérica se convirtió en la primera región del mundo donde las luchas contra las políticas neoliberales escalaron hasta derribar gobiernos de estas características, dando paso a un nuevo ciclo político marcado por la emergencia de gobiernos populares en buena parte de los países de la región. No obstante, en países como Perú, Chile y Colombia, donde no surgieron gobiernos populares, las protestas y movilizaciones sociales se volvieron constantes y crecientes (RUIZ Y CAVIEDES, 2022).

De este modo, las tensiones políticas y las protestas populares en el Perú se inscribieron en el marco más amplio de las críticas y resistencias al neoliberalismo en América Latina. En la primera parte de este capítulo, dimos cuenta de una serie de demandas sociales que convergieron en la coyuntura crítica de los últimos años del régimen fujimorista en la década de 1990. Estas demandas eran múltiples, pero tenían como eje central la caída del régimen, lo que permitiría generar condiciones para canalizar

el conjunto de reclamos anexos: lucha contra la corrupción, una nueva constitución, recuperación de los derechos laborales, descentralización, mejores salarios, entre otros, todos sintetizables en la demanda de un modelo de desarrollo más justo socialmente y más democrático.

No obstante, iniciado el gobierno de Alejandro Toledo (2001–2006), las grandes expectativas que este generó se diluyeron rápidamente. El gobierno de Toledo tenía como mandato implementar las demandas de cambio surgidas en el contexto de las luchas contra la dictadura, entre ellas cambios en la política económica, reforma de las instituciones del Estado, descentralización, y lucha contra la corrupción. Todas estas demandas tenían como telón de fondo el cuestionamiento al andamiaje neoliberal sintetizado en la Constitución de 1993. Sin embargo, esta impronta transformadora tuvo una duración breve, ya que las particularidades y convicciones del liderazgo de Alejandro Toledo desgastaron rápidamente su credibilidad y su capacidad para canalizar la agenda de cambios (TANAKA, 2005). Toledo conformó un gabinete de gobierno de amplia base, al incluir a personajes provenientes de diferentes tradiciones políticas e ideológicas, cuyas convicciones respecto a los cambios por implementar eran dudosas.

La ‘luna de miel’ –período de relativa paz que suele caracterizar los primeros meses de un nuevo gobierno– fue bastante corta. A los pocos meses de iniciado el gobierno, se retomaron las movilizaciones y protestas tras el anuncio de la privatización de las estatales Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA) y Empresa de Generación Eléctrica del Sur de Tacna (EGASUR), dos de las principales empresas eléctricas del sur de Perú. Este intento privatizador despertó de inmediato el rechazo masivo de la población, que lo interpretó como una traición directa. Esto se debió a que, durante la campaña electoral de 2001 y luego de haber sido electo presidente, Toledo se había comprometido –e incluso firmado en Arequipa un compromiso explícito– a no vender estas empresas públicas (CHÁVEZ, 2019).

Las protestas tuvieron como epicentro Arequipa, pero se extendieron rápidamente a otras regiones del Perú. Organizaciones sociales de Loreto, Tacna, Cusco, Puno, Piura, entre otras, se solidarizaron con las movilizaciones y participaron en ellas desde sus respectivas regiones. Así, entre febrero y junio de 2002, se desplegó una serie de protestas, movilizaciones y acciones cívicas, en suma, diversas formas de acción colectiva, para expresar el rechazo a las medidas del gobierno. Sin embargo, estas demandas no fueron atendidas; así, en junio de ese año ocurrió el llamado “arequipazo”, que marcó el punto

más álgido del conflicto tras el anuncio de las empresas extranjeras ganadoras de la licitación para adquirir las dos compañías en cuestión. Las protestas se intensificaron, lo que llevó al gobierno de Toledo a responder militarizando el conflicto mediante la declaratoria del Estado de Emergencia en Arequipa. A pesar de la represión, las movilizaciones no cesaron y se extendieron a otras ciudades del país. Ante la posibilidad de una generalización del conflicto, el gobierno de Toledo finalmente retrocedió en su intento de privatizar EGASA y EGESUR, ofreciendo una disculpa pública por su insistencia (CHÁVEZ, 2019).

El conflicto generado por el intento de privatizar EGASA y EGESUR marcó un punto de quiebre significativo para el gobierno de Toledo. Políticamente, el gobierno quedó debilitado: para los sectores conservadores, esto evidenciaba una falta de determinación para implementar las reformas necesarias para el crecimiento económico⁵; mientras que, para los sectores sociales movilizados, se confirmó que el gobierno de Toledo había abandonado la agenda de cambios con la que inicialmente se había comprometido, lo que provocó que las protestas continuaran en los años siguientes (CONTRERAS Y CUETO, 2013). El descrédito del gobierno de Toledo persistió durante el resto de su mandato. El Acuerdo Nacional, una iniciativa propuesta al inicio de su gestión y que comenzaba a tomar forma en 2002, paralelamente a las protestas contra la privatización, también fue cuestionado. Los críticos del gobierno, como hace notar Hernández (2004), señalaron que este acuerdo era un mecanismo para ganar tiempo o desviar la atención política. Sin embargo, la iniciativa siguió adelante con el respaldo de los actores participantes en las negociaciones, bajo la intención de que los acuerdos consolidados y firmados sirvieran como guía para el gobierno de Toledo.

Crecimiento sostenido de los conflictos y protestas sociales

Como señalan Contreras y Cueto (2013), luego del 'Arequipazo', las protestas sociales no cesaron. En esta línea, Ilizarbe (2022) destaca que, con el retorno de la democracia, los conflictos sociales han crecido de manera sostenida, acompañando las diferentes coyunturas políticas y sus diversos episodios. Los gobiernos elegidos desde la transición democrática no han logrado reducir estos conflictos; por el contrario, la

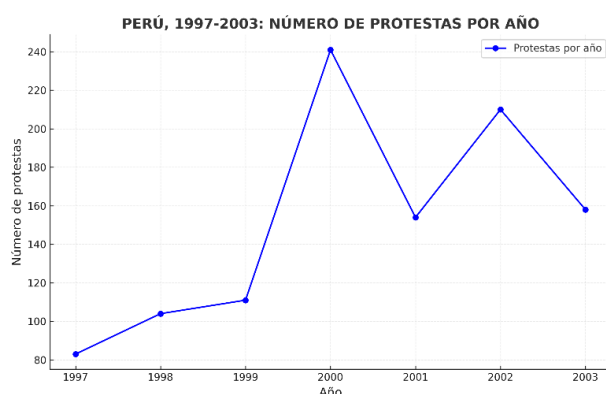
⁵ INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (IPE). **Comentario diario: 20/6/2002 - Postergación de EGASA y EGESUR**, 20 jun. 2002.

desconexión entre las expectativas generadas durante las campañas electorales y el ejercicio posterior del gobierno ha contribuido a su persistencia.

A ello se suma el desigual desarrollo económico entre las diferentes regiones, lo que ha territorializado los conflictos. En este sentido, Contreras y Cueto (2013) indican que la oposición al neoliberalismo se intensificó en las regiones fuera de la capital, donde la apertura comercial impactó negativamente en la producción y el comercio locales. En estas zonas, el empleo público era la principal, si no la única, fuente de trabajo formal con beneficios sociales. Por el contrario, Lima y las ciudades costeras, especialmente en el norte, experimentaron un crecimiento económico más dinámico. La modernización de estas ciudades y el éxito de empresas vinculadas a la exportación consolidaron en estas regiones los principales respaldos sociales al modelo neoliberal.

Ilizarbe (2022), en su análisis de los datos referentes a conflictos y protestas sociales en el Perú, identifica dos fuentes que permiten evidenciar el carácter creciente de las acciones colectivas. El gráfico 1, elaborado a partir de los reportes del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco) –una organización no gubernamental que, desde hace varias décadas, produce informes periódicos sobre las coyunturas sociopolíticas del Perú basándose en los tres diarios más importantes de Lima–, muestra las crecientes movilizaciones contra el fujimorismo durante los últimos años del régimen. Entre los años 2000 y 2001, se observa una disminución en las protestas, coincidiendo con la caída del gobierno de Fujimori en noviembre de 2000 y el periodo de transición que abarcó de noviembre de 2000 a julio de 2001. Sin embargo, en 2002, las protestas registraron un rebrote, asociado a las movilizaciones contra las privatizaciones que tuvieron lugar durante el primer semestre de 2002. Posteriormente, se observa un periodo de breve desmovilización, un fenómeno recurrente que tiende a ocurrir tras cada pico de movilizaciones.

Gráfico 1



Fuente: ILIZARBE, C. La democracia y la calle: protestas y contrahegemonía en el Perú. Lima: IEP, 2022.

A partir de 2004, la Defensoría del Pueblo comenzó a emitir informes periódicos sobre los conflictos sociales en el Perú, lo que ha facilitado la recopilación de información y el seguimiento de estos a lo largo del tiempo. En el gráfico 2, elaborado con base en los reportes de la Defensoría del Pueblo, se puede observar la fluctuación de los conflictos sociales entre 2004 y 2021, evidenciando un crecimiento sostenido, con picos en coyunturas específicas.

El gráfico 2 también destaca que, entre los diversos conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales son los más predominantes. Estos están vinculados a proyectos extractivos, recursos naturales y el control de estos en relación con las comunidades afectadas (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2018). Dentro de este tipo de conflictos se incluyen aquellos relacionados con las industrias extractivas, como la defensa de recursos naturales –principalmente el agua–, la lucha contra la contaminación, o las demandas por mejores mecanismos de redistribución de los beneficios derivados de las actividades extractivas en los territorios donde estas se desarrollan. Es decir, estos conflictos tienen como componente central el modelo de desarrollo y la economía extractivista vigente. En este sentido, buena parte de ellos se originan y se desarrollan en los territorios afectados y, solo en contadas ocasiones, logran alcanzar una repercusión y articulación a nivel nacional (ILIZARBE, 2022).

Gráfico 2



Fuente: TALAVERA-SALAS, I. X. et al. Inversión minera y conflictos socioambientales en el Perú, 2004 – 2023. Waynarroque - Revista de ciencias sociales aplicadas, v. 4, n. 1, p. 55-63, 13 set. 2024.

Tipos de conflictos en el contexto neoliberal

El carácter conflictivo del contexto sociopolítico peruano ha puesto en evidencia la existencia de diversos tipos de conflictos que, desde la perspectiva propuesta por Beverly Silver (2003), pueden ser mejor comprendidos. Esta autora señala que existen dos tipos de conflictos que caracterizan la historia del capitalismo:

- Los conflictos polanyianos, que representan formas de resistencia popular frente al avance del mercado y la creciente mercantilización de la vida. Se trata de una resistencia defensiva ante una amenaza latente o presente, que alimenta un sentimiento de 'injusticia' debido a la modificación de condiciones que afectan la vida social.
- Los conflictos marxianos, que reflejan las luchas de los trabajadores en contextos marcados por nuevas formas capitalistas de acumulación. Estos conflictos surgen en paralelo a procesos de descomposición organizativa de segmentos tradicionales de la clase trabajadora.

Silver (2003) indica que, según Polanyi (1989), la ampliación y profundización de los mercados desregulados provoca una reacción social destinada a proteger determinadas relaciones sociales establecidas. Así, se regula o restringe el avance de la mercantilización a través de legislación, protestas y una variedad de estrategias colectivas de resistencia. En este sentido, la idea del péndulo de Polanyi sugiere que, mientras existe una inclinación hacia la mercantilización, esto genera fuertes tendencias hacia la protección, como ocurrió entre finales del siglo XIX e inicios del XX.

En esta reacción polanyiana, sin embargo, queda ausente la consideración del 'poder', según indica Silver (2003). Por su parte, Marx aborda esta problemática del 'poder' al partir de la idea de que el capitalismo está permanentemente modificando la producción y las relaciones sociales, lo que lleva a que las viejas formas de poder de negociación de los trabajadores se vayan agotando y den lugar a nuevas formas de poder de los trabajadores. Bajo la premisa de que “a dónde va el capital, va la lucha de clases”, Silver indica, como ejemplo, que las transformaciones neoliberales y la deslocalización de la producción industrial de los países del centro capitalista a otras regiones del mundo, donde las condiciones de trabajo eran más favorables al capital, impulsaron procesos de organización de los trabajadores y la formación de un poder de negociación por parte de estos.

A partir de estas consideraciones, es posible identificar dos ejemplos de este tipo de conflictos en el contexto peruano, los cuales, hasta 2024, siguen siendo parte de la coyuntura sociopolítica vigente:

Desde 2009, el conflicto por el proyecto minero Tía María, ubicado en el Valle de Tambo en Arequipa, ha generado una intensa resistencia por parte de las comunidades locales debido a los riesgos percibidos para su medio de vida y su entorno. Estas poblaciones, cuya economía depende principalmente de la agricultura, temen la posible contaminación de sus fuentes de agua y la degradación ambiental, lo que afectaría directamente sus cultivos y la calidad de vida en la región. Además, los residentes han expresado desconfianza hacia las autoridades y la empresa minera Southern Copper, denunciando la falta de consulta previa y transparencia en los procesos de evaluación ambiental (MARTINEZ, 2017). Este contexto ha dado lugar a movilizaciones constantes en defensa de sus derechos territoriales y la sostenibilidad del valle, priorizando la protección de su entorno frente a los beneficios económicos prometidos. Este conflicto se enmarca en los denominados conflictos polanyianos, pues representa una resistencia defensiva contra el avance de la mercantilización que amenaza las relaciones sociales y los modos de vida establecidos en el valle.

La lucha de los trabajadores de la agroindustria peruana en 2020 surge como respuesta a las condiciones de precariedad laboral que se han sostenido durante décadas, a pesar del notable crecimiento económico del sector. Las empresas agroindustriales, favorecidas por regímenes legales y tributarios especiales, han obtenido ganancias millonarias desde la promulgación de la Ley de Promoción Agraria en el 2000, la cual

estableció estándares diferenciados en materia de derechos laborales y una menor carga tributaria (FERNÁNDEZ-MALDONADO, 2022; CEPES, 2020). Sin embargo, este crecimiento ha contrastado con salarios bajos que no cubren las necesidades básicas, jornadas laborales extensas sin pago de horas extras, y la desnaturalización de beneficios como la compensación por tiempo de servicios (CTS), incorporada al jornal diario (CEPES, 2020). Además, la temporalidad de los contratos y las dificultades para sindicalizarse han perpetuado la vulnerabilidad de los trabajadores agrarios (FERNÁNDEZ-MALDONADO, 2022). Frente a ello, las demandas principales de los trabajadores se centran en el incremento de salarios, mejores condiciones laborales, y una redistribución más equitativa de las ganancias, exigiendo al Estado que asuma un rol más activo en la regulación y fiscalización del sector (CEPES, 2020). Este caso puede ser entendido como un conflicto marxiano, ya que refleja las luchas de los trabajadores en un contexto de ‘nuevas’ formas de acumulación capitalista –la agroindustria moderna promovida desde 1993 con el neoliberalismo–, donde se brega por una redistribución más equitativa de las ganancias y condiciones laborales más favorables.

Los gobiernos democráticos ante las protestas

La respuesta de los diferentes gobiernos ante los conflictos sociales crecientes en el Perú se ha caracterizado por la represión y el uso de la violencia como mecanismo de control. Esto evidencia una incapacidad para canalizar las demandas y, como señala Diez (2022), refleja una ausencia de estrategias claras por parte del Estado para enfrentar esta problemática. Según Diez (2022), el Estado usualmente adopta una de tres posturas: no intervenir, recurrir a la fuerza o establecer un espacio de diálogo, siendo esta última opción la menos utilizada. Además, cuando se busca una solución a través del diálogo, este se ve entorpecido por la desorganización de las entidades estatales y los discursos polarizantes que agravan el distanciamiento entre las partes en conflicto. Estas dinámicas reflejan la incapacidad del Estado para abordar los conflictos sociales de manera integral, generando un clima de desconfianza mutua y un escalamiento de la violencia. Asimismo, el personal policial carece de formación adecuada para manejar situaciones de alta conflictividad social, lo que contribuye a una respuesta represiva y no preventiva (DIEZ, 2022).

Por otro lado, Neyra (2018) resalta que la violencia institucional se ha convertido en una herramienta recurrente del Estado para enfrentar los conflictos sociales, especialmente en la imposición de proyectos extractivos, ignorando las demandas de las

comunidades afectadas. Esta violencia se manifiesta en la criminalización de la protesta, la declaratoria de estados de emergencia y la colaboración entre empresas y fuerzas policiales, que incluye convenios en los que estas compañías financian a la policía. Esta alianza ha derivado en violaciones graves, tales como torturas, desplazamientos forzados y la criminalización de líderes sociales, generando un clima de miedo y vulnerabilidad en las poblaciones locales. Además, las instituciones del Estado sistemáticamente desestiman mecanismos democráticos como las consultas locales, ignorando las implicaciones sociales, económicas y ambientales asociadas a los proyectos extractivos. En este contexto, el Estado no solo ha fallado en su rol de mediador, sino que se ha consolidado como un actor central en la perpetuación de la violencia y la desigualdad (NEYRA, 2018).

Así, la violencia y la confrontación han acompañado de manera constante la relación entre las protestas y los diferentes gobiernos frente a las demandas sociales, económicas y culturales, tanto históricas como coyunturales. De ahí que los gobiernos sean responsables de decenas de asesinatos derivados de la represión policial contra manifestantes a lo largo del tiempo, como indica Ilizarbe (2022).

Finalmente, desde el fin de la transición democrática en 2001, el Perú ha estado marcado por dos fenómenos importantes para entender el contexto político entre 2020 y 2022. Por una parte, las tensiones sociales irresueltas generadas por la implementación del modelo neoliberal –combinadas con tensiones estructurales preexistentes– han crecido sostenidamente a lo largo de las últimas dos décadas, contribuyendo a un escenario sociopolítico caracterizado por complejos equilibrios y reiteradas polarizaciones electorales (MELÉNDEZ Y LEÓN, 2009; ILIZARBE, 2022; MENDOZA, 2023). Por otra parte, la captura del Estado por parte de grupos de poder económico y la persistencia del modelo neoliberal en los diferentes gobiernos han contribuido a una erosión constante de la hegemonía del régimen, el cual ha desoído las insistentes demandas de reformas que superen la actual institucionalidad: moderna y eficaz para las inversiones, pero deficiente y represora frente a los intereses sociales (DURAND, 2017). Así, los motores económicos del régimen, como la minería y la agroexportación, se desarrollan en medio de intensos conflictos sociales, mientras que la gran masa de trabajadores conforman el ‘precariado’ y la confianza ciudadana en las instituciones políticas ha disminuido con el tiempo (DURAND, 2017).

4- La rearticulación del fujimorismo

El fujimorismo ha sido una de las fuerzas políticas más influyentes y controvertidas en la historia reciente del Perú, manteniendo su relevancia desde la década de 1990. A lo largo del tiempo, esta corriente política ha demostrado una notable capacidad de reorganización y adaptación a distintos escenarios, lo que le ha permitido conservar una presencia significativa en la política nacional. El análisis de Navarro (2011), Llopis (2017) y León (2023) permite delinear algunos de los rasgos distintivos del fujimorismo, comprender sus estrategias para rearticularse tras momentos de crisis y las claves de su permanencia en el escenario político peruano.

El fujimorismo surge con la llegada de Alberto Fujimori a la presidencia en 1990, consolidándose como un movimiento político en torno a su liderazgo. Según Llopis (2017), la narrativa política del fujimorismo se articuló principalmente alrededor de la lucha contra el terrorismo y la estabilización económica, presentando a Fujimori como un líder fuerte frente a las crisis del país. Esta construcción de identidad política, sustentada en la figura de un liderazgo fuerte y una aparente eficacia gubernamental, permitió que el fujimorismo perdurara como fuerza política incluso tras la caída del régimen en el año 2000.

Tras la caída del régimen de Fujimori, el movimiento fujimorista se fragmentó, pero pronto inició un proceso de rearticulación. Según León (2023), desde el inicio, Fujimori planeó regresar al Perú con el objetivo de reconstruir su organización. Los primeros años de su exilio estuvieron marcados por los intentos del gobierno de Alejandro Toledo de solicitar su extradición, pese a que las posibilidades legales y políticas eran limitadas, dado que Japón no tenía voluntad ni interés en devolverlo. En ese contexto, los esfuerzos iniciales de Fujimori se centraron en mantener el vínculo con sus simpatizantes a través de herramientas digitales: creó una página web, estableció una secretaría de comunicación y designó a Carlos Raffo como su vocero en Perú. Además, promovió la rearticulación de los distintos grupos fujimoristas –como los liderados por Absalón Vásquez, Martha Moyano y Luz Salgado–, designando al partido Sí Cumple como la única organización autorizada para convocar a las bases fujimoristas en ese momento (LEÓN, 2023).

Esta estrategia buscaba minimizar el impacto de los escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos, proyectando la imagen de un líder víctima de

persecución política. Según León (2023), desde Japón, Fujimori decidió reconocer que durante su gobierno ocurrieron casos graves de corrupción, aunque negó cualquier implicación personal, argumentando que, al sospechar de Vladimiro Montesinos, lo apartó con cautela para evitar que los grupos leales al exasesor intentaran un levantamiento o incluso un golpe de Estado. Por su parte, Navarro (2011) señala que la narrativa de la persecución fue fundamental para cohesionar al movimiento fujimorista, ya que fortalecía la lealtad de las bases, quienes asumían la defensa del legado de Fujimori como una causa común que justificaba su continuidad política.

En las elecciones de 2006, el fujimorismo se presentó con un discurso que reivindicaba los logros del gobierno de Alberto Fujimori, combinado con una narrativa de persecución política (LEÓN, 2023). Según León (2023), se generó un escenario de confusión dentro del movimiento al intentar, hasta el último momento, inscribir a Fujimori como candidato, a pesar de que esto ya no era legalmente viable. Esta demora debilitó la candidatura de Martha Chávez, quien no logró consolidar su posición, lo que permitió que Keiko Fujimori emergiera como la principal figura mediática de la campaña de Alianza por el Futuro, participando activamente en actividades proselitistas incluso fuera de Lima, donde postulaba al Congreso. Chávez, como candidata presidencial, reiteraba que, de ser electa, Alberto Fujimori tendría un rol relevante en su gobierno y que convocaría a nuevas elecciones para facilitar su eventual retorno al poder. De esta manera, la campaña se centró en exaltar los éxitos del gobierno fujimorista y en prometer el regreso del expresidente al Perú.

Navarro (2011) destaca que, a pesar de las dificultades para participar conjuntamente tras la denegación de la candidatura de Alberto Fujimori, los resultados de las elecciones de 2006 –obteniendo el cuarto lugar– fueron interpretados como una reivindicación del fujimorismo. Este resultado impulsó a Keiko Fujimori como una candidata natural para las elecciones generales de 2011 y evidenció la necesidad de construir un partido unitario con ella como figura central. Esta estrategia resultaba ventajosa en diversos escenarios: ganar la presidencia, coger el gobierno o asegurar una amplia representación parlamentaria. Así surgió la voluntad de crear Fuerza 2011, cuya inscripción legal se inició desde cero mediante una recolección de firmas liderada por Keiko y Kenji Fujimori. De esta campaña, Keiko emergió como la heredera política del fujimorismo, reivindicando los logros del gobierno de su padre y minimizando las acusaciones en su contra (LEÓN, 2023).

Con la creación de Fuerza 2011, luego renombrada Fuerza Popular, el fujimorismo inició un proceso de institucionalización bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, consolidando la estrategia de capitalizar la “herencia carismática” del liderazgo de su padre (NAVARRO, 2011). Este nuevo partido logró superar la dispersión interna, unificando a los distintos grupos fujimoristas en una sola organización. Además, articuló nuevos cuadros políticos y liderazgos locales, proyectando así una imagen de renovación sin perder los símbolos del fujimorismo original. El partido adoptó un enfoque pragmático, promoviendo candidaturas locales y estableciendo alianzas con figuras regionales para ampliar su base de apoyo (NAVARRO, 2011). Esta estrategia no solo fortaleció la presencia territorial del fujimorismo, sino que también permitió integrar nuevos cuadros políticos sin desplazar a los fujimoristas históricos.

En las elecciones del 2011, Keiko Fujimori alcanzó la segunda vuelta, aunque no logró ganar la presidencia. El proceso electoral estuvo marcado por una fuerte polarización y por la movilización de la campaña de memoria denominada “No a Keiko”, contra los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos durante la década de 1990. Sin embargo, esta contienda electoral terminó por fortalecer la imagen del fujimorismo como una fuerza política relevante en el escenario peruano (NAVARRO, 2011). De esta manera, la combinación de la narrativa de persecución con la reivindicación de los logros del gobierno de Alberto Fujimori permitió mantener la cohesión interna del movimiento y consolidar su presencia en la política nacional.

Para las elecciones de 2016, el fujimorismo ajustó su estrategia. Según Llopis (2017), Keiko Fujimori intentó moderar su discurso con el objetivo de ampliar su base de apoyo, distanciándose de los aspectos más oscuros del gobierno de su padre y buscando atraer a votantes fuera de su núcleo duro. En este proceso, destacó su rol en la fundación de Fuerza Popular y trató de proyectar una imagen de liderazgo autónomo, desvinculada de Alberto Fujimori. Un claro ejemplo de este giro fue el reconocimiento por parte de Keiko de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de su padre, así como su aceptación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación⁶, después de años de ambigüedades sobre su postura. No obstante, esta estrategia no bastó para obtener la presidencia, pues tuvo que enfrentarse nuevamente a movilizaciones masivas en su contra, como la campaña “Keiko no va”, que defendía los

⁶ RPP NOTICIAS. Keiko Fujimori: “Hubo delitos contra los derechos humanos en la época de mi padre”, 16 feb. 2016.

derechos humanos y denunciaba los crímenes del gobierno fujimorista. A pesar de la derrota presidencial, Fuerza Popular logró una victoria significativa al obtener 73 de las 130 bancas en el Congreso, consolidándose como la principal fuerza parlamentaria.

Llopis (2017) hace notar que, entre las elecciones del 2001 y 2016, la votación del fujimorismo no dejó de crecer. Sin embargo, a partir de 2018, con las elecciones regionales y municipales, y luego en las congresales de 2020, comenzaron a visibilizarse signos de desgaste electoral. Esto se debió, en parte, a que la mayoría obtenida por el fujimorismo en el Congreso tras las elecciones de 2016 adoptó una postura de confrontación con los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y, posteriormente, de Martín Vizcarra. Esta política de polarización, promovida por el fujimorismo, derivó en el cierre del Congreso en 2019 y la convocatoria a elecciones congresales complementarias. En las elecciones de enero de 2020, se consolidó dicho desgaste, con el fujimorismo reduciendo su representación a solo 15 parlamentarios, un retroceso cuyos primeros indicios ya se habían manifestado en los comicios regionales y municipales previos.

El fujimorismo se ha caracterizado por su pragmatismo político, adaptándose a distintos escenarios y forjando alianzas para mantener su relevancia en el espectro político peruano (NAVARRO, 2011; LEÓN, 2023). Esta flexibilidad se complementa con una estrategia electoral adaptable, que ajusta su discurso según las circunstancias y necesidades del momento (LEÓN, 2023; LLOPIS, 2017). A esto se suma la presencia de un liderazgo carismático encarnado en Keiko Fujimori, quien se proyecta como la heredera legítima del legado político de su padre, consolidando así una base de apoyo sólida (NAVARRO, 2011). Además, el fujimorismo ha construido una narrativa de persecución, presentándose como víctima de ataques políticos, lo que refuerza la cohesión interna del movimiento (NAVARRO, 2011; LEÓN, 2023). Sin embargo, esta narrativa no ha logrado resolver las dificultades para la institucionalización del partido, marcado por la falta de liderazgos intermedios con autonomía y una dependencia constante de las figuras de Alberto y Keiko Fujimori para articular su estructura y estrategia política (NAVARRO, 2011; LLOPIS, 2017).

Capítulo III

Crisis política, estallidos sociales y radicalización de las derechas 2020 – 2022

1- Introducción

Las elecciones presidenciales de 2016 en el Perú marcaron un punto de inflexión en el panorama político del país. Desde la transición democrática, los comicios habían estado dominados por una polarización entre el continuismo y la propuesta de reformas. Sin embargo, esta vez, las dos candidaturas que avanzaron a la segunda vuelta representaban fuerzas políticas de derecha, relegando al tercer lugar al Frente Amplio, que abogaba por cambios en el modelo socioeconómico. La segunda vuelta entre Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, y Peruanos por el Cambio, con Pedro Pablo Kuczynski como candidato, evidenció las principales corrientes de la derecha peruana: por un lado, el fujimorismo conservador y, por otro, una derecha liberal y tecnocrática vinculada a los gobiernos posteriores a la caída del régimen de Alberto Fujimori (MELÉNDEZ, 2019).

Si bien estas dos vertientes de la derecha no presentaban diferencias sustanciales respecto a los ejes centrales del modelo económico y coincidían en su defensa frente a las fuerzas que lo cuestionaban o proponían cambios, existían algunas distinciones entre ellas. Según Meléndez (2019), mientras la derecha tecnocrática adoptaba posturas liberales en temas como la defensa de los derechos humanos y los derechos de la diversidad sexual, el fujimorismo, por el contrario, se ha caracterizado por su respaldo constante a policías y militares implicados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de las décadas de 1980 y 1990. Además, ha mostrado una creciente oposición a derechos vinculados a la igualdad de género y a la diversidad sexual.

La victoria presidencial de Pedro Pablo Kuczynski estuvo fuertemente influenciada por el movimiento antifujimorista, que impulsó el voto a su favor con el objetivo de bloquear una posible victoria de Keiko Fujimori. De esta manera, se repitió la dinámica de la campaña antifujimorista de 2011, la cual había facilitado el triunfo de Ollanta Humala. En ambas elecciones, el antifujimorismo se caracterizó por la participación activa de organizaciones sociales, colectivos de defensa de los derechos humanos, sectores progresistas y fuerzas de izquierda que, si bien no conformaban un bloque electoral unificado, coincidían en su rechazo al retorno del fujimorismo al poder como indican Fernández-Maldonado y Navarro (2016). En este contexto, Kuczynski

logró canalizar dicho rechazo y obtener el respaldo de figuras públicas como Mario Vargas Llosa, quien lo calificó como el “mal menor”. Además, articuló un discurso centrado en la lucha contra la corrupción, un tema que afectaba directamente la imagen del fujimorismo.

No obstante, la victoria de Pedro Pablo Kuczynski fue por un margen sumamente estrecho, lo que lo dejó en una posición de vulnerabilidad frente al fujimorismo, que había obtenido la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias con 73 de los 130 escaños. En contraste, la bancada oficialista se ubicó como la tercera fuerza en el Congreso, con solo 18 parlamentarios, detrás de la representación de izquierda, que contaba con 20. Esta mayoría fujimorista se convirtió en un obstáculo constante para el gobierno de PPK, ya que el Congreso buscó restringir su capacidad de acción y lo presionó en diferentes ocasiones. Entre sus estrategias, el fujimorismo bloqueó reformas clave y utilizó su poder para promover investigaciones contra el Ejecutivo. La situación se agravó con el escándalo de corrupción de Odebrecht, que vinculó a Kuczynski con pagos de esta empresa durante su gestión como ministro. En diciembre de 2017, el fujimorismo promovió una moción de vacancia en su contra por “incapacidad moral permanente”, la cual no prosperó, pero debilitó aún más su gobierno. A esto se sumó la controversia por el indulto a Alberto Fujimori, concedido por PPK en un intento de obtener respaldo político de un sector de la bancada fujimorista vinculado a Kenji Fujimori, lo que generó un fuerte rechazo social y fue interpretado como una negociación políticamente cuestionable.

A inicios de 2018, nuevas revelaciones sobre los vínculos de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht, junto con la difusión de los llamados “Kenjivideos” – grabaciones que mostraban presuntos intentos de compra de votos en el Congreso–, intensificaron la crisis política. Estos videos, que involucraban a altos funcionarios del gobierno, desataron un nuevo escándalo y deterioraron aún más la credibilidad de PPK. Ante la inminente aprobación de una segunda moción de vacancia y el creciente descontento social, Kuczynski presentó su renuncia el 21 de marzo de 2018. En su mensaje a la nación, justificó su decisión argumentando que buscaba evitar una mayor confrontación política y preservar la estabilidad del país⁷.

⁷ BBC NEWS MUNDO, **Crisis política en Perú: Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia**, 21 mar. 2018.

1.1 El gobierno de Vizcarra

Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la presidencia en un contexto de fuerte polarización y con un Congreso dominado por el fujimorismo. En los primeros meses de su gobierno, Vizcarra intentó mantener una relación cordial con el Legislativo, especialmente con la bancada fujimorista, con cuyos representantes sostuvo reuniones antes de asumir el cargo. Sin embargo, estas buenas relaciones se desgastaron rápidamente, dando paso a un clima de confrontación política.

A inicios de mayo de 2018, estalló un escándalo denominado ‘Cuellos Blancos’ en el sistema de justicia tras la difusión de una serie de audios por los medios de comunicación. Estas grabaciones revelaron la existencia de una red de corrupción integrada por jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entidad encargada de nombrar y destituir magistrados. La red operaba a través del tráfico de sentencias, condenas y favores, involucrando a figuras empresariales y políticas de alto nivel⁸. Ante estas revelaciones, sectores de la derecha y el fujimorismo en el Congreso desplegaron una estrategia para proteger a los implicados, entre ellos el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y para bloquear cualquier intento de reforma del sistema judicial. Esta situación colocó a Vizcarra en un escenario complejo, ya que su estrategia inicial de conciliación con el fujimorismo se tornó incompatible con la necesidad de dar una respuesta firme contra la corrupción, en un contexto en el que la ciudadanía comenzaba a movilizarse y protestar.

1.2 Confrontación con el Congreso

Ante este escenario, Vizcarra buscó marcar distancia con su predecesor y centró su gobierno en la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de justicia. Frente al escándalo de los “CNM audios” y la creciente presión ciudadana, propuso una serie de reformas con el objetivo de canalizar la tensión sociopolítica. Sin embargo, la resistencia del fujimorismo y de bancadas aliadas, como la bancada aprista, fue intensa, ya que acusaron a Vizcarra de utilizar los escándalos de manera “populista” para ganar legitimidad social y debilitar al Congreso. Dentro de las reformas planteadas se incluían la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la regulación del financiamiento de los partidos políticos, la prohibición de la reelección inmediata de

⁸ IDEHPUCP, **Observatorio Anticorrupción: Casos Cuellos Blancos**, s.d.

congresistas y la implementación de la bicameralidad⁹. No obstante, el Congreso, dominado por el fujimorismo y otros sectores opositores, bloqueó el debate y dilató su aprobación, lo que intensificó las tensiones. Ante esta situación, el Ejecutivo se vio obligado a presentar una cuestión de confianza para viabilizar un referéndum en el que la ciudadanía decidiera sobre las cuatro reformas propuestas.

El referéndum se llevó a cabo en diciembre de 2018, y las cuatro reformas propuestas fueron aprobadas por una amplia mayoría de la población, con porcentajes que superaron el 80% de los votos¹⁰. La contundencia de los resultados fortaleció la popularidad de Vizcarra, mientras que el Congreso, que había intentado bloquear las reformas, continuó perdiendo legitimidad y se tornó aún más impopular¹¹.

1.3 Cierre del Congreso

La resistencia del Congreso a implementar las reformas pendientes luego del referéndum profundizó la crisis política y agudizó la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo¹². Dominado por el fujimorismo y otras bancadas opositoras, el Congreso intentó diluir o retrasar¹³ la aplicación de estas reformas mediante modificaciones que desvirtuaban su propósito original. Un ejemplo de ello fue la reforma en la ley de financiamiento de partidos donde se introdujeron vacíos legales que favorecían la opacidad en el manejo de recursos. Estas maniobras generaron un fuerte rechazo ciudadano y llevaron a Vizcarra a denunciar públicamente las acciones del Congreso, intensificando aún más el conflicto político.

La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo alcanzó su punto crítico en septiembre de 2019, cuando el Congreso intentó elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ignorando las propuestas del Ejecutivo y buscando garantizar el control de esta institución en su favor (DARGENT Y ROUSSEAU, 2021). En respuesta, el Ejecutivo presentó un pedido de cuestión de confianza, que fue desestimado por el Congreso. Ante esta negativa, Vizcarra interpretó que la confianza había sido rechazada,

⁹ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS), **Ejecutivo presentó al Congreso proyectos para la reforma política y judicial**, 18 agos. 2018.

¹⁰ BBC NEWS MUNDO, **Referéndum Perú: aprobadas 3 de las 4 reformas constitucionales que pretenden acabar con la corrupción en el país**, 10 dic. 2018.

¹¹ INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS (IEP), **Informe de Opinión Pública: Diciembre 2018**, dic. 2018.

¹² THE WASHINGTON POST, **Perú tiene dos presidentes y una crisis política que era inevitable**, 1 oct. 2019.

¹³ EL COMERCIO, **Demora del Congreso en aprobar proyectos del Ejecutivo**, 25 may. 2019.

lo que constitucionalmente lo habilitaba para disolver el Parlamento y convocar elecciones complementarias¹⁴. En reacción a esta medida, el Congreso de mayoría fujimorista, junto con sus bancadas aliadas, intentó destituir a Vizcarra, aprobando una moción de vacancia y juramentando a la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidenta en su lugar¹⁵. No obstante, además de contar con el respaldo constitucional para el cierre del Congreso, Vizcarra recibió el apoyo activo de organizaciones sociales y sectores populares que se habían movilizado contra la mayoría parlamentaria y en favor de medidas anticorrupción.

1.4 Elecciones parlamentarias extraordinarias

Las elecciones parlamentarias extraordinarias se llevaron a cabo en enero de 2020. Más de veinte partidos y alianzas compitieron por los 130 escaños, lo que dio lugar a un Congreso altamente fragmentado¹⁶, sin una mayoría clara para ninguna agrupación política. El fujimorismo, que en la elección anterior había obtenido una mayoría absoluta, sufrió una derrota significativa, reduciendo su representación de 73 a solo 15 escaños. Así, las tensiones que llevaron al cierre del Congreso y a la convocatoria de elecciones complementarias dejaron al fujimorismo considerablemente debilitado. La dispersión y fragmentación del nuevo parlamento reflejaron el descontento ciudadano con el sistema político y una búsqueda de alternativas a los partidos tradicionales. Esto se evidenció en el sorpresivo desempeño de listas como la del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPA) y Unión por el Perú (UPP), que, tras un historial de resultados marginales, lograron votaciones inéditas.

Inicialmente, la relación entre el gobierno de Vizcarra y el nuevo Congreso fue menos confrontacional que con el parlamento disuelto. Sin embargo, las tensiones y conflictos no desaparecieron, sino que fueron en aumento a medida que avanzaba la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Aunque el debilitamiento del fujimorismo y la presencia de nuevos actores generaron expectativas de mayor diálogo, la falta de cohesión en el Congreso y los intereses partidarios impidieron la construcción de una agenda común.

¹⁴ BBC NEWS MUNDO, **Crisis política en Perú: Martín Vizcarra disuelve el Congreso y este lo declara “incapaz moralmente”**, 30 set. 2019.

¹⁵ EL COMERCIO, **Mercedes Aráoz jura como presidenta en funciones ante Pedro Olaechea**, 1 oct. 2019

¹⁶ OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE), **Resultados históricos: Elecciones Congresales Extraordinarias 2020**, 15 oct. 2020.

En septiembre de 2020, el Congreso intentó destituir a Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, basándose en presuntos contratos irregulares con un artista cercano al presidente. Sin embargo, la moción no alcanzó los votos necesarios. Este intento de vacancia fue impopular y generó un fuerte rechazo ciudadano¹⁷. No obstante, la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo persistió y, en noviembre de 2020, el Congreso logró destituir a Vizcarra bajo la misma figura, esta vez acusándolo de haber recibido sobornos de una empresa constructora cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua. La destitución, considerada por muchos como un golpe parlamentario¹⁸, desató una profunda crisis política y provocó protestas en todo el país¹⁹.

Como se ha analizado, el fujimorismo experimentó un desgaste político considerable entre 2016 y 2020. Sobre este contexto, y como parte de un intento de recomposición de sus fuerzas, el fujimorismo comenzó a radicalizar sus posiciones políticas. Durante el período 2020-2022, esta radicalización se consolidó en paralelo con la de otras fuerzas políticas, configurando un proceso más amplio de radicalización de las derechas en el país. Estudios como los de Gil Piedra (2022) y Duarez (2024) evidencian cómo diversas organizaciones de derecha adoptaron discursos, posturas y estrategias alineadas con tendencias de radicalización observadas en otros países de la región. Entre estas se encuentran la promoción de una agenda contra la denominada “ideología de género”, la defensa de la familia tradicional y el combate al socialismo.

2- La situación política entre 2020 y 2022

Entre el estallido social de noviembre de 2020 y la caída del gobierno de Pedro Castillo en diciembre de 2022, se observa un proceso de movilización y agitación de las derechas en Perú (CORONEL, 2024; MENDOZA, 2023; UBILLUZ, 2021; MELÉNDEZ, 2023; DUAREZ, 2024; LYNCH, 2020; GOLDSTEIN, 2022; MORÁN, 2023). Diversos estudios señalan que este fenómeno tiene antecedentes en las movilizaciones conservadoras contra el enfoque de género, así como en otros episodios de polarización que han marcado la creciente conflictividad social en el país (RODRÍGUEZ, 2019; ROUSSEAU, 2022).

¹⁷ INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS (IEP), **Informe de Opinión Pública: Vacancia presidencial en Lima Metropolitana - Octubre 2020**, 2020.

¹⁸ FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (FIDH), **Perú: Vacancia presidencial constituye un duro golpe a la democracia**, 10 nov. 2020.

¹⁹ DEFENSORÍA DEL PUEBLO, **Informe Especial N° 01: Movilizaciones Sociales – Noviembre 2020**, mar. 2022.

En los últimos años, el fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, ha desempeñado un papel central en la rearticulación de las derechas. Desde 2020, ha buscado recuperar su influencia política, debilitada tras el desgaste sufrido durante los gobiernos de PPK y, especialmente, de Martín Vizcarra. Para ello, ha adoptado una narrativa polarizante que presenta a las posturas progresistas y de izquierda como una amenaza para la democracia, la libertad y el orden social. Este discurso ha resultado especialmente efectivo entre los sectores más radicalizados de la derecha, que perciben a la izquierda y los progresismos como un riesgo para el modelo económico y los ‘valores tradicionales’.

2.1 El “golpismo” del Congreso y las protestas de noviembre de 2020

El período analizado comienza con la destitución de Martín Vizcarra en noviembre de 2020, un evento que desencadenó una profunda crisis política. El Congreso, dominado por una mayoría opositora, declaró su “incapacidad moral permanente” bajo el argumento de que había recibido presuntos pagos irregulares durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Si bien este mecanismo está contemplado en la Constitución, su aplicación fue ampliamente criticada por considerarse una maniobra política²⁰.

El sucesor de Vizcarra fue Manuel Merino, entonces presidente del Congreso. El nuevo gobierno, reflejado en la composición de su gabinete, representaba la instalación de un gobierno conservador que asumía el poder en un contexto donde las elecciones generales ya estaban en marcha. La presidencia de Merino, que duró apenas seis días, desencadenó inéditas y masivas protestas que hicieron insostenible su permanencia en el poder. Las acciones del Congreso fueron interpretadas como el intento de un sector, profundamente cuestionado y con investigaciones fiscales en curso, de aprovechar la pandemia —que había paralizado las dinámicas de protesta— para hacerse del poder y obstaculizar los procesos en su contra (IEP, 2020).

Las protestas de noviembre de 2020 dejaron en evidencia para los sectores de derecha que apoyaron a Merino que un gobierno conservador sin respaldo popular era insostenible. La magnitud de las manifestaciones generó temor en estos sectores, ante la posibilidad de que las protestas continuaran escalando y desembocaran en un escenario similar al estallido social ocurrido en Chile en octubre de 2019. En este contexto, grupos

²⁰ INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS (IEP), **Informe Especial: Opinión Pública - Noviembre 2020**, nov. 2020.

conservadores como la Coordinadora Republicana promovieron la narrativa de que existía una conspiración de la “izquierda internacional” para escalar la violencia²¹. Esta versión de los hechos fue difundida principalmente entre los sectores más radicalizados de la derecha y amplificada por medios afines, como Willax (CHAMPA, 2021). Finalmente, Merino renunció ante la presión ciudadana y fue reemplazado por Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia con un gobierno de transición hasta julio de 2021. Sagasti conformó un gabinete de orientación liberal y dio continuidad a las políticas implementadas por Vizcarra durante la pandemia.

Las protestas de los trabajadores de la agroindustria –ocurridas luego de las manifestaciones contra el Congreso y el gobierno de Merino– que exigían mejores condiciones laborales, reforzaron la narrativa de la derecha conservadora de que se trataba de un ataque coordinado de la extrema izquierda contra el desarrollo económico. Keiko Fujimori, por ejemplo, afirmó que detrás de los actos de violencia estaban quienes no creían en la democracia²², mientras que grupos como la Coordinadora Republicana denunciaban que se buscaba instaurar un régimen donde las “turbas” impusieran su voluntad²³.

2.2 Las elecciones de 2021 y la polarización

Las elecciones generales de 2021 profundizaron la polarización que ha caracterizado los procesos electorales en el Perú desde inicios del siglo XXI. En la segunda vuelta, Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, se enfrentó a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Castillo, maestro rural, dirigente sindical y exmilitante del partido Perú Posible²⁴, capitalizó el descontento popular con la clase política tradicional y obtuvo un fuerte respaldo en las regiones históricamente marginadas, donde el voto suele inclinarse por opciones reformistas y descentralistas²⁵.

Keiko Fujimori, por su parte, articuló una narrativa que presentaba a Castillo como una amenaza para la democracia y el modelo económico, acusándolo de promover la “lucha de clases” y representar un “retroceso” para la economía²⁶. Durante su campaña

²¹ COORDINADORA REPUBLICANA (@CoordinadoraRep), **Publicación en X (Twitter)**, 12 nov. 2020.

²² KEIKO FUJIMORI (@Keikofujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 4 dic. 2020.

²³ COORDINADORA REPUBLICANA (@CoordinadoraRep), **Publicación en X (Twitter)**, 7 dic. 2020.

²⁴ CURO, Stephany. **La estrecha relación entre Alejandro Toledo y Pedro Castillo: exlíder del lápiz postuló a alcalde por Perú Posible**. Infobae, 25 abr. 2023.

²⁵ BBC NEWS MUNDO, **Elecciones en Perú: el mapa que explica la división del voto entre el “sur antisistema” favorable a Castillo y las ciudades que votaron por Fujimori**, 7 jun. 2021.

²⁶ KEIKO FUJIMORI, **Transmisión en Facebook**, 19 may. 2021.

electoral, posicionó la defensa del Perú, la democracia y la libertad como los elementos centrales del escenario político. Afirmó que existía una supuesta amenaza real de la izquierda radical, a la que vinculó con una “izquierda internacional” que quiere tomar el Perú. Además, sostuvo que la intención de la izquierda era impulsar un cambio constitucional con el objetivo de destruir la estabilidad económica y perpetuarse en el poder²⁷. Desde la primera vuelta, esta estrategia polarizante le permitió captar el apoyo de los sectores más radicalizados de la derecha, avanzar a la segunda vuelta y articular una coalición conservadora contra la candidatura de Pedro Castillo.

Tras los primeros resultados de la segunda vuelta electoral, que daban la victoria a Pedro Castillo, el fujimorismo y otros sectores de la derecha emprendieron una campaña denunciando un presunto fraude electoral, cuestionando tanto la legitimidad de los resultados como la imparcialidad de las autoridades electorales. Aunque no se presentaron pruebas de dicho fraude, la campaña logró mantener movilizada a la opinión pública durante varias semanas, especialmente entre los sectores más radicalizados de la derecha (CORONEL, 2024).

2.3 El gobierno de Castillo y la estrategia de desgaste

Una vez en el poder, el gobierno de Pedro Castillo enfrentó ataques constantes de Fuerza Popular y otras bancadas conservadoras, tanto desde el Congreso como desde medios afines a las derechas (GOLDSTEIN, 2022; MENDOZA, 2023; DURAND, 2024; ILIZARBE, 2024). Las acusaciones de corrupción y la falta de experiencia política de Castillo fueron explotadas por la oposición para debilitar su imagen y justificar su eventual destitución. Además, las movilizaciones de la derecha, tanto contra el “fraude electoral” como en apoyo a la vacancia presidencial, mantuvieron un estado de agitación constante durante los diecisiete meses de gobierno (CORONEL, 2024).

En diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y declarar un gobierno de excepción. Sin embargo, el Congreso respondió con una destitución inmediata, argumentando que Castillo había cometido un “quiebre constitucional” (ILIZARBE, 2024). Aunque la vacancia presidencial es un mecanismo legal, la rapidez con que se llevó a cabo y la falta de un juicio político previo generaron controversia (OROPEZA Y MENDOZA, 2023). Castillo fue reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo gobierno ha contado con el apoyo de las bancadas de derecha en el

²⁷ KEIKO FUJIMORI (Oficial), **Publicación en Facebook**, 24 may. 2021.

Congreso, las Fuerzas Armadas y el empresariado organizado en gremios como la CONFIEP.

El periodo entre 2020 y 2022 evidencia la profundización de la polarización política y un crecimiento de las acciones y movilizaciones de la derecha en un contexto de crisis de la hegemonía neoliberal en el Perú. Durante este tiempo, la trayectoria política de Keiko Fujimori y Fuerza Popular ejemplifica el fenómeno del “conservadurismo radicalizado”, un proceso en el que fuerzas tradicionalmente conservadoras adoptan posturas cada vez más extremas y polarizantes en respuesta a un contexto de crisis y fragmentación política (STROBL, 2022). Este periodo se caracterizó por una retórica agresiva contra la izquierda, la defensa intransigente de ‘valores tradicionales’ y el cuestionamiento sistemático de las instituciones democráticas cuando no favorecían sus intereses. Fuerza Popular consolidó su base electoral mediante narrativas de confrontación, exacerbando divisiones sociales y presentándose como garante del orden establecido frente a lo que percibía como amenazas progresistas. Este enfoque no solo reflejó la evolución interna del partido, sino también las tensiones profundas de la política peruana, marcada por la lucha entre la preservación del statu quo y las demandas de reformas sociales. A continuación, se analizarán detalladamente los rasgos del conservadurismo radicalizado, como su estrategia de polarización, de oposición a reformas progresistas y su ambigua relación con las instituciones democráticas.

3- La destrucción deliberada de las reglas y la reestructuración del Estado

3.1 Defensa del modelo, políticas contra los trabajadores

Fuerza Popular se ha caracterizado por una defensa cerrada del modelo económico implementado durante la década de 1990 en el gobierno de Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, al reivindicar la gestión de su padre, ha reafirmado reiteradamente que la estabilidad económica y la derrota de la subversión han sido los grandes pilares del desarrollo del Perú en las últimas décadas. Aunque en los últimos años ha empleado una retórica que menciona la necesidad de cambios para lograr una mejor redistribución²⁸, ha mantenido una postura crítica frente a las propuestas de reformas políticas y económicas. Así, durante las protestas de los trabajadores de la agroindustria a fines de 2020, cuando se exigían reformas al Régimen de Promoción Agraria —que otorgaba beneficios tributarios y establecía un régimen laboral más flexible para el sector— Keiko Fujimori se

²⁸ KEIKO FUJIMORI (Oficial), **Publicación en Facebook**, 24 may. 2021

opuso a su modificación y calificó como peligroso que el Congreso cediera a las presiones provenientes de las protestas sociales²⁹.

Keiko Fujimori ha insistido en que las propuestas de reforma estructural de Pedro Castillo, como la “segunda reforma agraria” o los cambios en el régimen tributario, pondrían en riesgo el modelo económico vigente³⁰. Un ejemplo de ello fue la oposición de Fuerza Popular al impuesto a las sobreganancias mineras, argumentando que desincentivaría la inversión extranjera. Desde el Congreso, la bancada fujimorista bloqueó su implementación, reafirmando su defensa del esquema económico establecido en los años noventa³¹.

La defensa del modelo también se ha manifestado en la promoción de políticas favorables a las élites económicas, como las exoneraciones tributarias a las grandes empresas. En el turbulento contexto de 2020 a 2022, Fuerza Popular impulsó iniciativas legislativas que beneficiaban al empresariado, mientras que, al mismo tiempo, bloqueó propuestas orientadas a mejorar las condiciones salariales y laborales. Un ejemplo de ello fue su resistencia a las reformas en el régimen laboral de la agroindustria, a pesar de las demandas de los trabajadores³².

Las posturas de Fuerza Popular y el fujimorismo en defensa del modelo económico han estado enmarcadas en la idea de ser un bastión de defensa contra el comunismo. El fujimorismo ha utilizado su discurso conservador para alimentar, a través de la propaganda, la percepción de una constante amenaza comunista contra la estabilidad económica y el orden social, presentándose como la principal resistencia frente a este peligro³³. Entre 2020 y 2022, esta estrategia incluyó la descalificación de cualquier postura progresista o liberal, etiquetándolas como “caviare”³⁴ y aliadas de la “izquierda radical” o del “terrorismo”. En este contexto, Keiko Fujimori ha recurrido a narrativas y

²⁹ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 4 dic. 2020.

³⁰ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 23 ene. 2021.

³¹ LA REPÚBLICA, **Congreso impide que se eleven impuestos a las grandes mineras: Poder Ejecutivo**, 18 dic. 2021

³² KEIKO FUJIMORI (Oficial), **Publicación en Facebook**, 3 feb. 2021

³³ FUERZA POPULAR. **Presentación de Keiko Fujimori en #CADEelectoral 2021**. YouTube, 17 feb. 2021

³⁴ Término usado en el contexto político peruano para designar a toda posición que sin adscribirse al espectro de las izquierdas coinciden en cierto progresismo social o liberalismo político. Los caviare serían de este modo tontos útiles de la “izquierda radical” o el “comunismo” por lo que son blancos de sus ataques al señalarlos como políticos y técnicos que han gestionado el Estado desde la caída del gobierno Fujimori en el 2000.

teorías conspirativas difundidas por grupos de extrema derecha y medios de comunicación afines para atacar a sus adversarios políticos³⁵.

3.2 Ruptura de las reglas informales

Strobl (2022) señala que el conservadurismo radicalizado recurre a la ruptura de las reglas informales como una estrategia para diferenciarse de lo políticamente correcto, proyectando así una imagen de transgresión y novedad. Esta postura responde a un cálculo pragmático en el que se sopesa lo que se gana y lo que se pierde con dicha transgresión: si los beneficios de quebrar una regla superan las posibles sanciones, la acción se lleva a cabo. En este sentido, tras los resultados de la segunda vuelta en mayo de 2021, Keiko Fujimori impulsó una campaña sistemática basada en la narrativa de un supuesto fraude electoral, desafiando abiertamente el principio democrático de aceptación de los resultados. Asimismo, una vez instalado el gobierno de Pedro Castillo, Fujimori rompió la regla informal que otorga una tregua inicial a las nuevas administraciones, optando por atacar al gobierno desde el primer momento en lugar de facilitar sus primeros meses de gestión.

El rechazo de Keiko Fujimori a los resultados adversos comenzó la misma noche de las elecciones, el 11 de abril, cuando los primeros conteos indicaban su pase a la segunda vuelta. En ese momento, su mensaje a sus simpatizantes fue cauteloso, pero sentó las bases de su estrategia posterior, indicó así que la segunda vuelta está en manos de los personeros y que necesitan asegurar que se respete el voto³⁶.

Ya durante la segunda vuelta, a medida que los resultados favorecían a Pedro Castillo, Keiko Fujimori y su equipo comenzaron a denunciar supuestas irregularidades en el conteo de votos. El 9 de junio, en una conferencia de prensa transmitida en sus redes sociales, Fujimori afirmó haber recibido denuncias sobre irregularidades en las actas electorales de diversas mesas³⁷. Paralelamente, su campaña buscaba erosionar la legitimidad del proceso electoral y de las instituciones encargadas de supervisarlos, con el objetivo de debilitar al gobierno entrante. Además, se apuntaló la idea de que el sistema

³⁵ Medios de comunicación como Willax, PBO y Fundaciones como ILAD reproducen en el Perú teorías conspirativas, mientras que grupos como La Resistencia, Los Combatientes a través de acciones callejeras y de propaganda difunden narrativas conspirativas. Véase Coronel (2024).

³⁶ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 11 abr. 2021.

³⁷ OJO PÚBLICO, **La estrategia de Fujimori que insiste en negar resultados electorales**, 21 jun. 2021.

electoral estaba parcializado, al no atender sus pedidos de impugnación de actas y revisión de presuntas irregularidades en los comicios.

En un intento por revertir los resultados electorales, el fujimorismo anunció que presentaría cerca de mil solicitudes de nulidad y más de mil doscientos pedidos de impugnación en actas de distritos y provincias donde Pedro Castillo había obtenido una amplia ventaja. Este proceso implicaba un universo de aproximadamente medio millón de votos que alterarían los resultados electorales. Keiko Fujimori aseguró que había ocurrido un fraude sistemático en varias mesas electorales³⁸, atribuyendo esta irregularidad a un esfuerzo deliberado del equipo de Castillo para manipular los resultados. Inicialmente, la cruzada del fujimorismo se centraba en “saber la verdad” y solicitar la revisión de las impugnaciones y las nulidades de actas. Las movilizaciones convocadas por la derecha conservadora incluyeron consignas como “respeta mi voto”. Con el paso de los días, la narrativa fraudulenta del fujimorismo se radicalizó, acusando al sistema electoral e incluso al presidente Sagasti de parcialización y de colocar “obstáculos” para conocer la verdad de los resultados. En cuanto a las instituciones electorales, se les acusaba de actuar de manera sesgada, mientras que el presidente era criticado por oponerse a una auditoría internacional³⁹. Esta narrativa se amplificó a través de medios afines, como Willax TV, y en redes sociales, donde se difundieron teorías fraudistas⁴⁰.

Las denuncias de “fraude” y la campaña de movilización que lo acompañó permitieron una articulación de las derechas en torno a una causa común. Sin embargo, esta narrativa no era nueva: desde mediados de 2020, grupos conservadores radicales, como la Coordinadora Republicana –afín al fujimorismo y clave en el golpe congresal y el breve gobierno de Merino–, ya habían comenzado a difundir sospechas sobre la transparencia del proceso electoral. De manera recurrente, señalaban que el entonces presidente Vizcarra manipularía las elecciones para protegerse de las denuncias que enfrentarían después de su mandato⁴¹, alimentando así la desconfianza en el sistema electoral y sentando las bases para las futuras acusaciones de fraude.

³⁸ KEIKO FUJIMORI (Oficial), **Publicación en Facebook**, 10 jul. 2021.

³⁹ KEIKO FUJIMORI (Oficial), **Publicación en Facebook**, 7 jul. 2021.

⁴⁰ WILLAX, **La historia del fraude en mesa y la desesperación por proclamar a Pedro Castillo**, 12 jul. 2021.

⁴¹ ANGEL DELGADO, **Elecciones en peligro inminente**, Altavoz, 15 oct. 2020.

La estrategia fraudista del fujimorismo, además de buscar revertir la derrota electoral, tenía una perspectiva a mediano plazo: el empantanamiento del proceso electoral contribuyó a erosionar la legitimidad del nuevo gobierno, que para la base electoral de Keiko Fujimori era el resultado de un fraude. Así mantuvo el cuestionamiento sobre el sistema electoral y dificultó la consolidación del nuevo gobierno entrante. A través de la incitación a la polarización y el mantenimiento de una campaña permanente –como se analizará en un siguiente apartado–, el fujimorismo logró consolidarse como la principal fuerza dentro de las derechas.

3.3 Restructuración de las instituciones

Natascha Strobl (2022) señala que la reestructuración autoritaria del Estado es una de las características de los conservadurismos radicalizados, que impulsan intentos por quebrar el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, siguiendo una lógica neoliberal, estos movimientos promueven medidas que debilitan las políticas de protección social existentes. Estos ataques a las instituciones no son circunstanciales, sino sistemáticos, y buscan hacerse del control de estos.

Con la instalación del gobierno de Pedro Castillo en julio de 2021, el Congreso peruano, dominado por la bancada fujimorista en alianza con otras bancadas de derecha, puso en marcha una estrategia sistemática para limitar la acción del Ejecutivo. Esta oposición se manifestó en dos frentes principales: por un lado, el bloqueo de las iniciativas legislativas del gobierno; por otro, el uso intensivo de mecanismos de control político, como interpelaciones y censuras ministeriales. Además, las bancadas de derecha promovieron diversas iniciativas legislativas para aumentar su influencia sobre el sistema de justicia.

El Congreso, dominado por las bancadas de derecha como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, bloqueó sistemáticamente las iniciativas legislativas claves del gobierno de Pedro Castillo. Entre las propuestas obstruidas destacaron la reforma constitucional para eliminar la figura de vacancia por “incapacidad moral”⁴² –que quedó fuera de la pauta legislativa–, la convocatoria a una Asamblea Constituyente⁴³ –rechazada en comisiones por considerarse “inconstitucional”– y la creación del Ministerio de

⁴² EL NACIONAL, **El gobierno peruano propuso una reforma constitucional limitada**, 21 oct. 2021.

⁴³ ANDINA, **Congreso: comisión archiva proyecto de referéndum para convocar asamblea constituyente**, 6 may. 2022.

Ciencia y Tecnología⁴⁴, que fue excluida de la agenda legislativa. Asimismo, el Legislativo impulsó cambios en instituciones clave, como la SUNEDU⁴⁵, a través de alianzas entre la derecha y con los votos de parlamentarios de Perú Libre, beneficiando así a universidades privadas no licenciadas vinculadas a congresistas de varias bancadas.

Hasta junio de 2022, a once meses del gobierno de Castillo, se presentaron 25 mociones de interpelación ministerial que involucraban a 13 de los 19 ministerios⁴⁶. Asimismo, durante su gobierno cinco de nueve mociones de censura fueron aprobados contra diferentes ministros⁴⁷ lo que evidenció un esfuerzo constante de las bancadas de derecha del Congreso por desestabilizar al gabinete aprovechando escándalos de corrupción e ineptitud.

Paralelamente, las bancadas opositoras impulsaron iniciativas legislativas destinadas a alterar el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, así como a influir en el sistema de justicia. En este sentido, el Congreso recortó las facultades presidenciales asociadas al “pedido de confianza”, un mecanismo que permitía al Ejecutivo presionar al Legislativo para la discusión y aprobación de determinadas normas. Durante su gobierno, Martín Vizcarra utilizó este recurso para confrontar al Congreso y, tras la negativa de un “pedido de confianza”, procedió a su disolución y convocó nuevas elecciones parlamentarias. Con el objetivo de evitar que Pedro Castillo pudiera recurrir a la misma estrategia, el nuevo Congreso optó por limitar esta prerrogativa presidencial⁴⁸.

Asimismo, las bancadas de derecha impulsaron una cuestionada elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, un proceso similar al que en 2019 había provocado el cierre del Congreso. Los magistrados elegidos tenían vínculos con sectores conservadores y de derecha, consolidando así un Tribunal Constitucional alineado con los intereses del Legislativo⁴⁹. De este modo, el recorte de las facultades presidenciales y la

⁴⁴ INFOBAE, **Pedro Castillo vuelve a exhortar al Congreso que ponga en agenda proyectos del Ejecutivo**, 12 nov. 2022.

⁴⁵ RPP, **Congreso aprueba por insistencia la ley de contrarreforma universitaria que atenta contra Sunedu**, 13 jul. 2022.

⁴⁶ INFOBAE, **Pedro Castillo: 13 de 19 ministerios recibieron al menos una moción de interpelación**, 3 jun. 2022.

⁴⁷ LA REPÚBLICA, **Congreso: los ministros censurados durante el gobierno de Pedro Castillo**, 1 nov. 2022.

⁴⁸ GESTION, **Poder Ejecutivo ya no podrá usar cuestión de confianza por reforma constitucional**, 16 sep. 2021.

⁴⁹ INFOBAE, **Congreso elige a miembros del Tribunal Constitucional: son 6 los candidatos**, 10 may. 2022

conformación de un Tribunal Constitucional afin fortalecieron el poder del Congreso, que se blindó frente a un eventual intento de disolución por parte del Ejecutivo.

Otras reformas impulsadas durante este período incluyeron restricciones para la convocatoria de un referéndum sobre reformas constitucionales, estableciendo como requisito la aprobación previa del Congreso. Además, se aprobó la exclusión de los partidos políticos de responsabilidades penales y la reducción de multas por faltas cometidas por los candidatos. En conjunto, estas medidas fortalecieron el poder del Congreso sobre las demás instituciones y consolidaron el bloque de derechas en el parlamento. Finalmente, en este mismo periodo se presentaron iniciativas legislativas para modificar el sistema político y electoral, así como las atribuciones y procedimientos de investigación de la Fiscalía, no obstante, muchas de estas solo fueron aprobadas tras la destitución de Pedro Castillo en 2022⁵⁰.

4- Guerra cultural: polarización y la escenificación mediática, campaña permanente y realidades paralelas

Strobl (2022) señala que otras de las características del conservadurismo radicalizado es la adopción de la polarización como una estrategia importante. Esta se basa en enfatizar y mantener las diferencias a lo largo del tiempo para justificar la existencia de un polo político desde donde enfrentar a sus adversarios. Asimismo, Strobl indica que los conservadores radicalizados optan por mantener junto a la polarización, un estado de campaña y agitación permanente con el objetivo de hacerse de popularidad y beneficiarse de la indignación pública. Finalmente, otro rasgo clave de este fenómeno es la relacionada a la sustitución de la realidad por una realidad paralela, sostenida por narrativas conspirativas que promueven la idea de la existencia de un poder oculto que busca destruir la identidad nacional y los valores tradicionales. De este modo, se justifica el papel épico que tienen que cumplir el líder político y sus seguidores en la lucha contra sus enemigos. A continuación, veremos con más detalle cada uno.

4.1 La polarización como estrategia

Como hemos mencionado, uno de los pilares del conservadurismo radicalizado es el uso deliberado y constante de la polarización como estrategia política. Esta consiste en dividir el espectro político en dos bandos irreconciliables, creando una dicotomía en la que un “nosotros” se enfrenta a un “ellos” que es presentado como una amenaza

⁵⁰ OJO PÚBLICO, Congreso aprobó más de 25 leyes que afectan la institucionalidad, 7 jul. 2024.

existencial. Strobl (2022) señala que, a diferencia de los conservadores tradicionales o los liberales, el conservadurismo radicalizado no busca simplemente preservar la sociedad y el orden vigente, sino que pretende abrir y amplificar las grietas existentes en la sociedad. Su objetivo es generar un estado de desorden que posteriormente puedan reordenado por ellos. En esa lógica la polarización política es a largo plazo un estado normal de las cosas. A través de esta estrategia, se presentan como la voz de una supuesta mayoría silenciosa.

Durante el periodo analizado, se observa la consolidación de narrativas que contraponen a los “defensores de la patria” contra los “enemigos del Perú”, a los “peruanos de bien” contra los “vándalos”, o a los “patriotas” contra los “caviares” y “radicales”. Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otras fuerzas conservadoras, como la Coordinadora Republicana y Renovación Popular, han promovido constantemente discursos que presentan a la izquierda y a los sectores progresistas como agentes de desestabilización, vinculándolos con agendas extranjeras y con un supuesto plan para destruir el país.

Las movilizaciones sociales de noviembre de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino marcaron un punto de inflexión en la radicalización del discurso y las posiciones de la derecha conservadora. Tras la destitución de Martín Vizcarra y la toma de poder de Merino, miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar su rechazo. El estallido de estas protestas tomó por sorpresa a las bancadas de derecha que habían promovido la vacancia de Vizcarra. Las masivas manifestaciones expresaban un profundo descontento contra el Congreso, al que se acusaba de obstaculizar tanto a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como a Vizcarra, así como de defender los intereses de políticos investigados por la Fiscalía en el marco de los casos Cuellos Blancos y Odebrecht. En este sentido, el hartazgo ciudadano en la crisis política se canalizó en las protestas contra el gobierno interino de Merino (ILIZARBE, 2022).

En respuesta, los grupos políticos conservadores que respaldaban la instalación de Merino en el gobierno, como la Coordinadora Republicana y figuras afines al fujimorismo, promovieron una narrativa que señalaba a los manifestantes como agitadores financiados por intereses extranjeros y vinculados a la izquierda radical. Desde esta perspectiva, las protestas fueron presentadas como un intento de desestabilización organizado por grupos alineados con el Foro de São Paulo y la “extrema izquierda

internacional”⁵¹. A través de redes sociales y medios conservadores como Willax, se difundió la idea de que los manifestantes buscaban generar caos y que eran parte de una conspiración mayor para debilitar la institucionalidad democrática. Willax llegó a propagar noticias falsas, como cuando presentó supuestas imágenes de armas incautadas a los manifestantes, las cuales en realidad correspondían a un operativo policial en Chile de años atrás⁵². Con este discurso, se buscó justificar tanto la represión policial como la criminalización de los manifestantes.

El papel de Fuerza Popular y Keiko Fujimori en este contexto fue clave, ya que mantenían una confrontación con Vizcarra desde el Congreso anterior, cerrado en septiembre de 2019, y apoyaron su vacancia con los 15 votos de la bancada fujimorista. Si bien el fujimorismo fue parte de la trama para destituir a Vizcarra y figuras importantes de Fuerza Popular, como Martha Chávez y las juventudes del partido, respaldaron el gobierno de Merino, Keiko Fujimori se mantuvo distante y expectante. Para noviembre de 2020, cuando Vizcarra fue destituido, las elecciones ya habían sido convocadas y los partidos estaban en el proceso de cerrar sus listas e inscribir a sus candidatos. Desde fines de octubre, Fuerza Popular y Keiko Fujimori iniciaron, de manera informal, su campaña electoral con el lanzamiento del plan de gobierno denominado “Rescate 2021”. Según Fujimori, el Perú atravesaba una de las crisis más graves de su historia debido a la pandemia, el aumento de la pobreza y la exposición al Covid-19 que enfrentaban las familias para intentar sobrevivir, lo que obligaba a implementar “una vez más” un plan de rescate, en referencia al programa económico aplicado por Alberto Fujimori en la década de 1990⁵³. El lanzamiento de este plan, la convocatoria a la participación ciudadana digital y la presentación de los miembros del equipo de Plan de Gobierno y candidatos al Congreso ya estaban en marcha cuando ocurrió la vacancia de Vizcarra.

Así, cuando las protestas se hicieron masivas, la represión aumentó y quedó en evidencia que el gobierno de Merino era insostenible debido a su impopularidad, Keiko Fujimori retiró su apoyo al gobierno interino, pidió la renuncia del presidente y calificó la situación de “insostenible”⁵⁴. No obstante, sectores conservadores aliados al fujimorismo continuaron respaldando narrativas que deslegitimaban las movilizaciones,

⁵¹ COORDINADORA REPUBLICANA (@CoordinadoraRep), **Publicación en X (Twitter)**, 17 nov. 2020.

⁵² UTERO.PE, **Revisamos los bolsillos de Willax TV y tenemos la lista del centenar de auspiciadores del canal golpista**, 19 nov. 2020.

⁵³ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 1 nov. 2020.

⁵⁴ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 15 nov. 2020.

denunciando una supuesta injerencia del Foro de São Paulo y la presencia de “agitadores foráneos” y “radicales chilenos” que estarían preparando una insurrección en el Perú. Si bien Fujimori lamentó las muertes de los jóvenes Inti y Bryan durante las protestas contra Merino y el Congreso, evitó una condena clara a la represión policial y a las narrativas polarizadoras y “terruqueadoras” promovidas desde distintos sectores de la derecha, incluidos miembros del fujimorismo.

De hecho, Fuerza Popular, a través de su órgano de juventudes partidarias, organizó en los últimos días de las protestas una campaña comunicacional que contraponía a quienes “defendían la paz” contra los “violentistas” influenciados por la “extrema izquierda”. Como parte de esta campaña, se realizó un acto de limpieza de calles y muros en una de las plazas donde ocurrieron las manifestaciones contra Merino, señalando que ellos también protestaban, pero contra el vandalismo y la violencia⁵⁵. De manera similar, colectivos de derecha radical como La Resistencia llevaron a cabo incursiones para destruir los memoriales en homenaje a Inti y Bryan, que habían surgido espontáneamente durante las protestas⁵⁶.

En el contexto de las protestas de los trabajadores de la agroindustria, ocurridas después de las manifestaciones contra Merino, Keiko Fujimori se decidió a promover activamente la polarización. Se preguntaba: “¿Quién está detrás de la violencia sistemática que se está desatando en el país y aprovechándose de las necesidades de la población?”. A esta pregunta se respondía culpando a la “izquierda radical”, a quienes señalaba como responsables de, aprovechándose de la desilusión de los peruanos, atacar al país para ganar poder. Fujimori enfatizó que el fujimorismo ya había confrontado esta ideología en el pasado, por lo que se comprometió a enfrentar nuevamente a estas fuerzas⁵⁷. De esta manera, Fuerza Popular lanzó la campaña #IzquierdaRadicalNo a través de sus redes sociales.

A través de esta campaña, diversos personajes del fujimorismo, como el responsable del programa de gobierno Nano Guerra y el encargado del área de salud Ernesto Bustamante, difundieron la teoría de que detrás de las protestas de los trabajadores agroindustriales se encontraba la “izquierda radical”⁵⁸. Según ellos, este

⁵⁵ JÓVENES FUERZA POPULAR (@JovenesFP_), **Publicación en X (Twitter)**, 14 nov. 2020.

⁵⁶ WAYKA, **Destruyen mural de Inti y Bryan: propietaria de vehículo es afiliada de Fuerza Popular**, 25 nov. 2020.

⁵⁷ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 4 dic. 2020.

⁵⁸ FUERZA POPULAR (@FuerzaPopular_), **Publicación en X (Twitter)**, 9 dic. 2020.

sector buscaba poner al gobierno contra las cuerdas, y llevar al país a un caos como el que ocurrió en octubre de 2019 en Chile⁵⁹. De manera similar, otros personajes vinculados al fujimorismo, como el empresario agroindustrial Benjamín Cillóniz, hijo del exmilitante fujimorista y exgobernador regional de Ica por el mismo partido, Fernando Cillóniz, señaló que la violencia de las protestas guardaba similitudes con la violencia terrorista de la década de 1980⁶⁰.

El proceso de polarización se agudizó durante la campaña electoral de 2021, especialmente en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Como mencionamos anteriormente, desde los sectores conservadores se promovió la idea de que un eventual triunfo de Castillo representaba la “llegada del comunismo” al Perú. A través de campañas de miedo y desinformación, se difundió el mensaje de que su gobierno llevaría a la expropiación de propiedades, el colapso de la economía y la imposición de un modelo similar al de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Durante la campaña electoral de 2021, Keiko Fujimori utilizó la polarización como una estrategia central tanto en la primera como en la segunda vuelta. En la primera vuelta, su discurso estuvo enfocado en la recuperación del país tras la crisis sanitaria y económica, promoviendo su “Plan Rescate 2021” como una solución para restaurar la estabilidad y el crecimiento. Desde esta narrativa, no se trataba solo de una elección, sino de una batalla existencial contra la “amenaza comunista”. Así, Fujimori consolidó su base electoral presentando su candidatura como la única opción frente a lo que describió como el avance de la “izquierda radical” contra la democracia y el modelo económico. En esa perspectiva, en sus actividades de campaña de la primera vuelta, atacó constantemente a Veronika Mendoza y a Jhony Lescano, a quienes calificó de radical y populista, respectivamente, debido a sus propuestas de reforma constitucional y ajustes al modelo económico⁶¹. La campaña fujimorista y sus aliados mediáticos impulsaron ataques constantes contra ambas candidaturas, advirtiendo que un gobierno de izquierda o populista significaría retrocesos institucionales, económicos y sociales, estableciendo paralelismos con otros gobiernos de la región⁶².

⁵⁹ FUERZA POPULAR (@FuerzaPopular_), **Publicación en X (Twitter)**, 6 dic. 2020.

⁶⁰ RPP, **Benjamín Cillóniz sobre protestas en Ica: “Es lo más parecido que vivimos al terrorismo”**, 1 dic. 2020.

⁶¹ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 3 feb. 2021

⁶² Por entonces Pedro Castillo llevaba adelante una silenciosa campaña en las regiones del sur del Perú y en las encuestas que los medios de comunicación de Lima difundían este no aparecía con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Aproximadamente dos semanas antes de las elecciones fue haciéndose evidente

En la segunda vuelta, la estrategia de polarización se intensificó considerablemente. Fujimori centró su discurso en una dicotomía extrema entre “libertad” y “comunismo”, presentando a Castillo como una amenaza inminente para el país. En múltiples discursos y publicaciones en redes sociales, lo acusó de querer implantar un modelo similar al de Venezuela y de estar respaldado por líderes de la izquierda latinoamericana como Evo Morales, a quien rechazó públicamente y exigió que no interfiriera en la política peruana⁶³.

Además, Fujimori aprovechó diversos eventos y declaraciones para reforzar la sensación de crisis y urgencia entre su electorado. En un mensaje realizado el 24 de mayo, enfatizó que la izquierda radical y el populismo representaban una grave amenaza para la democracia y la economía del país, llamando a un frente común para defender la estabilidad nacional⁶⁴. Esta estrategia de polarización le permitió sumar el respaldo de todas las fuerzas políticas de derecha que consideraban a Castillo un peligro para la democracia⁶⁵. Asimismo, logró movilizar apoyos internacionales que reforzaron su discurso. Figuras como Mario Vargas Llosa respaldaron su candidatura, advirtiéndole que un gobierno de Castillo conduciría al Perú por el mismo camino de Venezuela y Nicaragua. Con estas tácticas, Fujimori consolidó un bloque opositor férreo que, incluso tras su derrota electoral, mantuvo un discurso de resistencia y desconocimiento de los resultados, alimentando una polarización prolongada en el escenario político peruano.

La estrategia de polarización se amplificó tras los resultados de la segunda vuelta. Ante la victoria de Pedro Castillo, Fuerza Popular y el conjunto de las derechas conservadoras impulsaron la narrativa de un fraude electoral masivo. Keiko Fujimori lideró la denuncia de supuestas irregularidades sin presentar pruebas concluyentes –como explicamos en apartados anteriores– promoviendo así la idea de que su derrota había sido producto de un “fraude sistemático” en las mesas electorales de varias regiones donde los resultados le eran adversos. Posteriormente, amplió su denuncia hacia las autoridades electorales, como la ONPE y el JNE, acusándolas de estar parcializadas y de no cumplir con su trabajo al rechazar las observaciones presentadas por el fujimorismo.

que ni Mendoza ni Lescano pasarían a la segunda vuelta ya que la popularidad de Castillo iba subiendo hasta despuntar del resto de candidatos.

⁶³ Evo Morales había expresado su simpatía por Pedro Castillo en su cuenta de twitter.

⁶⁴ KEIKO FUJIMORI (Oficial), **Publicación en Facebook**, 24 may. 2021.

⁶⁵ Partidos como Alianza por el Progreso, el Partido Popular Cristiano, el Apra, Renovación Popular, Avanza País, Victoria Nacional, etc. dieron su público respaldo a Keiko Fujimori y se integraron a la campaña contra Castillo.

Keiko Fujimori utilizó esta estrategia para consolidar una base política y social radicalizada, que se mantuvo en estado de movilización incluso después de la proclamación oficial de Castillo. En este tiempo, se promovieron marchas, protestas y se buscó generar presión sobre las autoridades electorales para que intervinieran positivamente a su pedido de anular los votos de Castillo⁶⁶. Este ambiente de crispación política sentó las bases para una oposición frontal y obstaculizó cualquier posibilidad de diálogo entre el nuevo gobierno y la oposición.

Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, Keiko Fujimori y Fuerza Popular mantuvieron su estrategia de polarización, presentando su administración como una amenaza existencial para la democracia y el modelo económico. En julio de 2021, Fujimori declaró que su partido sería “un muro de contención” frente a la amenaza comunista de una nueva constitución y de cambios estructurales⁶⁷. A pesar de afirmar que apoyarían medidas a favor del bienestar ciudadano, desde las primeras semanas del gobierno de Castillo se enfocaron en deslegitimarlo, insistiendo en la supuesta infiltración de personajes radicales⁶⁸. En agosto, Keiko Fujimori utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar unas antiguas declaraciones del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, acusándolo de un “ataque a las Fuerzas Armadas” y pidiendo que el Congreso debía actuar en consecuencia⁶⁹. Este tipo de discurso reforzó la idea de que el gobierno de Castillo era un peligro para la institucionalidad democrática y debía rescatarse al país lo antes posible.

De este modo, en reiteradas oportunidades, Fujimori utilizó su plataforma política y redes sociales para enfatizar que Castillo representaba un peligro para la estabilidad del Perú. La polarización que Keiko Fujimori, la derecha conservadora y el fujimorismo promovieron se desarrolló desde tres frentes: El Congreso que, como explicamos anteriormente, usó sus facultades para obstruir al gobierno, controlarlo y llevar adelante reformas que le restaran poderes al Ejecutivo en beneficio del parlamento o para ganar influencia sobre otras instituciones importantes del Estado como el Tribunal Constitucional. Otro frente desde donde la polarización se seguía reproduciendo fue a través de los medios de comunicación, que ampliaron la narrativa de amenaza y

⁶⁶ OJO PÚBLICO, **Grupos de ultraderecha difunden discurso de odio y violencia**, 15 ago. 2021.

⁶⁷ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 28 jul. 2021.

⁶⁸ 24 HORAS, **Keiko Fujimori calificó de “caótico” el Gabinete Ministerial de Pedro Castillo**, 31 ago. 2021.

⁶⁹ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 16 ago. 2021

desestabilización, asimismo, el tercer frente fueron las movilizaciones y acciones callejeras de los grupos y colectivos de extrema derecha.

La utilización de estos tres frentes (Congreso, medios de comunicación y las calles) para fomentar la polarización no solo implicaba una división política, sino también un intento de consolidar una narrativa en la que el gobierno de Castillo fuera percibido como incapaz, ilegítimo y, en última instancia, destructivo para el orden democrático y económico del país. Este enfoque reafirmaba la posición de Fujimori como líder de la oposición y como la alternativa “democrática” ante lo que consideraban un asalto al sistema por parte de fuerzas radicales.

Las manifestaciones y acciones callejeras de la derecha fueron fundamentales a lo largo de todo el gobierno de Castillo. Las demandas de estas manifestaciones, y particularmente de los colectivos y grupos de derecha que las convocaban y se movilizaban, iban mucho más allá de una oposición democrática. Como relata Coronel (2024), el tejido social de las movilizaciones de la derecha venía desde varias vertientes: el movimiento religioso conservador, activo desde varios años atrás y con experiencia en las movilizaciones contra los derechos sexuales, reproductivos y de género; grupos libertarios, involucrados en la batalla cultural a través de las comunidades digitales; y exmilitares anticomunistas que pedían que las fuerzas armadas dieran un golpe de Estado contra Castillo, a quien consideraban un presidente ilegítimo.

Si bien Keiko Fujimori no adoptaba los discursos de los grupos más radicales de las derechas movilizadas, sí adoptaba discursos en los que estos grupos se sentían incluidos. Un ejemplo de ello es el respaldo que daba a los grupos movilizadas llamándolos de “patriotas” que salían a defender su voto. Keiko si bien adquiría compromisos con estos grupos, no tomaba la totalidad de sus narrativas sino aquellas que consideraba útiles y que a su vez le permitían tener un amplio rango de llegada.

Así entre los diversos grupos movilizadas había quienes desarrollaban una narrativa hispanista de la historia peruana reivindicando el catolicismo y el papel civilizatorio del imperio español sobre los pueblos andinos⁷⁰. Fujimori, quien tiene apoyos entre sectores populares de ascendencia andina en varias ciudades no adoptaba estas narrativas que le hubiesen resultado contradictorias, adoptó entonces una narrativa cristiana que involucraba no solo a estos grupos sino también a grupos conservadores

⁷⁰ OJO PÚBLICO, **Grupos de ultraderecha difunden discurso de odio y violencia**, 15 ago. 2021.

tanto vinculados al catolicismo como al cristianismo evangélico. En ese sentido, Keiko incluyó actos religiosos en sus actividades como cuando al convocar a una vigilia dirigió en este evento la oración colectiva que pedía por iluminación y bendición al país⁷¹. De esta manera, la líder de Fuerza Popular consolidaba una conexión con las bases más radicalizadas, sin abandonar su discurso pragmático ante la opinión pública.

Conforme avanzó el gobierno, la estrategia de polarización de Keiko Fujimori se intensificó con llamados explícitos a la remoción del presidente. Por ejemplo, el 28 de julio de 2022, tras el Mensaje a la Nación de Castillo, Keiko lo acusó de no tener autocritica y de hacerse pasar por víctima de los medios, afirmando que, si el presidente no renunciaba, sería el pueblo y sus representantes quienes terminarían con su gobierno⁷². También en septiembre de 2022, Fujimori declaró que el adelanto de elecciones era un mecanismo democrático para “terminar con el gobierno de Pedro Castillo y su grave daño a los peruanos”⁷³. Paralelamente, promovió la idea de que Castillo estaba vinculado a casos de corrupción que afectaban a su entorno más cercano del poder. Esta estrategia de polarización no solo contribuyó a erosionar la gobernabilidad del país, sino que también alimentó un clima de crisis permanente y polarización que finalmente desembocó en la destitución de Castillo en diciembre de 2022.

Como observamos, el fujimorismo adoptó la polarización como un mecanismo importante en su estrategia política, ya que le permitió superar el desgaste que experimentaron entre 2016 y 2020, logrando encabezar, con mayor fuerza desde la segunda vuelta electoral, la coalición que se articuló para hacer frente a Castillo y los partidos progresistas y de izquierda que apoyaban al gobierno. Esta estrategia de polarización no solo permitió al fujimorismo recuperar protagonismo, sino que también consolidó una plataforma de oposición sólida, enfrentando directamente las políticas del nuevo gobierno desde un enfoque radicalizado y polarizante.

Como indica Strobl (2022), la adopción de la polarización como una estrategia busca consolidar y justificar la formación de un polo político desde donde combatir a las fuerzas políticas progresistas o de izquierda. La insistencia en la narrativa del fraude electoral permitió mantener viva la idea de que el país había sido “secuestrado por el

⁷¹ KEIKO FUJIMORI (Oficial), **Publicación en Facebook**, 26 jun. 2021.

⁷² KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 28 jul. 2022.

⁷³ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 4 sep. 2022.

comunismo”, lo que facilitó la radicalización del discurso opositor y la constante movilización en busca de la destitución de Castillo.

De este modo, la polarización fue una herramienta clave para mantener articulada y movilizadora a la oposición, lo que se tradujo en la creación de un clima de crisis y desconfianza en las instituciones democráticas. Sin embargo, la polarización no fue la única estrategia empleada por el fujimorismo, sino que se combinó con otras tácticas, como escenificación mediática, la campaña permanente y la construcción de realidades paralelas a través de los medios de comunicación y la guerra cultural, que profundizaron aún más las fracturas en la sociedad peruana. Como veremos a continuación, estos elementos se entrelazaron para fortalecer la narrativa de confrontación y ampliar la base de apoyo de la oposición, intensificando las tensiones sociopolíticas.

4.2 Escenificación mediática y campaña permanente

La escenificación mediática y la campaña permanente son también estrategias importantes del conservadurismo radicalizado. Según Strobl (2022), los actores del conservadurismo radicalizado no distinguen entre los diferentes momentos de la política, como la etapa electoral o la etapa de gobierno, sino que optan por una política permanente de confrontación. La idea es mantener un estado de confrontación constante con la oposición, como si estuvieran siempre en campaña. El objetivo es ganar siempre popularidad, para ello no importa enfocarse en soluciones reales sino en escaramuzas y ataques, buscando empantanar los debates y forzar a la sociedad a tomar partido.

Para alcanzar este objetivo, el conservadurismo radicalizado juega hábilmente con los medios tradicionales, los medios de nicho y las plataformas digitales. Explotan la rapidez del ciclo noticioso, utilizando cada suceso político como una oportunidad para insertar su mensaje central. La estrategia también incluye lo que se denomina la “máquina de producir escándalos”, en la que tanto los políticos como los medios se benefician mutuamente de la indignación pública. Este enfoque no solo permite mantener la atención de la audiencia, sino que también contribuye a la construcción de realidades paralelas, reforzando la polarización y generando un clima de crisis constante que favorece la agenda política del conservadurismo radicalizado.

En este contexto, durante el periodo analizado, podemos observar que el estado de confrontación ha sido una constante en el Perú. Las protestas que surgieron en respuesta a la destitución de Vizcarra en 2020 sirvieron para empoderar aún más los

discursos polarizantes, forjados en los años previos (GOLDSTEIN, 2024). Además, las narrativas conspiracionistas que se difundieron en el contexto de la pandemia, especialmente contra las medidas de control sanitario, contribuyeron a agudizar esta polarización (CHAMPA, 2021). La polarización, impulsada desde los medios de comunicación afines a los sectores conservadores, ha permitido mantener un escenario de confrontación constante. Como señala Strobl (2022), esta estrategia genera un ambiente maniqueo, donde las personas se sienten presionadas a tomar partido, ya sea a favor o en contra.

Willax TV ha jugado un papel central en el proceso de polarización y escenificación mediática en Perú, convirtiéndose en una plataforma clave para la difusión de discursos polarizantes, la propagación de teorías de conspiración y la circulación de noticias falsas (CHAMPA, 2021; DURAND, 2022). Esta táctica, según Strobl (2022), es característica del conservadurismo radicalizado, que juega con los medios de comunicación de masas y emplea plataformas digitales y medios de nicho para amplificar su mensaje. En Perú, esta estrategia se ha evidenciado con el uso combinado de canales como Willax TV, así como el apoyo de influencers y redes sociales que refuerzan narrativas polarizantes y promueven el escándalo como mecanismo de movilización permanente.

Coronel (2024) destaca cómo, en los últimos años, se ha consolidado una serie de plataformas digitales que promueven y amplifican la guerra cultural impulsada por estos sectores conservadores. Asimismo, el grupo El Comercio –que tiene una importante posición dominante entre los medios tradicionales y que en la coyuntura de protestas contra Merino en 2020 inicialmente criticaron las protestas y luego las apoyaron como dan cuenta Angulo-Giraldo y Bolo-Varela (2021)– en la campaña electoral de 2021 se alineó abiertamente con la candidatura de Keiko Fujimori y mantuvo luego una oposición activa contra el gobierno de Pedro Castillo.

Un aspecto clave de la estrategia de campaña permanente, según Strobl (2022), es el uso de lo que llama “la máquina de producir escándalos”. Esta táctica convierte la indignación en un negocio mediático, cuyo objetivo es captar la atención y pautear la agenda pública. Así, durante la campaña electoral y en el contexto de la intensa propaganda anticomunista contra Pedro Castillo, se produjo un ataque en una zona rural de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en el que fueron asesinadas

16 personas⁷⁴. A pocos días de la segunda vuelta electoral, la campaña fujimorista deslizó la idea que Castillo tenía vínculos con los perpetradores del ataque, quienes eran remanentes de Sendero Luminoso. Esta narrativa se integró a la estrategia del “terruqueo”, utilizada históricamente por sectores conservadores para deslegitimar a adversarios políticos mediante la asociación con el terrorismo. Medios de comunicación afines a la derecha conservadora amplificaron esta versión, reforzando el discurso de que Castillo representaba una amenaza para la seguridad nacional.

Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori intentó confrontar directamente a Pedro Castillo desde el inicio de la segunda vuelta, en un contexto en el que las encuestas de intención de voto favorecían al candidato de Perú Libre. Como parte de su estrategia, Fujimori repetía la frase “no te corras, Pedro”⁷⁵, buscando construir una imagen de Castillo como un candidato débil y evasivo. Siguiendo esta narrativa, Keiko tomó la posta de una declaración de Castillo, en la que mencionó su disposición a debatir en el penal de mujeres de Lima, donde ella había cumplido prisión preventiva por investigaciones fiscales en 2019. En respuesta, Fujimori organizó un mitin en ese mismo lugar, montando un estrado para un supuesto debate que nunca ocurrió, ya que Castillo no asistió. En su ausencia, el evento se transformó en un espectáculo mediático que incluyó un acto de reconciliación entre Keiko y su hermano Kenji Fujimori, con quien había estado enemistada en años previos⁷⁶. Este episodio, transmitido en vivo por los principales medios de comunicación, evidencia el uso de la “máquina de producir escándalos” como estrategia central de campaña. Más allá del contexto electoral, esta lógica de confrontación y espectáculo mediático continuó tras la instalación del nuevo gobierno, contribuyendo a la erosión constante de la estabilidad política.

A pocas semanas de iniciado el nuevo gobierno, como ya mencionamos, se difundió un video del entonces canciller, el sociólogo Héctor Béjar, en el que declaraba – años antes de 2021– que el terrorismo en el Perú no era exclusivo de la década de 1980, sino que ya habían ocurrido atentados previamente, en los que habrían estado involucrados miembros de la Marina⁷⁷. Rápidamente, diversos medios de comunicación,

⁷⁴ BBC NEWS MUNDO, **Perú: al menos 16 personas mueren en un ataque atribuido a remanentes de Sendero Luminoso**, 24 may. 2021

⁷⁵ SWISSINFO, **Fujimori acepta reto de debatir en la tierra de Castillo, su rival en Perú**, 29 abr. 2021.

⁷⁶ LA REPUBLICA, **Kenji Fujimori se presentó en el mitin de su hermana Keiko en Chorrillos**, 15 may. 2021.

⁷⁷ BBC NEWS MUNDO, **Héctor Béjar: la renuncia del canciller de Perú tras sus polémicos comentarios sobre Sendero Luminoso**, 17 ago. 2021.

entre ellos Willax, impulsaron una campaña de defensa y solidaridad con las Fuerzas Armadas. En medio de la ola de ataques contra Béjar y el nuevo gobierno, Keiko Fujimori amplificó la controversia, vinculando nuevamente a la administración de Castillo con “radicales” y “terroristas”, y exigiendo que se resarciera la “humillación” a las Fuerzas Armadas con gestos claros de compromiso⁷⁸.

Otro escándalo que se desarrolló de manera sostenida fue el caso del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Durante varias semanas, se alimentó la indignación en torno al hallazgo de un parte policial de la década de 1980, en el que se mencionaba su supuesta vinculación con atentados atribuidos a Sendero Luminoso en Ayacucho. Para Keiko Fujimori, esto confirmaba un nexo del gobierno con grupos subversivos, reforzando su discurso de que el país estaba en una confrontación entre “peruanos” y “terroristas”, e instando al Congreso a tomar una “respuesta firme” ante esta situación⁷⁹.

La sucesión ininterrumpida de escándalos, en la que cada uno emergía cuando el anterior comenzaba a perder impacto, permitió al fujimorismo sostener una agenda de crisis permanente. Esta estrategia no solo mantenía en vilo el debate público, sino que también reforzaba el mensaje político central de Keiko Fujimori: la supuesta lucha contra la amenaza comunista y un gobierno vinculado al “terrorismo”.

La estrategia descrita se complementa con la táctica de “inundar la zona con mierda”, conceptualizada por Steve Bannon y citada por Strobl (2022), utilizada en el Perú para saturar el debate público con desinformación y escándalos, dificultando que los medios y la ciudadanía jerarquicen lo relevante. No obstante, en el caso peruano, esta lógica se ve matizada por el rol de los medios tradicionales, que no fueron meros receptores de esta estrategia, sino actores activos en la radicalización de la derecha y la construcción de una narrativa de crisis permanente contra Pedro Castillo. Así, fomentaron un clima de desconfianza y confusión que favoreció al fujimorismo y a la derecha conservadora. Un ejemplo clave fue la campaña de desinformación sobre un supuesto fraude electoral masivo en 2021, en la que se difundieron “pruebas” a través de redes sociales y medios afines, las cuales, pese a ser posteriormente desacreditadas, lograron movilizar a la base conservadora y debilitar la confianza en las instituciones electorales. Del mismo modo, los escándalos relacionados con las investigaciones fiscales a Castillo

⁷⁸ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 16 ago. 2021

⁷⁹ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 29 sep. 2021

durante su gobierno se convirtieron en herramientas de agitación mediática: cada nueva revelación era amplificadora hasta la saturación, siguiendo la lógica de Bannon, donde la verdad o falsedad de la información se volvía secundaria frente a su impacto político.

4.3 Realidades paralelas

El conservadurismo radicalizado utiliza la creación y difusión de realidades paralelas como herramienta clave para justificar su accionar político y deslegitimar a sus adversarios (STROBL, 2022, 2024). A través de narrativas conspirativas, promueve la idea de que existen poderes ocultos que buscan destruir la identidad nacional y los valores tradicionales. En estos relatos, se presentan como víctimas de una persecución constante por parte de élites políticas o fuerzas indefinidas, lo que refuerza la percepción de que su líder está siempre en peligro. Esta construcción discursiva fortalece la figura del líder como la única fuente de verdad y realidad, mientras cualquier afirmación crítica es tachada de falsa y tendenciosa. De este modo, la estrategia conspirativa no solo consolida la cohesión interna del movimiento, sino que también intensifica la polarización al posicionar a sus adversarios como enemigos de la nación y los valores tradicionales. Entre 2020 y 2022, Fuerza Popular y Keiko Fujimori adoptaron y amplificaron estas narrativas, integrándolas a su estrategia política para movilizar a sus bases y justificar su oposición radical al gobierno de Castillo.

Durante la pandemia de COVID-19, surgieron colectivos que cuestionaban los orígenes del virus, promovían tratamientos no avalados científicamente y rechazaban las medidas de distanciamiento social implementadas por el gobierno⁸⁰. Estas tendencias negacionistas se alimentaron de narrativas difundidas a través de comunidades digitales globales, amplificadas por líderes de derecha en países como, por ejemplo, Brasil y Estados Unidos, cuyos presidentes impulsaban discursos que ampliaban narrativas conspirativas sobre la pandemia. En el Perú, los principales referentes de la derecha conservadora inicialmente respaldaron las medidas del gobierno, pero en tanto que las restricciones se prolongaban, comenzaron a cuestionarlas. Aunque Keiko Fujimori, al inicio de la campaña electoral en enero de 2021, llamaba a respetar el distanciamiento social⁸¹, designó como responsable del área de salud de su programa de gobierno y candidato al Congreso a Ernesto Bustamante, biólogo y exjefe del Instituto Nacional de

⁸⁰ OJO PÚBLICO, **Poderes no santos en pandemia**, 20 dic. 2020.

⁸¹ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 10 ene. 2021.

Salud (INS), conocido por difundir teorías conspirativas sobre la pandemia y cuestionar el proceso de vacunación alegando una supuesta falta de efectividad de las vacunas⁸².

Asimismo, entre 2020 y 2022, Keiko Fujimori buscó presentarse como víctima de una persecución orquestada por la Fiscalía, a la que acusaba de actuar con motivaciones políticas. Esta narrativa fue compartida por diversos actores y organizaciones de derecha con miembros investigados en casos emblemáticos de corrupción, como Lava Jato o Los Cuellos Blancos. En este contexto, se construyó un clima de ataque permanente contra la Fiscalía, acusándola de estar infiltrada por poderes ocultos vinculados al entonces presidente Vizcarra. Grupos conservadores, como la Coordinadora Republicana, afirmaban que se estaba judicializando la política con el fin de destruir a sus adversarios⁸³. Cuando la Fiscalía solicitó al Poder Judicial dejar sin efecto la inscripción de la candidatura presidencial de Keiko a fines de 2020, en el marco de las elecciones del año siguiente, ella denunció que se trataba de un intento de sacarla de la contienda electoral y que era parte de una persecución que venía de tiempo atrás en su contra⁸⁴. Durante la campaña, reiteró que las restricciones judiciales que limitaban su movilidad eran una prueba de la persecución contra ella y el fujimorismo⁸⁵. Su paso por la cárcel, debido a la prisión preventiva dictada en el marco de las investigaciones por financiamiento ilícito a Fuerza Popular, fue resignificado en el discurso electoral: Keiko la presentó como una experiencia de redención y fortaleza personal, afirmando que la prisión le permitió reflexionar y renovarse como líder. De este modo, las investigaciones judiciales fueron transformadas en un relato épico de resistencia, donde Fujimori encarnaba la figura de la luchadora incansable que no se doblega ante la adversidad.

La narrativa más persistente trabajada por Keiko Fujimori durante el periodo analizado fue la del “peligro comunista”. Como se ha mencionado, Fujimori enfatizó que la mayor amenaza para el Perú provenía del “populismo” y la “izquierda radical”, a la que acusaba de estar detrás no solo de las protestas contra el gobierno de Merino, sino también de las movilizaciones de los trabajadores de la agroindustria que exigían mejores condiciones laborales. En su discurso, la “izquierda radical” y el “populismo” representaban riesgos para la estabilidad económica y política del país. No obstante, esta

⁸² OJO PÚBLICO, **Versión de Bustamante sobre que la vacuna produce COVID-19 es falsa**, 12 mar. 2021.

⁸³ COORDINADORA REPUBLICANA (@CoordinadoraRep), **Publicación en X (Twitter)**, 7 dic. 2020.

⁸⁴ KEIKO FUJIMORI (@KeikoFujimori), **Publicación en X (Twitter)**, 19 nov. 2020

⁸⁵ EL COMERCIO, **Keiko Fujimori: restricciones para salir de Lima y el antivoto ponen su campaña cuesta arriba**, 20 abr. 2021

narrativa fue transitando hacia una más específica: la construcción de la figura de Pedro Castillo, primero como candidato y luego como presidente, como la encarnación tangible de esa amenaza comunista. Esta percepción se reforzaba con los nombramientos como ministros a figuras como Héctor Béjar e Iber Maraví, cuya presencia en el gabinete fue instrumentalizada por Keiko Fujimori para reforzar la idea de un gobierno vinculado al extremismo.

Esta narrativa se complementaba con otras promovidas por grupos conservadores y extremistas, que emergieron en el contexto de las elecciones y el gobierno de Pedro Castillo como indica Coronel (2024). Una de estas narrativas es la que la Coordinadora Republicana reproducía: estamos ante complot global liderado por organizaciones como la Open Society de George Soros, que promueven una agenda ideológica vinculada al feminismo, el aborto, el multiculturalismo, la diversidad sexual y los derechos humanos. A esto se sumaba la teoría de una supuesta estrategia regional de la izquierda internacional articulada a través de plataformas como el Foro de São Paulo, con el propósito de tomar el control de los gobiernos latinoamericanos. Adhiriendo a estas narrativas Keiko Fujimori y Fuerza Popular se vincularon en 2021 al Foro de Madrid, promovido por el partido español Vox⁸⁶. En esa línea, durante el evento Viva 21, Fujimori afirmó que dicha plataforma representaba el “símbolo de la unidad hispana” frente al socialismo del siglo XXI y expresó compartir con Vox la defensa de la “vida y la familia”⁸⁷. De esta manera, el fujimorismo articuló su narrativa local de amenaza comunista con las teorías conspirativas globales, reforzando la lógica de la guerra cultural y legitimando su estrategia de polarización radical.

La narrativa de la “ideología de género” ha sido adoptada por Fuerza Popular y Keiko Fujimori en los últimos años, especialmente a medida que han tejido alianzas con grupos religiosos evangélicos y católicos. Como señala Diniz (2018), esta narrativa antigénero fue construyéndose progresivamente desde la Iglesia católica, como un intento de frenar la erosión de su influencia moral sobre la sociedad, y luego se expandió al mundo evangélico. En el Perú, Rodríguez (2019) documenta la presencia de diversos núcleos conservadores que impulsaron esta lucha cultural contra la “ideología de género”, haciéndose más visibles con la campaña *Con Mis Hijos No Te Metas* (CMHNTM) en

⁸⁶ OJO PÚBLICO, *Ultraderecha en Latinoamérica: los socios de VOX y la desinformación*, 7 ago. 2023.

⁸⁷ PERÚCHECK, *VOX en el Perú: ¿En qué consiste la Carta de Madrid que firmaron tres partidos políticos peruanos?*, 1 oct. 2021.

2016. Las movilizaciones que se desplegaron durante esta campaña y otras posteriores facilitaron el desarrollo de vínculos entre estos núcleos y los distintos partidos de derecha (RODRÍGUEZ, 2019).

En este contexto, Keiko Fujimori no solo firmó compromisos con varios de estos sectores, sino que incorporó abiertamente sus demandas. Durante un debate presidencial de 2021, prometió eliminar la “ideología de género” de la educación y sostuvo que los padres debían participar en la elaboración de la curricula escolar, bajo la premisa de que la educación es una responsabilidad compartida con el Estado. Esta posición se alineaba con la creciente influencia de los sectores religiosos organizados, que promovían la idea de que los contenidos educativos vinculados a la igualdad de género eran una amenaza para la familia y los valores tradicionales. Asimismo, cuando Argentina aprobó en 2020 la legalización del aborto hasta la semana catorce de gestación, sin restricciones en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer (ANZORENA, 2023), Fuerza Popular reaccionó reafirmando su postura ‘provida’. Argumentaron que la Constitución de 1993 y sus principios partidarios defendían la vida desde la concepción, posicionándose en contra de cualquier reforma que ampliara los derechos reproductivos. De esta manera, el fujimorismo consolidó su cercanía con estos otros sectores conservadores, articulando su estrategia política con las guerras culturales globales y reforzando su discurso de defensa de la familia tradicional como bastión contra la influencia progresista.

Capítulo IV

A modo de conclusiones

El presente trabajo analizó la influencia del crecimiento y radicalización de la derecha en el escenario político del Perú entre 2020 y 2022, centrándose en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, en un contexto marcado por profundas crisis sociopolíticas. Desde la transición democrática en 2001, el sistema político peruano se ha erosionado debido al descrédito de las elecciones y los compromisos electorales incumplidos, así como a la persistencia del modelo neoliberal. Este modelo, aunque impulsó el crecimiento económico, también reprodujo desigualdades y conflictos sociales que han marcado la historia reciente del país. En este contexto, el movimiento fujimorista ha logrado consolidarse como una fuerza política dominante dentro del espectro de la derecha, mientras otras organizaciones han perdido relevancia.

Desde 2016, el espectro de la derecha peruana ha experimentado un proceso de radicalización, marcado por una creciente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, así como por la aparición de nuevos grupos y colectivos políticos que se ubican a la derecha del fujimorismo. Estas organizaciones, con agendas similares, pero más extremas, han capitalizado la crisis política y social para ganar visibilidad y posicionarse en el debate público. Este fenómeno plantea interrogantes sobre las causas de esta radicalización, su impacto e influencia en el sistema político y su relación con la creciente polarización en el país.

El presente trabajo cumplió con el objetivo de analizar la influencia del crecimiento y la radicalización de la derecha en el escenario político peruano durante el período 2020–2022, con un enfoque particular en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. En primer lugar, se analizaron las condiciones históricas, económicas y políticas que facilitaron la consolidación de este fenómeno, identificando que el modelo neoliberal implementado en la década de 1990 sentó las bases para la polarización y erosionó la legitimidad del sistema político. En segundo lugar, la revisión de los estudios previos permitió contextualizar el fenómeno dentro de la literatura académica. Finalmente, se evaluó la influencia del crecimiento de la extrema derecha en el sistema político peruano, concluyendo que este proceso ha intensificado la polarización y debilitado la estabilidad democrática del país.

La radicalización de la derecha en los últimos años se ha nutrido de factores históricos y coyunturales. Entre los factores históricos destacan el legado autoritario del gobierno de Alberto Fujimori y la consolidación de un Estado neoliberal eficiente y moderno para atraer inversiones, pero débil y fragmentado en el ámbito social. La neoliberalización del país ha exacerbado las desigualdades estructurales dado el carácter centralmente dependiente de las industrias extractivas de exportación desarrolladas en las últimas décadas. Estas actividades han generado nuevas franjas de trabajadores, como en el caso de la agroindustria de exportación, donde han emergido conflictos por mejores condiciones laborales y salariales. Asimismo, las industrias extractivas han provocado intensos conflictos socioambientales en los territorios donde operan, con demandas de mejor redistribución de las rentas o, en muchos casos, con rechazos abiertos a estas actividades por las amenazas que representan para las dinámicas y economías locales.

Asimismo, en el mundo del trabajo se ha consolidado la división entre una mayoría de trabajadores insertos en la informalidad, con bajos salarios, alta precariedad y baja productividad, y una minoría que accede a empleos formales, con mejores salarios, ‘menor’ precariedad y mayor productividad. Todo ello ha contribuido a un escenario de crisis de legitimidad y creciente descontento social con relación al modelo de desarrollo neoliberal predominante. A lo largo de las décadas, estas tensiones se han manifestado de distintas maneras: por un lado, en procesos electorales marcados por una polarización constante entre propuestas de cambio o continuidad del modelo; y por otro, en protestas y movilizaciones que han funcionado como canales de expresión de demandas sociales que el sistema político no ha logrado atender.

Con relación a los factores coyunturales, desde 2016 en adelante, la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, junto con los impactos y las investigaciones judiciales de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, aceleraron los episodios de crisis política, derivando en una creciente inestabilidad sociopolítica. Entre 2020 y 2022, esta inestabilidad se profundizó con una sucesión de eventos clave: la vacancia del presidente Martín Vizcarra, la breve instalación del gobierno conservador de Manuel Merino y las intensas protestas sociales en su contra; las movilizaciones de los trabajadores de la agroindustria; la polarización durante la primera y segunda vuelta electoral; las protestas contra el gobierno de Castillo, las reiteradas tentativas de vacancia impulsadas por el Congreso y, finalmente, la destitución de Castillo en diciembre de 2022. Estos episodios

consolidaron un escenario de crisis sociopolítica prolongada que se extiende más allá del período analizado en esta investigación.

Todos estos factores configuran una crisis profunda de la hegemonía neoliberal en el Perú que, en un contexto internacional de múltiples crisis, ha alimentado la radicalización de las posturas conservadoras, las cuales perciben las tensiones sociopolíticas internas como una amenaza creciente en los últimos años.

En los primeros años de la década del 2000, el fujimorismo comenzó un proceso de rearticulación política, centrado en la defensa del gobierno de Alberto Fujimori y su regreso al Perú para las elecciones de 2006. A pesar de su detención en Chile y la campaña centrada en su liberación, el fujimorismo logró un cuarto lugar en las elecciones, lo que permitió consolidar a Keiko Fujimori como líder del movimiento. En 2011, el fujimorismo defendió el legado de Alberto Fujimori, pero enfrentó el rechazo por las violaciones de derechos humanos en los años noventa. En 2016, Keiko moderó su discurso, reconociendo esas violaciones, y utilizó el legado de su padre en la lucha contra la inseguridad como un argumento clave en su campaña, buscando conectar con el electorado a través de una analogía histórica: si en los años noventa derrotaron al terrorismo, ahora harían lo mismo con la delincuencia.

A partir de la confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento en 2016, y los sucesivos episodios de crisis que culminaron con el cierre del Congreso en 2019, el fujimorismo experimentó un severo desgaste político. Este proceso llevó a la disminución drástica de su representación parlamentaria, pasando de 73 de 130 curules a solo 15 en las elecciones complementarias de 2020. La hostilidad de la bancada fujimorista hacia los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, sumada a la defensa de varios implicados en los escándalos de Lava Jato y Cuellos Blancos –donde incluso Keiko Fujimori estaba involucrada– contribuyó significativamente al debilitamiento del fujimorismo.

En este contexto, el fujimorismo, enfrentando el desafío de recuperarse del desgaste político generado por los episodios de crisis previos, fue adoptando narrativas y posiciones cada vez más radicalizadas. Este proceso de radicalización entre 2020 y 2022 puede entenderse como un intento de recuperar la iniciativa y reforzar su posición como el principal partido de derecha. Aunque el fujimorismo ha sido históricamente conservador y pragmático en sus posturas políticas, en los últimos años esta característica

ha sido reemplazada por una orientación cada vez más conservadora y radical. Así, influenciado por la tendencia de radicalización de las derechas a nivel regional y global, el fujimorismo asumió posiciones más polarizantes y extremas, como se puede observar en el período analizado.

Como da cuenta Duarez (2024), la radicalización de las tradicionales posiciones conservadoras se extiende a organizaciones como Renovación Popular, y también puede observarse en colectivos que agrupan a políticos conservadores, como la Coordinadora Republicana. En otras palabras, el fenómeno de la radicalización de las derechas empuja a que posiciones tradicionalmente conservadoras se radicalicen. Quedan pendientes nuevas investigaciones que exploren en mayor profundidad la radicalización de otras organizaciones tradicionalmente conservadoras en el Perú.

Referencias bibliográficas

- ACUERDO NACIONAL. Consensos por el Perú. Lima: Acuerdo Nacional, 2021.
- ALARCO, G. Crisis financiera internacional y patrón de crecimiento de una economía mediana y dependiente: el caso del Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, 2010.
- ALCÁZAR, L.; ROJAS, V.; LÓPEZ DE ROMAÑA, E. Medidas de protección social del gobierno peruano en época de la COVID-19. Repositorio institucional GRADE, 2022.
- ÁLVAREZ-BENAVIDES, A.; TOSCANO, E. Nuevas articulaciones de la extrema derecha global: Actores, discursos, prácticas, identidades y los retos de la democracia. *Política y Sociedad*, v. 58, n. 2, 2021.
- ANDERSON, P. Neoliberalismo: un balance provisorio. In *La trama del neoliberalismo, mercado, crisis y exclusión social*. Buenos Aires: Clacso. 2003. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf>
- ANGULO-GIRALDO, M; BOLO-VARELA, O. Medios de comunicación y conflictos sociales durante la pandemia por covid-19: análisis de los enfoques presentes en la prensa de Lima durante las protestas contra el gobierno interino de Manuel Merino (2020). Lima: *Desde el Sur*, v. 13, n. 1, 2021.
- ANZORENA, C. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina: obstáculos y desafíos de la política en acto a 18 meses de su implementación (2021-2022). Argentina: *Salud Colectiva*, v. 19, 2023.
- BIROLI, F.; CAMPOS MACHADO, M. D. D.; VAGGIONE, J. Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina. São Paulo: Boitempo Editorial, 2020
- BURAWOY, M. A new sociology for new social movements. Paris: Rhuthmos, 2015 Rhuthmos. Recuperado de: <http://rhuthmos.eu/spip.php?article1486>.
- BLANCAS, C. El referéndum en la Constitución peruana. *Revista Elecciones*, [S. l.], v. 3, n. 3, 2004. Disponible en: <https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/article/view/26>.
- CAMPOS, C. El Partido Republicano: el proyecto populista de la derecha radical chilena. *Revista Uruguay de Ciencia Política*, v. 30, n. 1, 2021.

- CARO, I.; QUITRAL, M. La nueva derecha radical chilena en el contexto internacional: auge e ideología. *Política y Sociedad*, v. 60, n. 1, 2023.
- CEPES. Agroindustria y conflictos laborales, 4 dic. 2020.
- CONNELL, R.; DADOS, N. Where in the world does neoliberalismo come from?. *Theor Soc* 43, 2014. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11186-014-9212-9>
- CONTRERAS, C.; CUETO, M. Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas por la independencia hasta el presente. 5. ed. Lima: IEP; PUCP; Universidad del Pacífico. CIUP, 2013.
- CORONEL, O. La nueva derecha radical de base en el Perú. Argentina: Desafíos, v. 36, n. 2, 2024.
- COTLER, J. Clases, estado y nación en el Perú. Lima, IEP. 1986.
- CHAMPA, D. Análisis periodístico de las fake news en tiempos de pandemia desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021, transmitidas en los programas: Beto a Saber y Rey con Barba del canal Willax TV. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2021.
- CHÁVEZ, B. Características del movimiento social espontáneo de Arequipa de junio del 2002. Tesis (Licenciatura en Historia). Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, Escuela Profesional de Historia, 2019
- DANCOURT, O; MENDOZA, W. Perú 2008-2009: del auge a la recesión, choque externo y respuestas de política macroeconómica. In DANCOURT & JIMENEZ (eds). Crisis internacional, impactos y respuestas de política económica en Perú. Lima, Fondo Editorial PUCP, 2009.
- DADOS, N.; CONNELL, R. The Global South. *Contexts*, v. 11, n. 1, 2012.
- DADOS, N.; CONNELL, R. Neoliberalism in world perspective: Southern origins and Southern dynamics. In D. CAHILL, M.; COOPER, M.; KONINGS AND D. PRIMROSE (Eds.), *The SAGE Handbook of Neoliberalism*. London: Sage. 2018.
- DARGENT, E.; ROUSSEAU S. Perú 2020: ¿El quiebre de la continuidad? *Santiago: Revista de ciencia política*, v. 41, n. 2, 2021.
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.º 178 – Diciembre 2018. 2018.

- DÍAZ, J. El rol del Estado peruano en la gestión de los conflictos sociales. [Tesis de maestría]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado, 2022.
- DINIZ, R. La invención de la “ideología de género”: la emergencia de un escenario político-discursivo y la elaboración de una retórica reaccionaria antigénero. *Periodicos electronicos en psicologia*, 2018.
- DUÁREZ, J. L. El conservadurismo radical en Perú. El Caso de Renovación Popular (2020- 2024). *Letras (Lima)*, v. 95, n. 141, 2024.
- DUMÉNIL, G.; LÉVY, D. A Crise do neoliberalismo. São Paulo: Boitempo, 2014.
- DURAND, A. Resultados (no) deseados. Elecciones, democracia y nuevo tiempo político en Perú. *Estudios Latinoamericanos*, n. 49, 2022.
- DURAND, F. La nueva derecha peruana: orígenes y dilemas. In *Estudios Sociológicos* vol. 08, no. 23. México DF, Colegio de México. 1990.
- DURAND, F. Cuando el poder extractivo y la captura del Estado. Lima: Oxfam, 2016.
- DURAND, F.; CRABTREE, J. Elites de poder y captura política. Lima, Red para el desarrollo de las CCSS. 2017.
- DURAND, A. Coaliciones golpistas, crisis de la democracia en la destitución de Pedro Castillo. In: TZEIMAN, A.; ENRICO, D. (Eds.). *La crisis de la democracia en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, 2024.
- EGUREN, F. Cuarenta años después de la reforma agraria, la concentración de la propiedad de la tierra reaparece. *La Revista Agraria*, n. 107, mayo 2009.
- EGUREN, F. De la reforma agraria al neolatifundismo. In: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES – UCH. *El Perú de los últimos 50 años*. Lima: UCH, 2014.
- ESCALANTE, F. Historia mínima del neoliberalismo. México DF, El colegio de México. 2015.
- FERNÁNDEZ-MALDONADO, E.; NAVARRO, D. A. ¿Protestas o movimientos sociales? Los casos de Keiko No Va y Peruanos contra el TPP. *Perú Hoy*, n. 29, 2016.
- FERNANDEZ-MALDONADO, E. El conflicto laboral en la agroindustria: vuelve la lucha de clases. *Revista Quehacer*, v. 9, 2022.

- FILGUEIRA, F. et al. América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social. Serie Políticas Sociales, n. 238. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
- FOUSKAS, Vassilis K. et al. China & the USA. Globalization and the Decline of America's Supremacy. London: Palgrave, 2021.
- FORD, E. El proceso de transición democrática en el Perú y el liderazgo de Toledo. Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, v. 2, n. 2, p. 143–156, 2004.
- FORT, R.; ESPINOZA, M.; ESPINOZA, A. COVID-19 y las migraciones de la ciudad al campo en el Perú: Identificación de amenazas y oportunidades para el uso sostenible del capital natural. Banco Interamericano de Desarrollo, 2021.
- FLORES, A. La tradición autoritaria: Violencia y democracia en el Perú. Lima: SUR. Casa de Estudios del Socialismo-APRODEH, 1999.
- FRANCKE, P.; CRUZADO, E. Crisis económica y política social. In: DANCOURT, O.; JIMENEZ, F. (Eds.). Crisis internacional, impactos y respuestas de política económica en Perú. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2009.
- GAMERO, Julio. Perú: Impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales. Organización Internacional del Trabajo, 2020.
- GOLDSTEIN, A. Las elites y las derechas en oposición al gobierno de Pedro Castillo en Perú. Discursos del Sur, revista de teoría crítica en Ciencias Sociales, n. 9, 2022.
- GOLDSTEIN, A. Perú: la derecha radical en transición hacia un orden autoritario. Cadernos PROLAM/USP, v. 23, n. 48, 2024.
- GONZALES DE OLARTE, E. Crecimiento, desigualdad e ingobernabilidad en el Perú. In: VICH, Víctor (Ed.). El Estado está de vuelta: Desigualdad, diversidad y democracia. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2005.
- GUERRA, F. Notas preliminares sobre la experiencia de Izquierda Unida. In ADRIANZEN, A. (Ed.), Apogeo y crisis de la izquierda peruana: hablan sus protagonistas. Lima, Idea Internacional; Fondo editorial UARM. 2011.
- GUERRA, R.; BADILLO, R. The rise of far-right in Latin America: Argentina, Brazil and Chile in comparative perspective. Revista Republicana, v. 2021, n. 31, 2021.
- HARVEY, D. Breve historia del neoliberalismo. Madrid, Akal. 2007.

- HEITMEYER, Wilhelm. *Autoritäre Versuchungen. Firma der Bedrohung I.* Berlin, 2018.
- HERNÁNDEZ, M. *Acuerdo nacional: pasado, presente y futuro.* Stockholm: International IDEA, 2004.
- KATZ, C. ¿Fascismo, populismo o ultraderecha?: Y el renovado formato de la vieja derecha latinoamericana. *Argumentum*, v. 15, n. 1, 2023.
- KLAREN, P. *Nación y sociedad en la historia del Perú.* Lima, IEP. 2012.
- ILIZARBE, C. *La democracia y la calle: protestas y contrahegemonía en el Perú.* Lima: IEP, 2022.
- ILIZARBE, C. Perú 2022: Colapso democrático, estallido social y transición autoritaria. *Revista de Ciencia Política*, [S. l.], v. 43, n. 2, 2024. Disponible em: <https://revistacienciapolitica.uc.cl/index.php/rcp/article/view/66257>
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. *Informe técnico: Evolución de la Pobreza 2009-2020.* INEI, 2021.
- LEÓN, A. *Todo sea por el ‘Chino’: Alberto Fujimori y la unidad del fujimorismo para las elecciones generales del 2006.* [Tesis de maestría]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Historia, 2023.
- LUST, J. El carácter estructural de la precariedad laboral en el Perú. *Scientia*, v. 22, n. 22, 2020.
- LYNCH, N. La derecha peruana de encomenderos a neoliberales, pero siempre encomenderos. *Discursos del Sur: revista de teoría crítica en Ciencias Sociales*, n. 6, 2020.
- LLOPIS, J. *Le fujimorisme post-Fujimori : genèse d’un non-clivage.* [Master] Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 2017.
- MARTÍNEZ, G. *Economía de arraigo en el valle de Tambo: conflicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, Perú.* masterThesis–[s.l.] Quito, Ecuador: Flacso Ecuador, 2017.
- MARTINEZ, K. *Accesibilidad al crédito agrario en las zonas rurales del Perú: limitaciones y propuestas.* *Económica*. abr. 2023.
- MELÉNDEZ, C.; LEÓN, C. Perú 2008: el juego de ajedrez de la gobernabilidad en partidas simultáneas. *Santiago: Revista de ciencia política*, v. 29, n. 2, 2009.
- MELÉNDEZ, Carlos. *La derecha que se bifurca: las vertientes populista-conservadora y tecnocrática-liberal en Perú post-2000.* *Colombia Internacional*, n. 99, 2019. Disponible em:

<https://doi.org/10.7440/colombiaint99.2019.01>.

- MELÉNDEZ, C. La ultraderecha en Perú: la irrupción electoral de renovación popular a nivel nacional y subnacional. Chile: Friedrich Ebert Stiftung, 2023.
- MENDOZA, M. Perú, entre la crisis orgánica y las élites políticas capturadas. Un ensayo sociohistórico. Alicante: Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials, v. 4, n. 2, 2023.
- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Plan Nacional de Diversificación Productiva. Perú, 2014.
- MORÁN, J. M. ¿Cómo cautiva a la juventud el neoconservadurismo? Rebeldía, formação e influencers de extrema direita na América Latina. Methaodos: revista de ciências sociais, v. 11, mn. 1, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i1.649>.
- MUDDE, C. Populist radical right parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- MUDDE, C.; KALTWASSER, C. R. Populismo: uma breve introdução. Madrid: Alianza Editorial, 2019.
- MUDDE, C. La ultraderecha hoy. Buenos Aires: Paidós, 2021.
- NAVARRO, N. La Organización Partidaria Fujimorista a 20 años de su Origen. [Tesis de licenciatura]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias Sociales, 2011.
- NEYRA, R. Conflictos socioambientales en el Perú, extractivismo, colonialidad y violencia: La colonialidad como elemento vector del extractivismo. trAndeS Working Paper Series, n. 4. Berlin: Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin, 2018.
- OROPEZA, O.; MENDOZA, M. El debido procedimiento administrativo y vacancia presidencial en el Perú. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, v. 7, n. 2, 2023.
- PAYNE, Corey; SILVER, Beverly. Dominação sem hegemonia e os limites do poder mundial dos Estados Unidos. Salvador, Caderno CRH, vol. 35, 2022.
- PEÑARANDA, César. Incremento de la evasión tributaria afecta la productividad impositiva. Lima: La Cámara, n. 735, 2016.
- GIL PIEDRA, R. “Viva la vida, la familia, la libertad y la patria”: anotaciones sobre la derecha política y el movimiento conservador en el Perú en clave comparada. Lima: IEP, 2022.

- POLANYI, K. La gran transformación: crítica del liberalismo económico. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1989.
- QUIROZ, A. Historia de la Corrupción en el Perú. Lima, IEP; Instituto de Defensa Legal. 2013.
- RAGIN, C. La construcción de la investigación social, introducción a los métodos y su diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.
- REYNA, C. La anunciación de Fujimori, Alan García 1985-1990. Lima, Desco. 2000.
- RODRÍGUEZ, G. P. Vueltas y revueltas de la derecha peruana en el siglo XXI. Estudios Sociales del Estado, v. 5, n. 9, 2019.
- ROVIRA, C. The programmatic (over)adaptation of the Chilean right and the irruption of the radical populist right. Colombia Internacional, n. 99, 2019.
- ROUSSEAU, S. Populismo y política antigénero en el Perú: de la sociedad civil al escenario electoral. European Review of Latin American and Caribbean Studies, n. 113, 2022. Disponible em: <http://doi.org/10.32992/erlacs.10841>.
- RUIZ, C.; CAVIEDES, S. El poder constituyente de la revuelta chilena. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022.
- SAIDEL, M. O neoliberalismo autoritário e o auge das novas direitas. História Unisinos, v. 2, p. 263–275, 2021. Disponible em: <https://doi.org/10.4013/hist.2021.252.06>.
- SÁNCHEZ-SIERRA, A. Política tributaria: resultado económico del gobierno central y la curva laffer en el Perú. Universidad Nacional Federico Villarreal, 2022.
- SILVER, B. Fuerzas de trabajo, los movimientos obreros y la globalización desde 1870. Madrid, Akal, 2003.
- STANDING, G. O precariado: a nova classe perigosa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.
- STROBL, N. La nueva derecha: un análisis del conservadurismo radicalizado. Buenos Aires: Katz Editores, 2022.
- STROBL, N. The authoritarian direction of radicalised conservatism. In: FRANKENBERG, G.; HEITMEYER, W. (Eds.). Drivers of authoritarianism: paths and developments at the beginning of the 21st century. [S.l.]: Edward Elgar Publishing, p. 151–166, 2024.

- TANAKA, M. Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada. Lima: IEP, 1998.
- TANAKA, M; MARCUS-DELGADO, J. Lecciones del final del fujimorismo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2001
- TANAKA, M. Democracia sin partidos. Perú 2000-2005: los problemas de representación y las propuestas de reforma política. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2005.
- TANAKA, M. Las protestas sociales en Perú, entre el fujimorismo y la “transición democrática” (1995-2004). In MASSAL, J. (Ed.), ¿Representación o participación? Los retos y desencantos andinos en el siglo XXI. Bogotá, Institut français d’études andines. 2008.
- TOOZE, Adam. Crashed: how a decade of financial crisis changed the world. New York: Viking, 2018.
- TOOZE, Adam. El apagón, como el coronavirus sacudió la economía mundial. España: Editorial Critica, 2021
- TUESTA, F. Perú político en cifras. Lima, Fundación Friedrich Ebert. 2001.
- TRAVERSO, Enzo. Las nuevas caras de la derecha. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2018.
- UBILLUZ, J. C. Sobre la especificidad de la derecha radical en América Latina y Perú: de Hitler y Mussolini a Rafael López Aliaga. Lima, Discursos del Sur: revista de teoría crítica en Ciencias Sociales, n. 7, 2021.
- VAGGIONE, J. M. El entramado neoconservador en América Latina: la instrumentalización de la ideología de género en las democracias contemporáneas. Las Torres de Lucca, v. 11, n. 1, p. 52-64, 2022. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.5209/ltl.79437>.
- VAZQUEZ, O. La restauración conservadora en América Latina. TLA-MELAUUA: revista de ciências sociais, n. 48, 2020.
- WATKINS, Susan. Paradigm shifts. London: New Left Review, n. 128, March–April, 2021.